

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

G/VAL/W/97

26 de marzo de 2002

(02-1534)

Comité de Valoración en Aduana

RECAPITULACIÓN DE LOS DEBATES CELEBRADOS EN DIVERSOS ÓRGANOS DE LA OMC SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN EN MATERIA DE VALORACIÓN EN ADUANA

Nota de antecedentes preparada por la Secretaría

A petición de las delegaciones, la Secretaría ha recopilado las secciones pertinentes de los documentos en los que se han examinado los incisos del párrafo 7 del documento Job(01)/152/Rev.1 y/o el tema del párrafo 8.3 del documento WT/MIN(01)/17. A continuación figura una lista de los documentos que se adjuntan y que se presentan en orden cronológico.

ÍNDICE

Página

I.	PROPUESTAS.....	3
A.	WT/GC/W/227.....	3
B.	WT/GC/W/354, PÁRRAFOS 28 A 30.....	6
C.	WT/GC/W/355, PÁRRAFOS 30 A 32.....	6
D.	JOB(99)/3169, PÁRRAFOS 79 A 85.....	7
E.	JOB(99)/3169/ADD.1.....	9
II.	ACTAS DE REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL.....	9
A.	REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 22 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2000 (WT/GC/M/56 - PÁRRAFOS 149 A 161).....	9
B.	REUNIÓN CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2000 (WT/GC/M/59 - PÁRRAFOS 21 A 26).....	13
C.	REUNIÓN CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2000 (WT/GC/M/62 - PÁRRAFOS 7 A 9 Y 22 A 24).....	14
D.	REUNIÓN CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2001 (WT/GC/M/64 - PÁRRAFOS 32 Y 33, 51 A 62, 72 A 76 Y 84 A 86).....	16
E.	REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2001 (WT/GC/M/67 - PÁRRAFOS 13, 16, 25 A 27, 34 Y 35, 50 Y 51 Y 54 Y 55).....	25
F.	REUNIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 3 DE OCTUBRE Y 1º DE NOVIEMBRE DE 2001 (WT/GC/M/70 - PÁRRAFOS 5 Y 6 Y 15 Y 16).....	29
III.	DECISIÓN DEL CONSEJO GENERAL.....	30
A.	DECISIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2000 (WT/L/384).....	30

IV.	DEBATES CELEBRADOS EN EL COMITÉ DE VALORACIÓN EN	
	ADUANA	33
A.	ACTA DE LAS REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 7, 13, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2000 (G/VAL/M/17 - PUNTO 2).....	33
B.	INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL CONSEJO GENERAL (G/VAL/36)	52
C.	INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL (WT/GC/49).....	57

Anexo

I. PROPUESTAS

A. WT/GC/W/227

PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE 1999

Propuestas sobre la aplicación del Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo VII del GATT de 1994 en virtud del párrafo 9 a) i) de la
Declaración Ministerial de Ginebra

Comunicación de la India

Se ha recibido de la Misión Permanente de la India la siguiente comunicación, de fecha 2 de julio de 1999.

1. Asunto: Declaración Ministerial relativa al rechazo del método de cálculo del valor de transacción en caso de duda

1. El artículo 1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 debe considerarse en conjunción con el artículo 8, que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador pero no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Por consiguiente, el Acuerdo establece que las Administraciones de Aduanas deben aceptar el valor de la transacción, salvo en las circunstancias especificadas en el artículo 1. El artículo 17 del Acuerdo reconoce que en caso de duda las Administraciones de Aduanas pueden comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. El párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo garantiza la plena cooperación de los importadores en las investigaciones realizadas en las Administraciones de Aduanas en ese contexto.

2. No obstante, estas disposiciones son insuficientes para tratar situaciones en las que exista colusión entre el importador y el exportador para subvalorar las mercancías con objeto de evadir el pago de derechos de aduana. La comprobación y las investigaciones realizadas por las Administraciones de Aduanas, como se prevé en el artículo 17, no permitirían determinar el fraude en esos casos. Además, no puede esperarse que el importador coopere plenamente con las Administraciones de Aduanas cuando él mismo participa en la subvaloración de las mercancías y en la supresión de información.

3. En la reunión de Marrakech de abril de 1994, los Ministros adoptaron una decisión para tratar esta cuestión ("Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado" adoptada por el Comité de Valoración en Aduana de la OMC en su primera reunión, celebrada el 12 de mayo de 1995 de conformidad con la Decisión de Marrakech). La Decisión establece los procedimientos que deben seguirse en esos casos y puede ser particularmente útil en los casos en que no se presente la factura del fabricante o cuando el valor declarado sea muy inferior a los precios vigentes en el comercio según se indique en publicaciones internacionales acreditadas del momento o cuando el valor sea inferior al precio al que

se vendan las mercancías en el curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia.

Propuesta

4. Con miras a su aplicabilidad práctica, esta decisión podría incorporarse al propio Acuerdo de la OMC ya que ayudará considerablemente a tratar el problema de la subvaloración, que al parecer es un problema endémico en muchos países en desarrollo, en particular en aquellos que aplican tipos de derechos de aduana relativamente elevados.

2. Asunto: Acuerdo multilateral de intercambio de información sobre valoración en aduana

5. Las disposiciones del Acuerdo no consideran las situaciones en las que el exportador presenta una declaración de exportación correcta a las autoridades aduaneras pero el importador procede unilateralmente a una falsa declaración del valor a las autoridades aduaneras del país importador para eludir el pago del correspondiente derecho de aduana. Para hacer frente a este tipo de problema, se ha establecido la práctica de celebrar acuerdos bilaterales de intercambio de información sobre valoración en aduana. No obstante, no constituye una solución práctica y duradera del problema.

Propuesta

6. Se propone una solución multilateral que permita, en casos dudosos, que las Administraciones de Aduanas de los países importadores soliciten y obtengan información de las administraciones de los países exportadores sobre los valores de exportación contenidos en las declaraciones, y ello en un plazo determinado.

3. Asunto: Determinación del valor en aduana sobre la base del valor de transacción de mercancías idénticas o similares

7. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, los artículos 2 y 3 del Acuerdo, sucesivamente, disponen que la Administración de Aduanas y el importador celebren consultas para determinar las "mercancías idénticas" o las "mercancías similares" a efectos del valor de transacción. El Acuerdo estipula que si al aplicar esos artículos se dispone de más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares, para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo. Esta disposición favorece a los importadores y podría conducir a la manipulación. En realidad, en muchos casos la diferencia entre el valor más bajo y el más alto de mercancías idénticas o similares es muy amplia y puede haber una concentración de transacciones en el nivel más elevado de la gama de valores. En los casos en que la transacción en el nivel más bajo se deba a un envío realizado deliberadamente en ese nivel, por ejemplo, un envío experimental a un valor contenido, la resultante aplicación de la disposición según la cual debe utilizarse el valor más bajo para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas puede no satisfacer los principios generales de valoración establecidos en esos artículos.

Propuesta

8. Este tipo de situaciones necesita una solución adecuada para evitar la manipulación de los precios de importación y permitir una determinación que se aproxime más al "valor de transacción". Se propone modificar el Acuerdo para que se tome en cuenta el valor más alto cuando se halle más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

4. Asunto: Comisiones de compra

9. Con arreglo al artículo 8 del Acuerdo, puede ajustarse el precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se consideran parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador pero no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Por lo tanto, al determinar el valor en aduana deben tenerse en cuenta las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Las "comisiones de compra" son pagos hechos por un importador a su agente por los servicios que le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración. En algunos casos, los agentes pueden también comprar las mercancías al fabricante o comerciante en el país de que se trate empleando fondos propios, y volver a facturar la compra al importador. En esos casos, el Acuerdo reconoce que el precio de la segunda factura es el valor de transacción. Sin embargo, es frecuente la manipulación por medio de la reducción artificial de los precios de la segunda factura en beneficio mutuo. La exclusión de las comisiones de compra del cálculo del valor fomenta la subfacturación y el fraccionamiento artificial del valor, en particular cuando las compras son realizadas en primer lugar por los agentes y facturadas de nuevo al importador.

Propuesta

10. Por lo tanto, las comisiones de compra deberían tenerse en cuenta al determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, ya que son un elemento legítimo del costo descargado de las mercancías importadas.

5. Asunto: Costo de los servicios como ingeniería, creación y diseños

11. El apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo autoriza a añadir el costo de los servicios como ingeniería, creación y diseños siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción de las mercancías importadas, únicamente cuando esos servicios se suministren fuera del país de importación. Esta disposición ofrece la posibilidad de fraccionar el valor de importación alegando que parte de los servicios se suministraron en el propio país importador.

Propuesta

12. Se propone que el costo de esos servicios, que son parte integrante del valor de las mercancías importadas, se incluya en la valoración independientemente de que los servicios se realicen en el país de importación.

6. Asunto: Importaciones realizadas por un agente, distribuidor o concesionario exclusivo

13. La valoración de las importaciones efectuadas por un agente, distribuidor o concesionario exclusivo de empresas grandes, incluidas las empresas transnacionales, supone un problema ya que, en virtud del párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo, no se considera automáticamente que esas entidades son "personas vinculadas". Si esas entidades venden un producto a precios especialmente reducidos, es posible que las Administraciones de Aduanas no dispongan de medios para comprobar la veracidad de esos precios especiales. Los párrafos 2 a) y b) del artículo 1 prevén salvaguardias con respecto a la aceptación del valor de transacción a efectos aduaneros entre un comprador y un vendedor que estén "vinculados".

Propuesta

14. A fin de hacer recaer en los agentes, distribuidores o concesionarios, según el caso, la carga de la prueba de que su vinculación no ha influido en el precio, las personas asociadas entre sí porque una es el agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se deberán considerar automáticamente como "vinculadas".

7. Asunto: Determinación del valor en aduana según el método residual previsto en el artículo 7 del Acuerdo

15. La determinación del valor en aduana con arreglo al método residual se establece en el artículo 7 del Acuerdo. El párrafo 2 del artículo 7 prohíbe, entre otras cosas, que se determine el valor en aduana basándose en i) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, y ii) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación. Sin embargo, la exclusión prevista en el apartado c) del párrafo 2 crea un trato doble. En virtud del Acuerdo Antidumping de la OMC, debe considerarse que un producto es objeto de dumping (es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal) cuando su precio de exportación sea menor que el precio comparable de un producto similar vendido en el mercado interno o al precio de exportación en un país tercero cuando ese producto no se vende en el mercado nacional. Así pues, mientras que el Acuerdo Antidumping tiene en cuenta el precio en el mercado interno y el precio de exportación en un país tercero, el Acuerdo sobre Valoración en Aduana excluye expresamente esa posibilidad.

Propuesta

16. El método residual para determinar adecuadamente el valor en aduana debería incluir todas las demás eventualidades no expresamente previstas en el Acuerdo, a fin de permitir la valoración basada en el precio en el mercado interno o en el precio de exportación en un país tercero con los ajustes que proceda.

B. WT/GC/W/354, PÁRRAFOS 28 A 30

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994

28. Se incluirá en el Acuerdo una solución multilateral que permita, en casos dudosos, que las administraciones de aduanas de los países importadores soliciten y obtengan información de las administraciones de los países exportadores, sobre los valores de exportación contenidos en la declaración de exportación, en un plazo determinado.

29. La adición del costo de servicios tales como los de ingeniería, creación y perfeccionamiento y diseño, que el comprador, de manera directa o indirecta, haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción de las mercancías importadas se incluirá en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 a los efectos de la determinación del valor de las mercancías importadas, independientemente de que los servicios se hayan ejecutado o no en el país de importación.

30. Para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta el precio en el mercado interno y el precio de exportación en un país tercero, como en el caso del Acuerdo Antidumping, el método residual para determinar el valor en aduana previsto en el artículo 7 incluirá todas las demás eventualidades, a fin de permitir la valoración basada en el precio en el mercado interno o en el precio de exportación en un país tercero con los ajustes que proceda.

C. WT/GC/W/355, PÁRRAFOS 30 A 32

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994

30. Con objeto de evitar la manipulación de los precios de importación y permitir una determinación que se aproxime más al "valor de transacción", el Acuerdo debería modificarse para que se tome en cuenta el valor más alto cuando se halle más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

31. Para hacer frente al problema de la manipulación por medio de la reducción artificial de los precios de la segunda factura, principalmente la subfacturación y el fraccionamiento artificial del valor, en particular cuando las compras son realizadas en primer lugar por los agentes y facturadas de nuevo al importador, a los efectos del artículo 8 del Acuerdo, las comisiones de compra deberían tenerse en cuenta al determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, ya que son un componente legítimo del costo descargado de las mercancías importadas.

32. A los efectos de la valoración de las importaciones efectuadas por un agente, distribuidor o concesionario exclusivo de empresas grandes, incluidas las empresas transnacionales, en virtud del párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo, y a fin de hacer recaer en los agentes, distribuidores o concesionarios, según el caso, la carga de la prueba de que su vinculación no ha influido en el precio, las personas asociadas entre sí, por ser una de ellas agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea la designación utilizada, deberían considerarse automáticamente "vinculadas".

D. JOB(99)/3169, PÁRRAFOS 79 A 85

5.1 Acuerdo sobre Valoración en Aduana

5.1.1 Principales características

79. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana establece que el valor de los productos importados debería ser determinado por las aduanas a los efectos de la percepción de derechos de aduana ad valorem, sobre la base del "precio pagado o por pagar" por el importador en la transacción objeto de valoración. Como consecuencia de la Decisión adoptada en la Ronda Uruguay, las aduanas están facultadas a rechazar el valor de transacción cuando tienen motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado por el importador. Sin embargo, cuando las aduanas rechazan el valor declarado siguiendo los procedimientos establecidos en la Decisión, deben determinar el valor imponible en aduana conforme a los cinco métodos establecidos en el Acuerdo. Estos métodos se deben seguir según el orden jerárquico en el que están enumerados en el Acuerdo, y sólo cuando no puede utilizarse el primero, se utilizará el segundo y luego el siguiente.

5.1.2 Experiencia sobre el funcionamiento del Acuerdo

80. Más de 50 países no han estado en condiciones de adherir al Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Una de las razones que explica la reticencia de las administraciones aduaneras de esos países respecto de la adopción del nuevo sistema de valoración que establece el Acuerdo, es que difiere considerablemente del sistema de valoración basado en la Definición del valor de Bruselas, que aplican actualmente. Temen que a menos que los funcionarios de sus servicios de aduana reciban una formación para aplicar el nuevo sistema, éste podría conllevar una pérdida de ingresos.

81. También se podrían perder ingresos, porque la aplicación de las disposiciones del Acuerdo exige a esas administraciones aduaneras que se aparten de sus prácticas habituales, para añadir al precio "pagado o por pagar", "comisiones de compra" y descuentos especiales obtenidos por los importadores que operan como agentes exclusivos.

82. La experiencia de los países que han adherido al Acuerdo también ha puesto de manifiesto las dificultades prácticas relativas a la aplicación de sus disposiciones. Por ejemplo, aunque la Decisión de la Ronda Uruguay permite actualmente a las administraciones aduaneras rechazar el valor declarado por el importador cuando consideran que éste ha sido deliberadamente sobrevalorado o subvalorado, en la práctica les resulta imposible hacer uso de la autoridad que les confiere la Decisión por no disponer de los datos relativos a los precios fiables y actualizados, necesarios para efectuar comparaciones de precios. También plantean problemas las disposiciones del Acuerdo en relación

con la determinación del aforo aduanero de las mercancías, sobre la base de la "fijación de precios de transferencia" entre las casas centrales y sus sucursales y filiales. En algunos países en desarrollo, con la supresión gradual de las restricciones antes aplicadas a las inversiones extranjeras directas, aumenta el comercio industrial intersectorial entre las unidades que integran a las empresas transnacionales.

5.1.3 Posibles medidas futuras

5.1.3.1 Incremento de la asistencia técnica

83. Para facilitar la adhesión al Acuerdo de los países que todavía no han podido hacerlo sería necesario reforzar y reorientar la asistencia técnica proporcionada por la OMC, la OMA y otras organizaciones internacionales. En esa reorientación de la acción debería dedicarse más atención a la formación práctica de los funcionarios encargados principalmente de la percepción de los derechos, instruyéndolos sobre los métodos prescritos por el Acuerdo, la adopción de métodos modernos de despacho de aduanas, la elaboración de bases de datos de precios que sirvan para establecer comparaciones, contribuyendo además a que las administraciones aduaneras adopten las nuevas técnicas de gestión.

5.1.3.2 Ampliación del período de transición

84. El período de transición previsto para que los países en desarrollo adhieran al Acuerdo expira el 1º de enero del año 2000. Aunque la asistencia técnica pueda ser útil, no es probable que muchos países en desarrollo estén en condiciones de hacerlo en el limitado plazo de tiempo disponible antes de la fecha límite. Por consiguiente, sería conveniente prorrogar cinco años el período de transición para todos los países que lo soliciten.

5.1.3.3 Disposiciones del Acuerdo: aclaraciones y modificaciones

85. Sería asimismo necesario determinar, en particular:

- si es necesario modificar las disposiciones relativas a "las comisiones de compra" y los descuentos especiales obtenidos por los "agentes exclusivos" para que las administraciones aduaneras fijen el valor imponible en aduana;
- la forma de ayudar a las administraciones aduaneras a elaborar las bases de datos sobre los precios que necesitan para establecer comparaciones, si tienen motivos razonables para considerar que los productos importados han sido deliberadamente subvalorados;
- si las actuales disposiciones del Acuerdo son adecuadas para permitir a las administraciones aduaneras de los países en desarrollo hacerse cargo del comercio efectuado sobre la base de la fijación de precios de transferencia.

E. JOB(99)/3169/ADD.1

PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE 1999

Documento no oficial sobre cuestiones de aplicación

*Comunicación de Zambia, Jamaica, Kenya, el Pakistán,
Sri Lanka, Tanzania y Uganda*

Addendum

Debe añadirse Zimbabwe a la lista de países que presentan el documento no oficial.

II. ACTAS DE REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL

A. REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 22 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2000 (WT/GC/M/56 - PÁRRAFOS 149 A 161)

149. El representante de la India dice que las propuestas de su país acerca del Acuerdo sobre Valoración en Aduana se basan en el reconocimiento del Acuerdo de que las disposiciones del artículo VII se deben exponer más detalladamente para lograr una mayor uniformidad y certidumbre en su aplicación. El Acuerdo establece que el valor en aduana se basará en el valor de transacción, es decir el valor real. Asimismo, el Acuerdo reconoce que un sistema equitativo, uniforme y objetivo para la valoración de las mercancías a efectos aduaneros debe evitar el uso de valores arbitrarios o ficticios. La India atribuye importancia a ambos aspectos del Acuerdo, y según éste, el valor real debería ser el precio de venta en el curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia. Se han propugnado los métodos de valoración en aduana uniformes presentados jerárquicamente con arreglo al Acuerdo fundándose en que los países importadores no deben utilizar valores arbitrarios para restringir el comercio y en que los comerciantes han de conocer con certeza por anticipado la cuantía de los derechos debidos. Sin embargo, la aplicación del Acuerdo plantea numerosos problemas, en particular a las administraciones de aduanas de los países en desarrollo. Es más sencillo basarse en los valores de transacción en los países desarrollados donde los tipos de derechos son bajos, los controles de importación son mínimos y no se basan en el valor, no existe el control de cambio, es escasa la corrupción del servicio público, elevada la conformidad voluntaria, y rápido y eficaz el sistema judicial. Pero es diferente la situación en los países en desarrollo. Además, probablemente el número de casos de transacción fraudulenta no es tan alto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El documento de investigación sobre políticas del Banco Mundial titulado "Implementation of Uruguay Round Commitments: The Development Challenge" ("Aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay: el reto del desarrollo"), de octubre de 1999, señala que cuando los aranceles son elevados y cuando son limitados los servicios especializados de contabilidad y el acceso a la información electrónica, la desviación hacia un sistema de valoración basado en los riesgos, que depende del detenido examen de una muestra (15 ó 20 por ciento) de los envíos, puede incrementar, en vez de reducir, el número de envíos que los importadores tratan de subfacturar, y los comerciantes pueden considerar que ese cambio les depara una mejor -y no peor- oportunidad de subfacturar impunemente.

150. Las propuestas específicas de la India en esta materia están destinadas a abordar esas importantes disposiciones y la necesidad de combatir el fraude, facilitar el auténtico comercio y proteger los ingresos. La primera propuesta del párrafo 21 sugiere un acuerdo multilateral para el intercambio de información sobre la valoración en aduana. Las disposiciones del Acuerdo no contemplan la situación en que un exportador presenta una declaración de exportación correcta a las autoridades aduaneras, pero el importador presenta unilateralmente una falsa declaración del valor a

las autoridades aduaneras del país importador para evadir los derechos de aduana debidos. Para acometer este problema, se ha establecido la práctica de concertar acuerdos bilaterales de intercambio de información sobre el valor en aduana. Pero no es ésta una solución práctica y duradera del problema. A este respecto, el documento del Banco Mundial indica que, al menos en lo que a los productos básicos se refiere, un sistema de valoración basado en los precios mundiales observados puede ofrecer una mejor oportunidad de introducir la transparencia, la objetividad y la responsabilidad en el sistema. En los exámenes periódicos de esos "precios de referencia" se les puede dar "categoría" a los usuarios de las importaciones y a los intereses que compiten en ellas, así como la oportunidad de presentar pruebas en apoyo de las revisiones. También sería posible establecer un sistema colectivo de precios de referencia sobre el que ningún gobierno tuviera control. Las listas de precios de referencia podría determinarlas un grupo intergubernamental y de su preparación y distribución podría encargarse por contrato un organismo independiente. El Acuerdo no prevé expresamente la adopción de valores de referencia como método de valoración. No obstante, probablemente no habría objeciones a que se utilizaran esos valores a efectos de comparación de precios para comprobar la veracidad y exactitud de los valores declarados y para rechazar el método del valor de transacción. Para la aplicación satisfactoria del Acuerdo y la valoración adecuada de las mercancías internacionalmente comercializadas es necesaria la cooperación internacional. Una forma de obtenerla podría consistir en que la administración de aduanas del país exportador prestase asistencia administrativa cuando existan dudas sobre la veracidad y exactitud del valor declarado. No es ésta una idea nueva, pues el Convenio Internacional sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Prevención, Investigación y Represión de los Delitos de Aduanas (Convenio de Nairobi) reconoce en su preámbulo que los delitos contra la legislación aduanera son perjudiciales para los intereses económicos, sociales y fiscales de los Estados y los intereses legítimos del comercio, y que las medidas contra los delitos de aduanas pueden ser más efectivas mediante la cooperación entre las administraciones de aduanas. Ese Convenio ha sido ratificado por 38 países, de los que sólo 28 han ratificado el anexo II relativo a los fraudes de valoración, no habiéndolo hecho la mayor parte de los países desarrollados. Así pues, mientras que los países en desarrollo tienen obligación vinculante de aplicar el Acuerdo, los países desarrollados Miembros no tienen obligación vinculante de prestar asistencia para comprobar los valores de aduana incluso en los casos dudosos. Teniendo esto en cuenta, la propuesta de la India pretende que se establezca una solución multilateral que permita a las administraciones de aduanas de los países importadores recabar y obtener información sobre los valores de exportación que figuran en la declaración de exportación de las administraciones de aduanas de los países exportadores en los casos dudosos, dentro de un plazo determinado. La segunda propuesta aborda el costo de servicios tales como los de ingeniería, creación y diseño. De conformidad con el artículo 8.1b)iv) del Acuerdo, se añadirá el costo de esos servicios siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y hayan sido realizados fuera del país de importación. Esta disposición prevé que el valor de importación sea repartido, habiendo de prestarse parte de los servicios en el propio país importador. La India propone que el costo de esos servicios, que son parte integrante del valor de las mercancías importadas, se incluya en la valoración con independencia de que se hayan realizado o no en el país de importación. La tercera propuesta aborda la determinación del valor en aduana que se prevé en el método residual del artículo 7 del Acuerdo. El párrafo 2 de este artículo prohíbe, entre otras cosas, que el valor en aduana se determine basándose en: i) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador; ii) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación. Pero la cláusula de exclusión c) del párrafo 2 crea una situación de trato dicotómico. Con arreglo al Acuerdo Antidumping, se considerará que un producto es objeto de dumping (que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal) cuando su precio de exportación sea menor que el precio comparable de un producto similar vendido en el mercado interno o el precio de exportación en un tercer país cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el mercado interno. Mientras que el Acuerdo Antidumping reconoce el precio nacional y el precio de exportación en un tercer país, el Acuerdo sobre Valoración en Aduana excluye expresamente esa posibilidad. La India propone que en el método residual de determinación del valor en aduana

previsto en el artículo 7 se incluyan todas las eventualidades residuales, de modo que la valoración pueda basarse en el precio en el mercado interno o el precio de exportación en un tercer país, con los ajustes adecuados.

151. Los representantes de Cuba, Honduras, el Pakistán y Sri Lanka apoyan la declaración de la India, ya que sus países han copatrocinado las propuestas del apartado h) del párrafo 21.

152. El representante de Hong Kong, China dice que, con respecto a la primera propuesta relativa a la valoración en aduana, contenida en el párrafo 21, estima su delegación que desde la aparición del texto el 19 de octubre se han registrado nuevos hechos que aportan una nueva base sobre la que puede avanzarse mediante consultas o una ulterior deliberación en el Consejo General.

153. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación no está en condiciones de presentar una posición detallada sobre las cuestiones objeto de examen, y cree que en esta materia es necesario un intercambio de opiniones a nivel de expertos. A modo de reacción preliminar ante las propuestas, opina su delegación que la mayoría de ellas requieren negociación, ya que parecen poner en tela de juicio los fundamentos del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. En el caso de la propuesta relativa al intercambio de información entre las autoridades, es difícil imaginar cómo puede lograrse que ese sistema funcione sin convertirse en una carga para los servicios interesados. Se pregunta su delegación si la propuesta aborda más bien los síntomas que el problema subyacente, que es la aplicación efectiva del Acuerdo. Desea señalar a la atención de los presentes las propuestas formuladas sobre esta materia de las que se ha venido ocupando su delegación. La primera contempla ciertas ampliaciones a favor de los países en desarrollo en dificultades, juntamente con un programa de aplicación para los países participantes. La segunda comprende la cuestión, de mayor amplitud, de una asistencia técnica reforzada destinada a la creación de capacidad, sobre la cual ha presentado su delegación una propuesta específica con la convicción de que esa actividad es esencial para la aplicación correcta y oportuna del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Este método podría servir de modelo para otros acuerdos sobre los que algunos países menos adelantados tienen problemas de recursos especialmente graves. Su delegación tiene vivo interés en que se avance sobre estas dos cuestiones, con lo que, a su entender, se resolverían muchos de los problemas relativos a la valoración en aduana.

154. El representante del Japón dice que, a juicio de su delegación, las tres primeras propuestas del apartado h) del párrafo 21 supondrían la modificación de los derechos y obligaciones dimanantes del actual Acuerdo y que lo más apropiado sería abordarlas en futuras negociaciones. La primera probablemente conllevaría la enmienda de la reglamentación nacional de su país, y la tercera entrañaría una carga considerable para las autoridades aduaneras así como ciertas complicaciones técnicas. Con respecto a la cuarta propuesta, su delegación estima que esa cuestión se examina de manera adecuada en otro proceso.

155. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación aprecia en lo que vale la declaración de la India sobre la justificación de sus propuestas, pero que está preocupada porque algunas de las cuestiones suscitadas suponen la renegociación de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, y estima que éste es adecuado en su estado actual. Con respecto a la primera propuesta, aunque el Acuerdo contempla suficientemente la cuestión de comprobar la veracidad y exactitud de las declaraciones formuladas por los importadores, su delegación desea participar en futuras consultas sobre los medios de facilitar el objetivo que se persigue en la propuesta, salvo la reapertura del Acuerdo. En cuanto a la segunda propuesta, su delegación está preocupada porque puede desalentar el diseño y creación de productos nacionales en el país importador. No ve su delegación qué relación guardan éstos con el valor de transacción, pero está dispuesta a estudiar las otras aclaraciones que se aporten. De igual modo, la tercera propuesta podría modificar el carácter fundamental del Acuerdo, pues reconoce de manera expresa que esos métodos de valoración son inadecuados para analizar el valor de transacción. Asimismo, su delegación conviene con la

declaración de las Comunidades Europeas a ese respecto. Desde que se formularon esas propuestas se han hecho ostensibles progresos sobre la cuestión de los períodos de transición y se está avanzando en materia de asistencia técnica. Aunque esta última no es necesariamente una solución para todos los problemas de la aplicación, es aplicable en la esfera de la valoración en aduana.

156. El representante de Marruecos dice que, siendo un país en desarrollo, Marruecos secunda plenamente la declaración de la India.

157. El representante de la India dice que, con arreglo al Acuerdo sobre Valoración en Aduana, la valoración en aduana se ha de basar en el valor de transacción declarado. La primera propuesta aborda las discrepancias existentes entre el valor declarado por el exportador a la autoridad aduanera del país exportador y el valor declarado por el importador a la autoridad aduanera del país importador. En varios países, eso conduce al fraude y a una pérdida de ingresos. Creen algunas delegaciones que esta propuesta modificaría el equilibrio de los derechos y obligaciones en el Acuerdo, pero como la disposición no es efectiva, se debe hallar la manera de que las administraciones de aduanas de los países importadores puedan obtener la cooperación de las de los países exportadores cuando tengan buenos motivos para creer que existe una discrepancia. No cabe rechazar el objetivo de controlar el fraude recabando para ello la ayuda de los países exportadores so pretexto de que es correcto el equilibrio existente de los derechos y obligaciones. Esta propuesta no provocaría una carga importante de trabajo porque en la mayoría de los casos existen los documentos necesarios. El argumento de que exigiría un cambio de la legislación nacional de algunos Miembros tampoco es válido, ya que muchos Miembros pugnan por modificar sus leyes a fin de aplicar los Acuerdos de la OMC. Es extraordinario que tantos países desarrollados e incluso algunos en desarrollo puedan oponerse a esta simple propuesta, y esto constituye un tema de reflexión.

158. La representante de los Estados Unidos dice que la referencia al equilibrio de derechos y obligaciones formulada en su declaración anterior guardaba relación con otras propuestas, no con la primera. Desea reiterar que las disposiciones existentes son adecuadas para comprobar la veracidad y exactitud de las declaraciones hechas por los importadores. Su delegación reconoce que existe un problema en ese aspecto, y ese problema se podría abordar sin reabrir el Acuerdo. Su delegación está dispuesta a colaborar para encontrar una solución en las consultas.

159. El representante del Japón, en respuesta a la declaración de la India, dice que el verdadero objetivo de la primera propuesta no es el suministro de información sobre los valores de exportación, sino la evaluación exacta del valor de los productos de que se trate. La propuesta aborda los medios de resolver el problema, pero el objetivo real no es ése. Conviene con otros oradores en que la valoración en aduana es una esfera de actividad altamente técnica, y para avanzar en ella convendría que intervinieran los expertos. El Japón tiene ciertos límites en sus reglamentos nacionales para facilitar información sobre el valor de las exportaciones, por cuya razón son necesarios los expertos. Éstos deberían intervenir también para abordar las cuestiones contenidas en las propuestas segunda y tercera, pues algunas soluciones podrían modificar la naturaleza de la valoración en aduana.

160. El representante de Suiza secunda las declaraciones de los Estados Unidos sobre todas las propuestas y de las Comunidades Europeas sobre las tres últimas. Con respecto a la primera propuesta, su delegación no se opone a que se busquen soluciones en la materia, pero conviene con la Comunidad en que la cuestión de la viabilidad práctica de suministrar información es un factor a considerar. Sería desafortunado que ese sistema provocara una avalancha de peticiones de los países importadores a las autoridades aduaneras de los países exportadores. Por otro lado, en la propuesta no se menciona la declaración del valor de exportación, que daría una dimensión diferente a lo que se propone y permitiría a las delegaciones examinarla desde un punto de vista distinto. Otro problema del intercambio de información -que se debe tener en cuenta- es la variedad de legislaciones nacionales entre los Miembros.

161. La representante del Canadá apoya la declaración del Japón. Su delegación estima que las cuestiones objeto de examen en esta materia son complicadas y técnicas y que los sistemas nacionales de los Miembros tienen normas y reglamentos diferentes. Por lo tanto, esas cuestiones deben remitirse a los expertos técnicos. Con respecto a la cuarta propuesta, se está trabajando en el Comité de Valoración en Aduana y a juicio de su delegación debe continuar la labor en ese foro.

B. REUNIÓN CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2000 (WT/GC/M/59 - PÁRRAFOS 21 A 26)

21. El Presidente entiende que, en sus trabajos sobre los créditos a la exportación con arreglo al párrafo 2 del artículo 10, los Miembros tendrán en cuenta sin duda alguna las disposiciones del párrafo 4 de la Decisión de Marrakech sobre los países importadores netos de productos alimenticios, en virtud del cual los ministros convinieron en asegurarse de que todo acuerdo en materia de créditos a la exportación contuviera disposiciones apropiadas sobre trato diferenciado a favor de los países menos adelantados y de los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.

d) Valoración en aduana

22. Hasta la fecha las consultas se han centrado en las cuatro propuestas recogidas en el párrafo 21.

23. Empezando por el apartado 1, relativo a la idea de que las administraciones de aduanas se intercambien información sobre los valores de exportación en casos dudosos, se desprende de los debates que, aunque no parezca que sea motivo de desacuerdo el objetivo que subyace en la propuesta original, es decir, hallar maneras efectivas de hacer frente al fraude aduanero consistente en la presentación de declaraciones fraudulentas del valor a las autoridades aduaneras del país importador, existe cierta preocupación con respecto a los medios.

24. Algunas delegaciones han señalado que puede que haga falta ocuparse de varias cuestiones de orden práctico y técnico como la cuestión de los requisitos de confidencialidad que pueden imponerse cuando se aporte la información que se solicita. Está claro que hace falta celebrar más consultas al respecto y recabar la opinión de expertos en valoración en aduana.¹

25. Por lo que se refiere a las propuestas recogidas en los apartados 2 y 3, parece que plantean diversas cuestiones técnicas que puede que deban examinarse en un plano técnico. Al respecto, y partiendo de los debates celebrados, el Presidente propone pedir al Comité de Valoración en Aduana que examine las propuestas y pedir al Presidente del Comité que informe de los resultados de ese examen al Consejo General antes de su reunión extraordinaria de diciembre.

26. Por último, por lo que respecta a la propuesta recogida en el apartado 4, relativo a la prórroga de la moratoria prevista en el párrafo 1 del artículo 20, los Miembros han observado que el proceso, que tiene lugar en el Comité de Valoración en Aduana, de examen y aprobación de las solicitudes concretas presentadas por Miembros a efectos de prorrogar el plazo de cinco años previsto en el párrafo 1 del artículo 20 avanza de forma relativamente positiva y que, en el marco de este proceso, el Comité se ha encontrado hasta la fecha en situación de conceder 13 de las 19 solicitudes de prórroga

¹ Véase asimismo el párrafo 96 de la presente acta.

[(96) El Presidente dice que observa que la India puede aceptar la sugerencia formulada durante las consultas en el sentido de que se puede remitir igualmente el apartado 1 de las propuestas sobre valoración en aduana al Comité de Valoración en Aduana para que éste examine los aspectos técnicos. Al parecerle que la India ha sido la única delegación que ha formulado reservas con respecto a esta sugerencia, propone modificar su informe como corresponde, remitir igualmente este punto al Comité y pedir al Presidente del mismo que informe de los resultados de tal examen al Consejo General antes de su reunión extraordinaria de diciembre.]

presentadas. Se ha manifestado la opinión de que se debe instar al Comité a que siga desempeñando esta labor y de que quizás no haga falta en esta fase que el Consejo General emprenda acciones suplementarias.

C. REUNIÓN CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2000 (WT/GC/M/62 - PÁRRAFOS 7 A 9 Y 22 A 24)

7. El Presidente recuerda que el Director General, en la reunión que el Consejo General celebró en mayo, presentó un informe sobre sus consultas relativas a la cuestión del período de transición en el que señaló que, en términos generales, el proceso de examen y aprobación de las solicitudes de prórroga del período de transición presentadas por los países en desarrollo había avanzado a buen ritmo en el Comité de Valoración en Aduana, y sugirió que los Miembros le alentaran a continuar con esa labor. El Presidente dice que, desde entonces, entiende que se ha progresado aún más en esa esfera, aunque todavía quedan algunas peticiones pendientes.

8. En la reunión extraordinaria de octubre, a la luz del informe de situación presentado por el Director General y el propio Presidente, el Consejo General aceptó la propuesta del Presidente de remitir a los órganos competentes de la OMC una serie de cuestiones que el informe identificaba como apropiadas para que esos órganos actuaran de conformidad con los mandatos y plazos que él mismo había propuesto. Las cuestiones fueron las siguientes:

- la elaboración de disciplinas internacionalmente convenidas por las que se rija la concesión de créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de seguro de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 4 de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios; esta cuestión se remitió al Comité de Agricultura;
- las preocupaciones de los países en desarrollo en relación con la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias; esta cuestión se remitió al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
- los problemas a que hacen frente los países en desarrollo en relación con las normas internacionales y la evaluación de la conformidad; esta cuestión se remitió al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio;
- la idea del intercambio de información entre administraciones de aduanas sobre los valores de las exportaciones en casos dudosos, la adición del costo de los servicios a que se refiere el párrafo 1 b) iv) del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y los aspectos del método residual para la determinación del valor en aduana previsto en el artículo 7 de dicho Acuerdo; todas estas cuestiones se remitieron al Comité de Valoración en Aduana; y
- la cuestión de la relación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la cuestión de la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo, relativo a la transferencia de tecnología; estas cuestiones se remitieron al Consejo de los ADPIC.

9. Se invitó a los Presidentes de los órganos competentes mencionados supra a informar sobre el resultado del examen de esas cuestiones, y en todos los casos esos informes se emitieron en forma de documentos. A la luz de los informes, el Presidente señala que la labor de esos órganos respecto

de las cuestiones que se les han remitido continuará en su mayor parte, y subraya que ese proceso continuo proseguirá bajo la supervisión del Consejo General; dicho órgano mantiene en todo momento la responsabilidad global de la labor sobre la aplicación, y se le debe informar de los resultados de toda labor remitida a los órganos subsidiarios.

22. El representante de la India dice que es bien conocida la importancia que su delegación otorga a la búsqueda de soluciones significativas para las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación. La India acoge con cierta satisfacción el hecho de que al menos se hayan adoptado algunas decisiones en la presente reunión, meses después de adoptar la decisión de establecer un mecanismo especial para abordar el tema de la aplicación. Si bien algunas de las delegaciones principales han calificado la presente Decisión de modesta y limitada, la India considera que tan siquiera alcanza sus expectativas mínimas. Su delegación considera profundamente desalentadores los resultados obtenidos hasta ahora. El primer proyecto de Decisión del Presidente, de 29 de noviembre de 2000, incorporaba decisiones posibles sobre 28 apartados de los 54 que contiene el párrafo 21. El proyecto de 13 de diciembre contenía decisiones posibles sobre nueve apartados, y el de 14 de diciembre contenía otras nueve, si bien un apartado sobre los servicios se había sustituido por otro sobre las subvenciones (una remisión al Comité de Subvenciones que no garantiza la calidad de los dos proyectos en cuanto a su equivalencia.) Por consiguiente, queda claro que la presente Decisión abarca 9 de los 54 apartados del párrafo 21; no obstante, cinco de esos nueve apartados no son otra cosa que remisiones a órganos subsidiarios, y dos son llamamientos a otras organizaciones internacionales. En definitiva, sólo hay dos decisiones verdaderamente significativas: una es la rectificación de un error (el caso de Honduras), y la otra es una decisión sobre los regímenes de los contingentes arancelarios de productos agropecuarios. En cuanto a la parte de la Decisión relativa a las normas de origen, a su delegación le preocupa que los Estados Unidos la califiquen de poco realista. La delegación de la India espera que todas las delegaciones trabajen de buena fe para aplicar esa decisión. En cuanto a la evaluación de la calidad de la presente Decisión, el hecho de que no se hayan adoptado decisiones en esferas tales como los textiles, medidas antidumping y subvenciones dice mucho acerca de la repercusión real que las decisiones adoptadas tendrán sobre el comercio o la economía de los países en desarrollo. Es lamentable que los servicios, esfera en que habría sido posible obtener resultados, no figuren en la Decisión. Durante las consultas informales las delegaciones convinieron en una decisión sencilla sobre el modo 4, es decir, el movimiento de personas físicas. Su delegación aceptó el texto sugerido por el Presidente para esa cuestión, e incluso aceptó simplificarlo en mayor medida. Lamentablemente, en la Decisión definitiva no hubo lugar para incluir la cuestión, lo que resulta muy desalentador. Por lo tanto, es obvio que los resultados obtenidos hasta ahora representan, en el mejor de los casos, un primer paso mínimo.

23. La India ha mantenido siempre que las cuestiones que ha planteado sobre la aplicación requieren una cierta sensibilidad política y no se pueden abordar mediante un enfoque limitado de índole jurídico, razón por la que su delegación se ha mostrado reacia a remitir tales cuestiones a los órganos subsidiarios. No obstante, con un espíritu de compromiso y en ciertas ocasiones por respeto a las opiniones del Presidente, en la última reunión acordó remitir algunas de las cuestiones. Su delegación ha leído los informes presentados por los Presidentes de esos órganos, y reconoce su decidido empeño por alentar a los órganos que presiden a formular recomendaciones significativas. Ello no obstante, la India lamenta la ausencia de resultados o progresos sustanciales, especialmente en las esferas de los ADPIC y la valoración en aduana. Por ejemplo, en el Consejo de los ADPIC ni siquiera ha sido posible otorgar la condición de observador a la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y mucho menos llevar a cabo un examen serio de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y ese Convenio sobre la base de una lista recapitulativa del Presidente o una nota fáctica de la Secretaría. Además, su Gobierno envió a un experto a Ginebra para que participara en el Comité de Valoración en Aduana. Sin embargo, a pesar de las aclaraciones ofrecidas por la delegación india, no fue posible persuadir al Comité a que aceptase tan siquiera una propuesta sencilla para el intercambio de información sobre los valores de las exportaciones en casos dudosos, con miras a reducir la posibilidad de fraude. Por consiguiente, el escepticismo de su delegación a la hora de

remitir asuntos a los órganos subsidiarios ha quedado justificado. La India reitera que, de conformidad con la Decisión de 3 de mayo, el Consejo General sólo debe remitir los asuntos a los órganos subsidiarios cuando es absolutamente necesario, con un mandato claro y un plazo específico.

24. El representante de la India desea mencionar otro aspecto importante del presente ejercicio y solicitar a todas las delegaciones que reflexionen más a fondo sobre el mismo. Aun en el caso de las cuestiones relativamente menores, por ejemplo, una cláusula del máximo empeño o una línea de acción deseable ya prevista en los diferentes acuerdos, algunos Miembros se muestran reacios a que tales cuestiones lleguen a ser significativas porque consideran que sería necesario introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. El hecho de que las cláusulas del máximo empeño previstas en los acuerdos vigentes no figuren en la legislación nacional de algunos de los principales interlocutores comerciales plantea serias preocupaciones. Las legislaciones deberían prever explícitamente esas cláusulas, de conformidad con la letra y el espíritu de los Acuerdos de la OMC firmados y ratificados por los gobiernos Miembros. Recuerda a todas las delegaciones que el presente ejercicio sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación tiene y debe seguir teniendo por objeto generar niveles más altos de confianza, y eso sólo es posible mediante una combinación de voluntad política y buena fe. Los resultados actuales demuestran que esos factores no han influido en la medida necesaria. La India expresa su profundo desacuerdo con las delegaciones que sugieren que la causa de ese problema podría encontrarse en el propio proceso. El Consejo General decidió el 22 de junio de 2000 que en la presente reunión se decidiría cómo organizar la labor futura para el año 2001. Es lamentable que en la presente reunión extraordinaria no se haya prestado atención a esta cuestión ni se haya adoptado una decisión al respecto. La India solicita que el Presidente celebre consultas informales sobre el tema con suficiente antelación respecto de la próxima reunión del Consejo General, programada para el 8 de febrero de 2001. Su delegación confía en que el año próximo las delegaciones demuestren la voluntad política, la buena fe y el valor que se necesitan para abordar las cuestiones pendientes sobre la aplicación, y encuentren soluciones significativas mucho antes del plazo fijado para la Cuarta Conferencia Ministerial. Eso sería suficiente para generar confianza en la OMC y mejorar su imagen en países como la India. Su país perseverará en el empeño por persuadir a sus principales interlocutores comerciales a que continúen progresando en esa esfera. Éste será el empeño común más importante para todos durante el año próximo.

D. REUNIÓN CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2001 (WT/GC/M/64 - PÁRRAFOS 32 Y 33, 51 A 62, 72 A 76 Y 84 A 86)

f) Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Valoración en Aduana)

32. El 10 de abril, el Presidente mantuvo consultas sobre las cuestiones planteadas en relación con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Las tres cuestiones enumeradas en la recapitulación dentro del párrafo 21 se remitieron al Comité de Valoración en Aduana el 18 de octubre de 2000, y el informe del Presidente sobre el examen de estas cuestiones por el Comité se distribuyó el 7 de diciembre de 2000 con la signatura G/VAL/36. El texto completo de las deliberaciones del Comité se recogió en el acta de dicha reunión, que se reproduce en el documento G/VAL/M/17, en la que se pone claramente de manifiesto la gran complejidad de esas cuestiones. En las consultas del Presidente, el debate ha sido también muy complejo, por lo que desearía volver a ocuparse de estas cuestiones en otra ocasión.

33. Otras tres cuestiones se enumeran en este área en relación con el párrafo 22, y la primera lectura de las propuestas ha sido muy provechosa. También a este respecto hay algunas cuestiones complejas pendientes y habrá que volver a ocuparse de ellas en futuras consultas. De hecho, dada la complejidad de la materia, el Presidente se pregunta si la aportación técnica del Comité no ayudará al Consejo General a ocuparse de ellas. En lo que respecta a los incisos segundo y tercero, será conveniente que los autores consideren si es posible aclarar su texto.

51. El representante de las Comunidades Europeas dice que el informe del Presidente constituye una base excelente. Su delegación confía en que, bajo su dirección, el proceso dé resultados positivos para la aplicación, y se siente alentado por la labor que se ha realizado tanto en las consultas informales como en los órganos subsidiarios. Parece haber un auténtico deseo de avanzar más allá de las consideraciones retóricas y tácticas y de llegar al núcleo de las cuestiones. La Comunidad se toma muy en serio la cuestión de la aplicación y está convencida que es importante demostrar que la OMC puede encontrar soluciones prácticas a los problemas reales. La Comunidad está realizando asimismo importantes esfuerzos por ayudar a los países en desarrollo a aplicar plenamente los compromisos contraídos en el marco de la Ronda Uruguay y, en términos más generales, a integrarse en el sistema multilateral. Su postura acerca de la aplicación forma parte de esta política: orientar progresivamente a la OMC y el sistema de comercio multilateral hacia una actitud más sensible a las necesidades y prioridades de desarrollo. Es preciso reconocer que cuantos más progresos prácticos se produzcan en la aplicación, más se conseguirá un entorno favorable para las futuras negociaciones en la OMC.

52. El informe del Presidente demuestra que es mucho lo que se ha conseguido ya. Entre otras cosas, en diciembre se han adoptado varias decisiones, se ha aprobado la ampliación de los períodos de transición en algunos Acuerdos, como el de Valoración en Aduana, y se han formulado varias propuestas en las esferas de la agricultura y los servicios sobre las directrices para la siguiente fase de las negociaciones en esas áreas, lo que constituye un proceso alentador. Otra señal positiva son las medidas autónomas, como la decisión de la Comunidad de conceder acceso libre de derechos y contingentes a los productos de países menos adelantados, así como otras medidas similares de otros Miembros. En la próxima conferencia sobre los países menos adelantados que se celebrará en Bruselas, la Comunidad hará hincapié en los resultados inmediatos, y el representante espera que las medidas autónomas se multilateralicen posteriormente. Además, se han iniciado programas de trabajo específicos en esferas como los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias para encontrar medios que permitan ayudar a los países en desarrollo a participar en la elaboración de normas, así como actividades en áreas como los ADPIC para conseguir una aplicación adecuada. Se ha comenzado ya a elaborar planteamientos más coherentes de la asistencia técnica, en particular, mediante una cooperación más estrecha con otros organismos y donantes internacionales, y nuevas contribuciones al Fondo Fiduciario del Marco Integrado. De hecho, todo el campo de la asistencia técnica para la creación de capacidad y, por lo tanto, para conseguir una aplicación completa y fiel, se está abordando de una manera sustantiva y seria en muchas áreas de la labor de la OMC. Además, podría llegarse a un rápido acuerdo sobre otras cuestiones, por ejemplo, la decisión propuesta en relación con la valoración en aduana con el fin de conseguir una asistencia técnica más coherente, a propósito de la cual su delegación espera que desaparezcan en breve las reservas que pudiera haber. Su delegación desea hacer hincapié en todo ello, ya que se ha llegado a decir que son pocos los progresos conseguidos. Si bien es cierto que podría hacerse más, también lo es que ha habido ya progresos, si se consideran todas esas decisiones y medidas como un conjunto general y se reconoce que la aplicación no consiste simplemente en una lista de propuestas en los párrafos 21 y 22 del proyecto de texto ministerial de 1999. La aplicación es también una manera de atender a la integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio multilateral. Como consecuencia de toda la labor realizada en esta esfera, se ha conseguido una mayor atención al desarrollo.

53. El principal interrogante de la presente reunión es cómo avanzar en las próximas semanas y meses. No se debe olvidar que las diferentes propuestas son heterogéneas y que quizá no sea posible tratar todas ellas de la misma manera o de acuerdo con un calendario único. Las consultas recientes entre los miembros de algunas delegaciones residentes en las capitales han permitido a las delegaciones comprenderlo mejor. Muchas delegaciones reconocen que entre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación hay algunas de carácter técnico, administrativas o de procedimiento, que debería ser posible resolver con rapidez. En cambio, otras son de carácter claramente político, tienen repercusiones económicas reales o supondrán la enmienda o reforma de acuerdos existentes, y por lo tanto negociaciones. En muchos casos, las propuestas de modificar los acuerdos o su interpretación pueden exigir cambios en la legislación nacional de los Miembros y estar

sujetas a procedimientos de ratificación. Por ello, las delegaciones deberían comenzar a tratar de determinar el curso de acción más adecuado para las diferentes cuestiones relativas a la aplicación, reconociendo que algunas de las cuestiones más difíciles podrían suponer negociaciones más sustantivas. En este sentido, la Comunidad desea presentar algunas ideas concretas, pero al mismo tiempo desea insistir en que ésta es su evaluación inicial, y en que está dispuesta a mantener debates sobre cuestiones concretas para ver qué es lo que se puede conseguir y en qué plazo de tiempo.

54. Una vez realizada su evaluación inicial, la Comunidad está convencida de que hay algunas propuestas respecto de las que es posible lograr nuevos progresos en las próximas semanas o meses. La más importante de ellas es la decisión de ampliar algunas medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC), como se prevé en el Acuerdo sobre las MIC y que está pendiente desde hace algún tiempo. La Comunidad cree que la solución no está lejos e insta a que se adopte una decisión lo antes posible. Ello fomentará la confianza y demostrará la capacidad de la OMC de responder con interés a los problemas del desarrollo. Si bien no es intención del representante señalar una lista concreta de cuestiones, hay algunas en que el Presidente del Consejo General, mediante su proceso de consultas, puede buscar progresos en breve plazo. Pueden citarse los siguientes ejemplos: i) pedir al Comité Antidumping que aclare si pueden mejorarse los exámenes previstos en el párrafo 6 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y cómo; ii) las propuestas de transparencia y notificación realizadas con respecto a los cambios en las normas de origen; iii) la propuesta de exámenes bienales del Acuerdo MSF acerca de la cual es posible que el Comité SMF pueda llegar a una opinión y que será examinada posteriormente por el Consejo General; iv) en las esferas tanto de las medidas sanitarias y fitosanitarias como de los obstáculos técnicos al comercio, se han iniciado importantes programas en áreas como la asistencia técnica, la participación de los países en desarrollo en los organismos de normalización y la equivalencia, y en el futuro próximo quizá sea posible llegar a conclusiones que puedan ser adoptadas por el Consejo General, o podrían facilitarse nuevas orientaciones; v) en la esfera de la valoración en aduana, deberá ser posible tomar una decisión acerca de una asistencia técnica más coherente; los debates en el Comité de Valoración en Aduana sobre propuestas específicas de aplicación han permitido también una mejor comprensión de las diferentes medidas para combatir el fraude, y quizá sea posible llegar a algunas conclusiones que confirmen las opiniones de los Miembros sobre la manera más eficaz de acabar con aquél; vi) en lo que se refiere a los ADPIC, se ha realizado también una útil labor en el Consejo de los ADPIC acerca de la transferencia de tecnología en el marco del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC; continúan las consultas sobre este tema, al final de las cuales, el Consejo General podrá ver si es preciso adoptar alguna medida o llegar a conclusiones más formales u operacionales, y vii) se ha formulado una propuesta en la que se reconoce el carácter particular de la disposición sobre la balanza de pagos, que podrá reafirmarse.

55. En cuanto a las demás cuestiones relativas a la aplicación, algunas necesitarán probablemente la atención de los Ministros en la Conferencia Ministerial, ya que están claramente relacionadas con asuntos políticos. En algunos casos, los Ministros podrían adoptar decisiones definitivas, pero en otros quizá se necesiten nuevas negociaciones después de Doha, sobre todo si suponen enmiendas de los Acuerdos o cambios en la legislación interna de los Miembros. En lo que se refiere a las cuestiones que pueden ser decididas por los Ministros en Doha, es quizá demasiado pronto para enumerarlas de manera definitiva. No obstante, a título de ejemplo, cabe señalar algunas propuestas relativas a las subvenciones, medidas antidumping y los textiles y el vestido, que necesitarán considerable atención. La Comunidad mantiene una actitud abierta respecto de estas cuestiones y desea que se realicen progresos. En cuanto a las cuestiones que puedan requerir negociaciones, algunas delegaciones han dejado en claro que aun en ese caso debe haber un firme compromiso político de mantenerlas. La Comunidad entiende ese punto de vista y, por lo tanto, propone que en los mandatos de negociación que se adopten en Doha se incluya expresamente una serie de mandatos generales de negociación en relación con las cuestiones pendientes relativas a la aplicación. Por ejemplo, podría preverse un mandato de examinar las disposiciones sobre trato especial y diferenciado de los actuales Acuerdos, con el fin de hacerlas más operacionales. Ello podría formar parte de un

mandato general de revisar las actuales normas de la OMC. Otras propuestas pueden recibir un trato semejante. La Comunidad espera que se puedan conseguir progresos concretos en la aplicación durante las próximas semanas y, en concreto, la prórroga de las MIC será un elemento fundamental y decisivo para la credibilidad de la OMC. Todas las delegaciones, cuando inicien los preparativos para Doha, deben tratar de renunciar a declaraciones retóricas y proceder sin temor a un debate serio y constructivo sobre la manera de conseguir progresos en algunas de las cuestiones más difíciles y, en particular, sobre el tipo de decisiones ministeriales que pueden adoptarse. De esa manera, será posible aprovechar las conclusiones sumamente útiles del Presidente del Consejo General, a quien la Comunidad apoya plenamente en sus futuras consultas. La Comunidad respalda también las sugerencias del Presidente relativas a la organización del trabajo futuro, en particular en lo que se refiere a la necesidad de encontrar formas prácticas de impulsar el proceso y de centrar la atención en los resultados y en las cuestiones sustantivas más que en el propio proceso.

56. El representante del Pakistán dice que, de acuerdo con la Decisión de 3 de mayo, los Miembros reconocen que las cuestiones relativas a la aplicación han provocado serias preocupaciones en muchos países en desarrollo. Una de estas preocupaciones es que no se han hecho realidad los beneficios previstos de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, debido en parte a la forma en que éstos se han aplicado, o han dejado de aplicarse. Otra es que los objetivos de esos acuerdos no pueden hacerse realidad sin ciertas aclaraciones, nuevos entendimientos o medidas suplementarias. Un tercer tipo de preocupación es que algunos acuerdos o aspectos de los mismos están, en términos operacionales, en contradicción con los intereses de los países en desarrollo, por ejemplo, la patentabilidad en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de los fármacos que salvan vidas. La Decisión de 3 de mayo prevé un proceso en tres etapas: evaluar las dificultades existentes, identificar los medios necesarios para solucionarlas y adoptar decisiones encaminadas a una acción apropiada. Este proceso debería estar terminado para la Cuarta Conferencia Ministerial. El ex Presidente del Consejo General declaró en una reunión de junio de 2000 que el proceso relativo a la aplicación debía estar orientado a la acción y a los resultados. Las tres fases del proceso deben estar terminadas no más tarde de la Cuarta Conferencia Ministerial. Las decisiones que deben adoptarse son las relativas a los medios de resolver las dificultades. No basta con llegar a la conclusión de que podrán resolverse sólo algunas cuestiones antes de Doha o en Doha, y el Pakistán no podrá aceptar que se confíe la mayor parte de los esfuerzos de aplicación a un proceso posterior a Doha, ya que ello se apartaría de la Decisión de 3 de mayo. No hay ninguna justificación para vincular las preocupaciones relativas a la aplicación con nuevas o futuras negociaciones comerciales, ya que dichas preocupaciones están relacionadas con el conjunto de la Ronda Uruguay, que tiene su propio equilibrio interno y que debe producir beneficios mutuos para todos los participantes. El proceso de aplicación se ha concebido de maneja que permita conseguir ese equilibrio previsto y prometido. No se puede ni debe pedir a los países en desarrollo que paguen dos veces los beneficios mutuos previstos en la Ronda Uruguay. El trato especial y diferenciado prometido a los países en desarrollo en muchos acuerdos de la Ronda Uruguay no puede vincularse a nuevas negociaciones referentes a las normas de la OMC, como acaba de sugerir la Comunidad, ya que lo único que se está pidiendo es que se hagan efectivas esas disposiciones.

57. En cuanto al informe presentado por el Presidente, los resultados no son de signo contrario: son escasos, ya que se han hecho muy pocos progresos. El Pakistán quizá no valore igual que el informe los resultados alcanzables -que dependen de la voluntad política de todos los afectados- y la poca esperanza de progreso inmediato -que depende de las respuestas positivas a las preocupaciones de los países en desarrollo. El Pakistán quiere que se dejen de lado esos juicios de valor, y espera que se consigan resultados positivos de acuerdo con lo previsto en la Decisión de 3 de mayo. Por ejemplo, esperaría que en relación con las ocho propuestas retiradas en el último momento de la decisión propuesta por el ex Presidente del Consejo General en diciembre de 2000, debido a las dificultades encontradas en las negociaciones, se hiciera al menos un intento de reactivarlas para ver si no se pueden tomar decisiones sobre ellas en la presente reunión extraordinaria. Hay posibilidades de decisión sobre un espectro más amplio que el que la Comunidad ha previsto, por ejemplo, sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, las prórrogas de las MIC, el

artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y los servicios. El Pakistán observa con preocupación que no se han propuesto ni adoptado decisiones sobre estas cuestiones en la presente reunión. En segundo lugar, aun cuando no sea posible llegar a una decisión, hay que buscar los medios para resolver las cuestiones, y la presente reunión podría haber sido un medio para analizarlas. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, podría reconocerse el principio de la flexibilidad para los países en desarrollo, que se instrumentaría más adelante. La prioridad en el proceso de aplicación no debe determinarse exclusivamente en función de la viabilidad o accesibilidad, sino teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones para los países afectados y para el sistema. En este contexto, su delegación está muy decepcionada por el hecho de que no haya habido una oportunidad de debate sustantivo y abierto sobre toda la gama de cuestiones relacionadas con los textiles y el vestido. Para el Pakistán, los resultados sobre los textiles serán la piedra de toque para evaluar el éxito o fracaso de toda la actividad relacionada con la aplicación. El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido debería haberse aplicado de forma progresiva, y por lo tanto el Pakistán ha pedido una integración acelerada y la introducción de mejoras en la liberalización progresiva prescrita ("coeficiente de crecimiento aumentado") de los textiles y el vestido, como medio de corregir el desequilibrio resultante de la no aplicación de esas disposiciones. Ha pedido también una garantía contra las medidas antidumping una vez que se eliminen los contingentes.

58. En lo que respecta al futuro programa de trabajo, es claro que se necesitan intensos esfuerzos en las reuniones formales e informales, pues sólo así podrán conseguirse resultados concretos y la iniciativa se concluirá de conformidad con la Decisión de 3 de mayo. Por ello, el Pakistán sugiere que se convoquen tres -cuatro, si es posible- reuniones extraordinarias: una en junio, otra a finales de julio y otra a finales de septiembre o comienzos de octubre. Estas fechas serán plazos importantes para el proceso orientado a la acción y a los resultados que se han previsto, y el Pakistán espera que puedan adoptarse decisiones y medidas en cada una de esas reuniones. Además de las tres mencionadas, debería convocarse otra reunión extraordinaria adicional que se dedicaría exclusivamente a las cuestiones relacionadas con los textiles y el vestido, ya que este subsector es importante para un gran número de países en desarrollo y ocupará un lugar decisivo en las medidas de aplicación. El representante destaca la necesidad de aclarar el carácter probable de las conclusiones sobre las cuestiones relativas a la aplicación antes de que su delegación pueda ocuparse de las nuevas cuestiones sometidas a debate por varias delegaciones. Será muy difícil que el Pakistán vaya más allá de las cuestiones relativas a la aplicación y el programa incorporado si antes no se consigue un nivel aceptable de claridad, compromiso y certeza de que los problemas de aplicación que preocupan a los países en desarrollo se van a abordar y de que se van a adoptar decisiones al respecto para la Conferencia de Doha, es decir, antes de la misma.

59. El representante de Singapur dice que, como ya se han expuesto las opiniones de los Miembros de la ASEAN sobre la manera de avanzar en este proceso, se limitará a hacer algunas observaciones sobre aspectos específicos del informe del Presidente que son de especial interés para Singapur. En cuanto al Acuerdo sobre Valoración en Aduana, en el informe se dice que "en nuestras consultas, el debate fue también muy complejo, y tendremos que volver a ocuparnos de estas cuestiones en otra ocasión", lo que indica que el Presidente tiene intención de mantener otra ronda de deliberaciones en una reunión extraordinaria futura. Las deliberaciones sobre las tres cuestiones planteadas en el contexto del párrafo 21 están claramente documentadas en G/VAL/36 y en G/VAL/M/17, donde queda constancia de los intensos debates que ya se han mantenido sobre estas cuestiones en el plano técnico, y no hay nada más que decir al respecto. El último párrafo del informe del Presidente del Comité resume la situación con claridad: "Si bien la mayoría de los Miembros reconocen las verdaderas dificultades y problemas con que se encuentran los autores de las propuestas 1, 2 y 3, no han llegado a convencerse de que las propuestas mismas sean las soluciones adecuadas. Es más, algunos de estos Miembros han experimentado los mismos problemas pero los han resuelto utilizando los mecanismos e instrumentos existentes, manteniéndose dentro de los parámetros del Acuerdo". Como se observa en dicho informe, los Miembros han reconocido que si bien hay verdaderas dificultades para abordar el fraude, estos problemas podrían resolverse mejor con

una solución diferente a las propuestas en el párrafo 21. Lo que se necesita ahora es un compromiso sobre las posibles soluciones alternativas a este problema. Deberán examinarse las propuestas formuladas en las consultas del 10 de abril, así como otras alternativas, en vez de continuar estudiando las propuestas del párrafo 21, ya que es claro que éstas no son viables.

60. En relación con los tres incisos concernientes al párrafo 22, sería conveniente, como se observa en el informe del Presidente del Consejo General, que los autores reflexionaran sobre la manera de revisar el texto de los incisos 2 y 3 para que se reflejen debidamente las preocupaciones que hay que tratar de resolver. Una vez que se cuente con esas revisiones, los tres incisos deben enviarse al Comité de Valoración en Aduana, para su examen técnico.

61. En lo que respecta al Acuerdo sobre los ADPIC, en el informe se afirma que en algunas cuestiones, la probabilidad de encontrar la forma de resolverlas en el proceso actual es más bien baja y que algunas de las cuestiones están siendo atentamente examinadas en el Consejo de los ADPIC. De hecho, casi todas las cuestiones mencionadas en los párrafos 21 y 22 se han examinado activamente en el Consejo de los ADPIC así como en otras organizaciones internacionales, como la OMPI. Por ello, no se puede decir que no haya habido un compromiso serio. Estas cuestiones son sumamente técnicas y complejas. Lo que hay que aclarar es si los Miembros desean duplicar los debates del Consejo de los ADPIC en la reunión extraordinaria del Consejo General. Algunos han propuesto un debate político sobre ciertas cuestiones importantes, pero para ello habrá que ponerse de acuerdo precisamente sobre cuáles son las importantes. El Consejo de los ADPIC tiene también su propio mandato y calendario. El Consejo General quizá desee instar al Consejo de los ADPIC a que intensifique su labor en relación con las cuestiones mencionadas en los párrafos 21 y 22. Deben supervisarse los progresos al respecto, y el Presidente del Consejo General quizá pueda convocar una reunión informal del Consejo General para ofrecer orientación política sobre la forma de salir de este punto muerto.

62. El representante del Japón dice que la posición básica de su delegación acerca de la aplicación es que ésta constituye un elemento importante del trabajo previo a la Cuarta Conferencia Ministerial, y su país continuará dedicando tiempo y energía a completarla antes de la Conferencia de Doha, como se acordó en la Decisión de 3 de mayo. Continuará ocupándose de todas las cuestiones planteadas en este contexto con el fin de identificar los elementos para una decisión adecuada en Doha. El Japón ha dedicado, y continuará dedicando recursos adicionales a esta área en forma de programas de creación de la capacidad y de asistencia técnica para facilitar la aplicación de varios acuerdos por los países Miembros en desarrollo. Además, ha participado seriamente en debates sobre la ampliación de los períodos de transición de los Acuerdos sobre Valoración en Aduana y el Acuerdo sobre las MIC, en los que se han conseguido importantes progresos, y continuará haciendo otro tanto en el futuro. No obstante, la aplicación no es el único elemento importante que se debe resolver en los preparativos para Doha. Dado el escaso tiempo disponible, los Miembros tienen que abordar las cuestiones relativas a la aplicación de la forma más eficaz y pragmática posible.

72. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación ha participado en los debates sobre las cuestiones relativas a la aplicación y ha comprobado que muchas de las aclaraciones y sugerencias son esclarecedoras y útiles. Se han conseguido progresos en los debates sobre algunas cuestiones, como la valoración en aduana, los ADPIC, los obstáculos técnicos al comercio y la creación de capacidad, que se superponen en algunas de las propuestas sobre la aplicación. En el año 2000 se tomó una decisión sobre varios temas de mayor o menos interés para las delegaciones, como la rectificación solicitada por Honduras acerca del Anexo VII del Acuerdo sobre Subvenciones y el plazo de las normas de origen que todos están tratando de cumplir de forma acelerada habida cuenta de la gran cantidad de trabajo pendiente. Los Estados Unidos observan con satisfacción que en el Comité de Normas de Origen se ha llegado a un consenso sobre 23 cuestiones pendientes, a consecuencia del nuevo impulso que han cobrado las negociaciones y de la adopción de un método de trabajo. En el informe del Presidente se reconoce también el constante progreso de la participación de

países en desarrollo en las organizaciones competentes de normalización relacionadas con la labor de la OMC en materia de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, se ha observado un constante progreso en la labor del Comité de Valoración en Aduana y el Consejo del Comercio de Mercancías en lo que respecta al trato de las peticiones de prórroga, al mismo tiempo que se comprueba que en las soluciones se incluyen también medidas de asistencia técnica y creación de capacidad.

73. En lo que se refiere a los ADPIC, su delegación ha tratado en todo momento de encontrar la manera de resolver estas cuestiones y en el año 2000 ayudó a formular planteamientos que permitieran abordar cada una de las peticiones teniendo en cuenta las preocupaciones comerciales de los Estados Unidos y las de los países que solicitaban ampliaciones. Hace ya un año desde que expiraron esas prórrogas, y los Estados Unidos han dado muestras suficientes de moderación. Siguen estando comprometidos en aprovechar las soluciones propuestas que han conseguido impulso en 2000 para abordar las cuestiones relativas a los ADPIC, sin perjuicio de los derechos de los Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC: El informe del Presidente sobre otras consultas específicas en los distintos sectores es preciso y contiene ideas sobre la forma de actuar en lo sucesivo, y en particular, sobre cómo hacer frente a las cuestiones todavía no examinadas. Los Estados Unidos han participado en esas consultas, han escuchado atentamente, han formulado preguntas y han aprendido más acerca de las propuestas. Las preocupaciones relativas a la aplicación son un tema fundamental para cada uno de los Miembros, en particular para los países en desarrollo, y la iniciativa actual debe conseguir la aplicación plena y fiel de los acuerdos. La Declaración Ministerial de Ginebra de 1998 pone de manifiesto que esto forma parte del programa de trabajo del Consejo General. Los Estados Unidos continuarán participando activamente en esta labor con el fin de identificar y conseguir lo que resulta adecuado. Muchas veces, las propuestas se han examinado rigurosamente y se han debatido en los órganos subsidiarios competentes. En algunos casos, aunque no en todos, se ha llegado a una solución de las cuestiones planteadas. Los Estados Unidos han propuesto también en las consultas que el Comité OTC y la Secretaría inviten a las organizaciones de normalización a incluir, en sus informes, información acerca de su propia asistencia técnica para que los representantes de países en desarrollo puedan participar en sus reuniones. Como se observa en el informe del Presidente, la labor realizada en ese Comité en el contexto del examen trienal ha dado lugar a una decisión sobre los principios y procedimientos para el desarrollo de normas internacionales, guías y recomendaciones en relación con los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC. Los Miembros deberán recibir información sobre los progresos al respecto. Los Estados Unidos examinarán las opciones relativas a algunas otras propuestas de esta categoría.

74. En relación con la agricultura, su delegación ha tomado nota del informe de situación del Presidente en lo que respecta a los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios, y espera con interés el informe de situación relativo a las propuestas adicionales sobre este inciso que presentará el Vicepresidente del Comité de Agricultura en la reunión de mayo del Consejo General. Los Estados Unidos respaldan también la sugerencia del Presidente de que se presenten informes periódicos sobre los progresos en la aplicación del párrafo 2 del artículo 10. En cuanto a los ADPIC, es mucho todavía lo que se debe examinar, pero los Estados Unidos han indicado en el Consejo de los ADPIC y en consultas informales sus opiniones sobre la manera de plantear las propuestas. De todas formas, en algunos casos, el Consejo de los ADPIC continuará la labor actual, por ejemplo, su examen de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el estudio de las propuestas para complementar la aplicación actual del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo. Su delegación se complace también de haber podido desempeñar un papel fundamental en colaboración con el grupo de países de África para llegar a un acuerdo sobre su propuesta de mantener un debate especial en el Consejo de los ADPIC sobre la flexibilidad implícita en el Acuerdo sobre los ADPIC para hacer frente a las crisis sanitarias. En la consulta informal sobre los servicios, los Miembros han examinado nuevas fórmulas, que es preciso seguir examinando en relación con los compromisos en el Modo 4, y la propuesta referente al artículo IV del AGCS. No obstante, los Miembros deben considerar si ambas propuestas se han cumplido ya en el contexto del Acuerdo sobre

las Directrices y Procedimientos de Negociación en el AGCS. En cuanto al Modo 4, los Estados Unidos y algunas delegaciones han formulado también propuestas adicionales en las negociaciones sobre los servicios. Naturalmente, los Estados Unidos tienen intención de cumplir plenamente sus actuales compromisos en relación con el Modo 4.

75. En relación con otras propuestas, como los incisos relativos a la Valoración en Aduana de la recapitulación de la Secretaría, los debates técnicos han ayudado a los Estados Unidos a comprender mejor las preocupaciones que han motivado las propuestas. Es necesario dar un paso atrás y considerar estas propuestas más a fondo teniendo en cuenta esos debates. En cuanto a otras cuestiones en las que sólo se ha producido una primera lectura, los Estados Unidos esperan con interés que se examinen y evalúen más detenidamente. El Presidente ha informado sobre las últimas novedades en las cuestiones relativas a la aplicación que se están examinando en órganos subsidiarios y no se han planteado todavía en sus consultas, en particular, la labor del Comité de Subvenciones, y ha habido un informe sobre los progresos recientes del Grupo ad hoc sobre la Aplicación del Comité de Prácticas Antidumping. Los expertos en medidas antidumping han colaborado de manera constructiva para ultimar y aprobar un tercer documento de recomendaciones en que se esbozan directrices indicativas sobre "prácticas recomendables" en una esfera particular de la administración de la legislación antidumping. Este documento, sobre una lista indicativa de los elementos pertinentes para una decisión acerca de la petición de prórroga para facilitar información, ha sido adoptado por el Comité Antidumping hace pocos días. En él se dan orientaciones sobre los factores y criterios que las autoridades deben tener en cuenta al tomar una decisión sobre la concesión o denegación de las prórrogas solicitadas por los exportadores para facilitar información a los investigadores. Este documento sigue a otras dos recomendaciones anteriormente elaboradas y aprobadas en los dos últimos años: una sobre la cronología de las notificaciones que deben efectuarse a las autoridades extranjeras antes de que se inicie una investigación, aprobada en octubre de 1998, y otra sobre los plazos para la recopilación de datos sobre la existencia de dumping y daño, aprobada en mayo de 2000. El Grupo ad hoc sobre la Aplicación ha realizado también recientemente progresos sustanciales en relación con otro conjunto de recomendaciones, referentes a los tipos de información que se deben incluir en las determinaciones afirmativas preliminares de dumping y daño. Alguno puede pensar que esta labor se refiere a los procesos y procedimientos de las medidas antidumping más que a la metodología y al fondo, pero la labor realizada se ha decidido mediante consenso, y no hay que infravalorar su importancia. Los procedimientos de la investigación antidumping afectan a la esencia de la determinación si las medidas de las autoridades antidumping, y las normas que éstas siguen, están basadas en la apertura y la transparencia, reconocen la totalidad de los derechos de participación y garantizan el respeto de las garantías de procedimiento. Estas cuestiones son importantes para determinar el verdadero efecto de las medidas antidumping, y contribuyen a incrementar la confianza de los Miembros en que se respetan los intereses legítimos en lo que respecta al acceso a los mercados y a la protección frente a las prácticas comerciales desleales causantes de daño.

76. Los Miembros deben considerar atentamente cuál es la mejor manera de orientar el proceso desde este momento hasta la Conferencia de Doha, sobre todo habida cuenta del trabajo pendiente. Como se indica en la lista recapitulativa del Presidente sobre los preparativos para dicha reunión, la aplicación forma parte integrante de los mismos. Aun cuando el trabajo se organice en forma paralela, debe realizarse de tal maneja que los recursos y el tiempo se utilicen de manera eficaz. Los Estados Unidos acogen con satisfacción la propuesta del Presidente sobre este tema. El proceso ha funcionado bien y es preciso entablar debates en el marco del planteamiento temático sobre las cuestiones aún no examinadas en 2001 y sobre algunas que ya se han examinado. Por motivos de transparencia, el Presidente deberá continuar manteniendo reuniones informales y abiertas más amplias tras las consultas más reducidas, ya que este método ayudará a garantizar la participación general en un tema importante para todos. En cuanto a la labor posterior, puede ser conveniente establecer una visión general del proceso futuro, con inclusión del número y calendario de otras reuniones extraordinarias. Teniendo en cuenta lo que queda todavía por hacer, los Estados Unidos podrían considerar la posibilidad de celebrar hasta tres reuniones de esa naturaleza, con preparación

completa mediante reuniones informales antes de cada una de ellas. La distribución de estas reuniones debe dejarse en manos del Presidente, pero tal vez podría haber una en junio, otra en julio y otra en octubre. Los Estados Unidos acogen también con satisfacción la propuesta de que en el calendario de cualquier reunión relativo a la aplicación se indiquen los temas que se van a abordar.

84. El representante de la India dice que su declaración abarcará tres aspectos generales: el informe del Presidente sobre la situación actual de las consultas relativas a las propuestas de aplicación, una respuesta a algunas de las observaciones de otras delegaciones y la organización del trabajo futuro. Aunque sus comentarios se referirán sólo a algunos de los Acuerdos, ello se debe a la escasez de tiempo y no a falta de interés por las consultas relativas a los otros Acuerdos. La India está también sumamente interesada en algunas esferas que no han sido aún objeto de consultas, como los textiles y las medidas antidumping.

85. En lo que se refiere a la valoración en aduana, el informe parece indicar que será necesario volver a ocuparse de estas cuestiones en otra ocasión, con el fin de llegar a una decisión adecuada. Dada la complejidad de estos temas, hay que reconocer las dificultades y problemas que se plantean, en particular en relación con el primer inciso relativo al intercambio de información sobre los valores de exportación. La India espera que se celebren nuevas consultas en ese ámbito, con el fin de buscar soluciones que puedan resolver los problemas identificados, ya que los instrumentos y mecanismos actuales no son, ni mucho menos, suficientes. Una delegación ha dicho que, en lo que se refiere al primer inciso del párrafo 21, las soluciones propuestas no son adecuadas. En el informe del Presidente del Comité de Valoración en Aduana se reconocen claramente las dificultades y los problemas reales con que se ha tropezado con respecto a los tres incisos del párrafo 21, pero algunos Miembros no están convencidos de que las soluciones propuestas en esos incisos sean las más indicadas. Esos Miembros, tras reconocer las dificultades reales que han encontrado los defensores de las propuestas, argumentan que el mecanismo que ellos han utilizado para resolver estas dificultades deberá ser utilizado también por los autores de las propuestas, aun cuando los problemas que se plantean sean diferentes. Otro problema estriba en que, por su estructura, el informe del Presidente del Comité presenta primero, conjuntamente, la introducción de las respuestas de la India y sus respuestas a los Miembros y, luego, las preguntas y preocupaciones de los Miembros, lo que da la impresión de que los defensores de la propuesta no pudieron abordar todas las cuestiones/preocupaciones. No obstante, la India ha respondido a todas las preguntas. Otra cosa es que los Miembros encuentren o no esas respuestas aceptables o convincentes.

86. En lo que se refiere a las cuestiones del inciso del párrafo 22 relativo al Acuerdo sobre Valoración en Aduana y a la conveniencia de someterlas o no a la consideración técnica del Comité, el representante señala que no hay prevista otra reunión de ese Comité hasta octubre de 2001. Por ello, si se remitieran al Comité debe quedar claro que éste celebrará una reunión extraordinaria en junio e informará al Consejo General a finales de ese mes. La India agradece la sugerencia del Presidente de que los autores de la propuesta consideren la posibilidad de aclarar el texto del segundo y tercer incisos, y trabajará en ese sentido. En cuanto a las propuestas de aplicación sobre las cuestiones del párrafo 21 relativas al Acuerdo sobre los ADPIC, el tono del informe del Presidente es pesimista. En cambio, la India considera que, si se trabaja seriamente, es posible encontrar soluciones significativas. Con respecto a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Presidente del Consejo de los ADPIC presentó en diciembre de 2000 bajo su exclusiva responsabilidad un informe en el que se observa claramente que el examen de este tema acaba apenas de empezar y dista mucho de estar terminado. Debe pedirse al Consejo de los ADPIC que vuelva a informar al Consejo General después de su reunión de junio. En este contexto, algunas de las propuestas del párrafo 21, en especial las relativas a las excepciones de la patentabilidad y el acceso a los medicamentos considerados esenciales son ahora objeto de gran atención pública. La India se muestra complacida de que el tema del acceso a los medicamentos se examine en el Consejo de los ADPIC en junio. Debe pedirse al Consejo de los ADPIC que inmediatamente después de su reunión de junio haga una aportación amplia al Consejo General, en particular en lo que respecta al

acceso a los medicamentos y a las excepciones de la patentabilidad, así como a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. No obstante, dada la naturaleza eminentemente política de las cuestiones relativas a los ADPIC, quizá sea necesario celebrar una reunión extraordinaria del Consejo General en la que se traten exclusivamente esos temas teniendo en cuenta los resultados de la reunión de junio y el informe que pueda presentar el Consejo de los ADPIC. Las consecuencias del Acuerdo sobre los ADPIC en varias esferas están mereciendo la atención de los gobiernos, las ONG y la sociedad civil, y en la Conferencia de Doha los Ministros no pueden prescindir de esta cuestión.

E. REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2001 (WT/GC/M/67 - PÁRRAFOS 13, 16, 25 A 27, 34 Y 35, 50 Y 51 Y 54 Y 55)

13. Las cuestiones cuya remisión a los órganos subsidiarios pertinentes, con el acuerdo de los Miembros, proponen el Director General y él, a fin de que esos órganos las examinen e informen al respecto al Consejo General no más tarde del 30 de septiembre son las siguientes:

16. Inciso 56 - La propuesta que encomienda al Comité de Valoración en Aduana que examine las preocupaciones de los Miembros relacionadas con el fraude en cuestiones aduaneras.

25. El representante de Zimbabwe, que hace uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, dice que las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación son un tema al que todos los Miembros conceden una gran importancia que se ha reflejado en los párrafos 8 y 9 de la Declaración Ministerial de Ginebra, en el proceso de preparación de la Tercera Conferencia Ministerial y en numerosos debates que han tenido lugar ulteriormente en el Consejo General. Recuerda, en particular, la Decisión del Consejo General de 15 de diciembre de 2000, en relación con la cual el Grupo Africano acoge con satisfacción los esfuerzos que se hacen en el documento del Presidente por identificar elementos sobre los que puedan realizarse nuevos progresos. La iniciativa ha sido oportuna, ya que los progresos sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán decisivos tanto para crear el clima adecuado, a medida que se intensifican los preparativos de Doha, como para el resultado de la propia reunión de Doha. El Grupo Africano alienta los esfuerzos por llegar a una conclusión satisfactoria de esta cuestión, tomando en consideración la Decisión de 15 de diciembre de 2000. Sin embargo, las propuestas formuladas en el documento están lejos de ser completas y sólo reflejan el estado actual de las consultas. El Grupo Africano se siente preocupado ante la falta, hasta el momento, de auténticos progresos para resolver las cuestiones pendientes relativas a la aplicación. Como ha reconocido el Presidente, cuestiones clave referentes a los ADPIC, las medidas antidumping y los textiles y el vestido han quedado totalmente excluidas del documento. El Grupo Africano está dispuesto a esforzarse para que se llegue a un consenso que permita avanzar en relación con los elementos identificados hasta el momento, en el entendimiento de que las cuestiones pendientes se abordarán antes de Doha y en Doha, a la luz de la Decisión de 15 de diciembre de 2000, a fin de que los Ministros puedan dar orientaciones sobre las cuestiones que quizá no estén totalmente resueltas.

26. En particular, y sin perjuicio de las posiciones de los diversos miembros del Grupo Africano, estos miembros conceden especial importancia a las siguientes cuestiones de aplicación que aún no se han abordado adecuadamente: las propuestas que figuran en los incisos 2 y 4 constituyen una buena base para hacer avanzar la labor en esa esfera; no obstante, instan al Comité de Acceso a los Mercados a acelerar su examen de la propuesta formulada en el inciso 4. Además de las medidas que se tomen en relación con la propuesta que figura en el inciso 5, se debe adoptar una decisión urgente sobre el inciso 7, teniendo en cuenta los elementos contenidos en las propuestas presentadas por un grupo de países en los documentos G/AG/W/49 y G/AG/W/49/Add.1. Dado el nivel de desarrollo de la mayor parte de los países africanos, debe entenderse que las palabras "plazos más largos" que figuran en el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo MSF y las palabras "plazo prudencial" contenidas en el párrafo 12 del artículo 2 del Acuerdo OTC aluden a un plazo no inferior a 12 meses, y las disposiciones sobre asistencia técnica de esos acuerdos deben hacerse obligatorias. Además, el

examen del funcionamiento y la aplicación del Acuerdo MSF previsto en el párrafo 7 de su artículo 12 debe realizarse cada dos años. Las propuestas formuladas en el inciso 56 proporcionan una buena base para hacer avanzar la labor en esa esfera, y el Grupo Africano espera con impaciencia que se termine el texto relativo a la asistencia técnica que está examinando actualmente el Comité de Valoración en Aduana. En cuanto al anexo VII del Acuerdo sobre Subvenciones, este examen debe tomar en consideración las características específicas y las necesidades de desarrollo de una serie de países africanos. En lo relativo al inciso 85, la propuesta no da plenamente cabida a las preocupaciones del Grupo Africano: una fórmula aceptable sería que se declarara con claridad que "los países desarrollados aplicarán plenamente los compromisos que han asumido en relación con el modo 4". Por otra parte, es necesaria una pronta decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo IV del AGCS. En lo que se refiere al inciso 90, lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC debe hacerse obligatorio. En lo relativo al inciso 92, recuerda que el Grupo Africano presentó al Consejo de los ADPIC propuestas sobre la cuestión de los ADPIC y la salud pública, que contienen elementos para que los Ministros puedan adoptar una decisión apropiada en Doha. Así pues, sería aconsejable esperar el resultado de los debates que se están celebrando actualmente en el Consejo de los ADPIC. En cuanto a la línea 4 del inciso 96, el Grupo Africano prefiere una fórmula que haga referencia específicamente a la manera de dar carácter operativo y vinculante a las disposiciones relativas al trato especial y diferenciado de los Acuerdos de la OMC. El Grupo Africano acoge con satisfacción las propuestas contenidas en los incisos 97 y 99.

27. Estas observaciones sólo se refieren a las propuestas que se han formulado en la presente fase y no son exhaustivas. El Grupo Africano sigue dedicado a lograr que se resuelvan todas las cuestiones y preocupaciones pendientes relativas a la aplicación, a la luz de la Decisión de 15 de diciembre de 2000. Otras cuestiones que preocupan al Grupo son las siguientes: la pronta concesión de la exención solicitada para el Acuerdo de asociación ACP/UE; la necesidad de reexaminar el artículo XXIV del GATT de 1994 y la Cláusula de Habilitación de 1979, a fin de garantizar una flexibilidad suficiente en los acuerdos comerciales regionales entre países en desarrollo y entre países desarrollados y en desarrollo; la adopción de nuevas medidas para la aplicación de la Declaración de Marrakech sobre el logro de una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial; la necesidad de convertir la asistencia técnica en una actividad central de la OMC y, con ese objeto, de aumentar considerablemente el presupuesto ordinario para asistencia técnica; la necesidad de que la OMC y otras organizaciones internacionales prosigan e intensifiquen sus actividades de asistencia técnica y encaminadas a la creación de capacidad mediante el Marco Integrado y el fortalecimiento y la extensión a un mayor número de países africanos del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica para una selección de países menos adelantados y otros países africanos (JITAP); y la concesión de la condición de observador permanente a la OUA, la Liga Árabe y otras organizaciones intergubernamentales cuyas solicitudes están pendientes desde hace mucho tiempo. Todos los Miembros tienen interés en que se llegue a una conclusión satisfactoria de las cuestiones relativas a la aplicación.

34. El representante de la India recuerda que en la Decisión de 3 de mayo de 2000 se estableció para la solución de las cuestiones de aplicación un plazo vinculado con la Cuarta Conferencia Ministerial. De buena fe, su delegación declaró que el documento del G-7 podía utilizarse para activar la celebración de nuevas consultas intensivas, a fin de que pudieran adoptarse decisiones significativas en la presente reunión extraordinaria. El Presidente y el Director General han distribuido recientemente lo que denominan elementos para hacer avanzar el proceso. Aunque la India comprende y aprecia el ánimo que ha inspirado ese esfuerzo, el documento ha despertado gran ansiedad en su delegación. El primer gran problema es que muchos temas importantes que figuran en la sección 1 del documento del G-7, como los textiles, las medidas antidumping y las MIC, se han excluido del documento. También preocupa a la India que se proponga que un gran número de cuestiones se remita a los órganos subsidiarios, ya que esto no es una solución en sí mismo. Una de las principales inquietudes de la India ante el documento se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con el cual se identifican en el documento algunos elementos relativos a los ADPIC y la

salud pública que crearían una situación aún peor que la actual. Debe permitirse que concluya el debate que se está celebrando sobre esta cuestión en el Consejo de los ADPIC antes de intentar proseguir los trabajos. La India está tratando de hacer, junto con varios otros Miembros, una contribución que permita afinar las sugerencias contenidas en el documento del G-7 y el documento del Presidente y espera que, en los días que se avecinan, puedan tener lugar consultas intensivas sobre esta cuestión a fin de hacer avanzar el proceso. Las secciones 2, 3 y 4 del documento del G-7 son igualmente importantes, y deben celebrarse consultas apropiadas al respecto, con objeto de hallar soluciones para todas esas cuestiones lo antes posible.

35. En cuanto a la remisión de algunas cuestiones a los órganos subsidiarios, debe consultarse al autor de la propuesta que figura en el inciso 4. Por lo que se refiere al inciso 12, esta cuestión ya se remitió al Comité MSF, cuyo informe se encuentra en las últimas fases de elaboración. Por lo tanto, no es necesario ni útil remitir de nuevo ese inciso a ese Comité. Debe pedirse a éste que presente su informe a finales de julio, a más tardar. En lo relativo al inciso 56, volver a remitir la cuestión al Comité de Valoración en Aduana carece de sentido. En cuanto al inciso 65, la India podría estar de acuerdo en que se remita al órgano subsidiario, pero debe haber algunas directrices de alcance general para su examen. Por lo que se refiere al inciso 68, el Comité de Subvenciones está examinando actualmente la cuestión, que no se le debe remitir de nuevo. En cuanto al inciso 80, la India puede aceptar su remisión. En el caso del inciso 83, la cuestión es sumamente política y no tiene carácter técnico, por lo que será más apropiado que el Consejo General celebre consultas al respecto. En lo relativo al inciso 96, la India puede aceptar que se remita al órgano subsidiario. El orador sugiere que se escalonen los plazos para la presentación de los informes de los órganos subsidiarios, fijando fechas anteriores al 30 de septiembre en el caso de las cuestiones ya remitidas, a fin de evitar que se presente simultáneamente un gran número de informes. Además, la logística para las reuniones de esos órganos debe establecerse con bastante anticipación, a fin de garantizar que terminen su labor dentro de los plazos fijados. La India continuará participando positivamente en el proceso que se está desarrollando en relación con las cuestiones de aplicación y espera que se celebren consultas intensivas a fin de intentar hallar soluciones, por lo menos para algunas de esas cuestiones, en el entendimiento de que aquellas que aún no se han tratado se abordarán muy pronto. Expresa la gratitud de la India a los Estados Unidos por su gesto de ser los primeros en hacer uso de la palabra en la presente reunión y confía en que ese gesto se refleje en la adopción de decisiones significativas en los próximos días.

50. El representante del Pakistán dice que, pese a la iniciativa del G-7 y pese a los esfuerzos del Presidente y el Director General por proponer un texto, en esta etapa su delegación, al igual que las de muchos otros países en desarrollo, se siente decepcionada y frustrada. No sólo ha habido un retraso del resultado tanto tiempo esperado sino que también se ha reducido progresivamente el nivel de las aspiraciones que se pide a los países en desarrollo que abriguen en la esfera de la aplicación. Mientras que el párrafo 21 del proyecto de texto de Seattle de 19 de octubre de 1999 contiene aproximadamente 50 propuestas de medidas prontas o inmediatas y el documento del G-7 hace referencia a unas 20 propuestas para la adopción pronta de medidas, en el documento del Presidente recientemente presentado sólo se formulan alrededor de 10, si se excluyen las propuestas de procedimiento. Además, el contenido de esas propuestas también es decepcionante. No serán muy útiles para corregir el desequilibrio resultante de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, y la mayor decepción es que, hasta el momento, las cuestiones clave de los textiles, las medidas antidumping y las MIC ni siquiera se han abordado. Aunque se han celebrado consultas sobre las MIC, dichas consultas han sido insatisfactorias hasta la fecha. Las consultas sobre los textiles sólo se iniciaron el día anterior y las relativas a la aplicación de las medidas antidumping aún no han comenzado. El hecho de que, en más de dos años, el Consejo General no haya podido enfrentarse con las propuestas relativas a los textiles y a las medidas antidumping indica una falta colectiva de la voluntad de responder a las preocupaciones de los países en desarrollo. Para el Pakistán, cuyos intereses comerciales están concentrados en un 60 por ciento en los textiles y el vestido, esta falta de voluntad está directamente relacionada con el nivel de decepción y frustración que siente ante las actuales actividades. Su

delegación se pregunta dónde conducirá esta tendencia descendente y si proseguirá el desgaste de las propuestas relativas a la aplicación hasta que carezcan totalmente de sentido.

51. En cuanto a la remisión de cuestiones a los órganos subsidiarios, el Pakistán se ha opuesto a ella porque tiene la sensación de que las cuestiones que se remiten a esos órganos no vuelven a aparecer. Ha instado a que esas cuestiones se devuelvan al Consejo General lo antes posible. Cualquier plazo que se establezca -y el 30 de septiembre es la fecha límite en el caso de las nuevas remisiones- debe aplicarse también a las cuestiones ya remitidas. Por lo que se refiere a las propuestas de nuevas remisiones, han de elaborarse directrices concretas para las actividades del órgano subsidiario de que se trate. De las propuestas que figuran en el documento del Presidente, el inciso 12 ya se remitió el 18 de octubre de 2000 al Comité MSF, al que se debe instar a terminar su labor e informar al respecto en una fecha determinada. El inciso 56 se remitió en la misma fecha al Comité de Valoración en Aduana, y no parece que tenga sentido remitírselo de nuevo. Se debe pedir a ese Comité que presente su informe lo antes posible. El inciso 68 se remitió el 15 de diciembre de 2000 al Comité de Subvenciones, al que se debe instar a presentar su informe. En cuanto al inciso 83, el Pakistán está de acuerdo con los que no creen que deba remitirse al Comité de Subvenciones. Por lo que se refiere a las demás cuestiones, su delegación está dispuesta a trabajar con el Presidente en la elaboración de las directrices concretas que deben establecerse para su remisión. Pese a algunas de las intervenciones que han tenido lugar en la presente reunión, el Pakistán sigue sintiéndose sumamente preocupado ante la falta de progresos en la esfera de la aplicación. En la reunión para llevar a cabo la "verificación de la situación real" que tendrá lugar el 30 de julio, los Miembros habrán de estimar el punto en que se encuentran y el lugar al que deben dirigirse en el proceso de preparación de la reunión de Doha. Si, para entonces, el Pakistán considera que no existe ninguna perspectiva de alcanzar resultados significativos en lo que se refiere a las cuestiones de aplicación, el nivel de las aspiraciones para Doha tendrá que limitarse mucho e, independientemente de las cuestiones de aplicación, centrarse en los progresos relacionados con el orden del día incorporado.

54. El representante de Malasia dice que, para su delegación, el documento del Presidente representa un nuevo paso en el intento de hallar soluciones. Ha tomado nota de que los elementos que en él figuran no deben considerarse exclusivos, convenidos ni definitivos y de que el Presidente proseguirá las consultas sobre todas las demás propuestas, incluidas las contenidas en la sección 4 del documento del G-7. Sin embargo, queda poco tiempo. Estas cuestiones se están examinando desde hace casi dos años y deben resolverse inmediatamente, en cualquier caso antes de que se celebre la Conferencia Ministerial de Doha. Su delegación, como muchas otras de países en desarrollo, se siente sumamente decepcionada ante los progresos realizados hasta el momento. Remitir simplemente los temas a los órganos subsidiarios para que éstos los examinen puede crear una ilusión óptica de movimiento o progreso pero no es la solución. Lo que se necesita son decisiones concretas que eliminen los desequilibrios que existen en los acuerdos vigentes de la OMC y hagan operativa la letra muerta del GATT de 1994. Esto no quiere decir que ninguna de las propuestas que figuran en el documento del Presidente sea satisfactoria para Malasia; por ejemplo, en lo que se refiere al inciso 96, por el que la labor se remite al Comité de Comercio y Desarrollo, su delegación espera que los trabajos que se realicen en ese Comité arrojen resultados positivos. Aunque Malasia está dispuesta a considerar la posibilidad de que se proporcionen orientaciones, por lo menos sobre algunas de las cuestiones que han de remitirse a los órganos subsidiarios, el Grupo de países de ideas afines tiene intención de presentar otras posibles sugerencias en relación con las soluciones descritas en el documento del Presidente. Se espera que esta comunicación se convierta en parte del proceso de consultas y se considere una contribución positiva.

55. En cuanto a las remisiones propuestas, no es necesario remitir a los órganos subsidiarios respectivos el inciso 56, relativo a la valoración en aduana, ni el 68, relativo a las subvenciones, porque el Comité de Valoración en Aduana ya completó su labor sobre el inciso 56 y, pese a reconocer que existe un problema de fraude, no halló ninguna solución. Esta cuestión debe tratarse en el Consejo General. Análogamente, el Comité de Subvenciones ha deliberado y sigue deliberando

sobre el inciso 68 con arreglo al mandato que recibió anteriormente y darle un nuevo mandato no tendría ninguna utilidad. Además, el informe de ese Comité debe presentarse a finales de julio. Si la cuestión sigue sin resolver en ese momento, podrá establecerse un plazo firme para los debates del Comité. Por lo que se refiere al inciso 83, relativo al anexo VII del Acuerdo sobre Subvenciones, debe tratarse en el Consejo General y requiere una decisión de éste, por lo que no sería útil remitírselo al Comité de Subvenciones para que éste aporte su contribución. Para terminar, señala que los principales interlocutores comerciales han mostrado una actitud muy alentadora y positiva en la presente reunión y han indicado en todo momento que están dispuestos a trabajar para resolver las cuestiones de aplicación y deseosos de hacerlo. No obstante, lamentablemente, ese entusiasmo y esa energía no se han reflejado en las consultas celebradas sobre estas cuestiones, como lo demuestra la falta de progresos. Malasia espera que lo que esos Miembros han dicho en la presente reunión se refleje en las futuras consultas y que los principales interlocutores comerciales refuercen colectivamente su decisión de hallar soluciones auténticas y significativas para las cuestiones de aplicación.

F. REUNIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 3 DE OCTUBRE Y 1º DE NOVIEMBRE DE 2001
(WT/GC/M/70 - PÁRRAFOS 5 Y 6 Y 15 Y 16)

5. Primero, con respecto al programa de trabajo sobre el trato especial y diferenciado en relación con el inciso 96, considera que las delegaciones han señalado que el acuerdo sobre la fecha de julio de 2002 para las decisiones del Consejo General que figuran en los apartados i) y ii) de ese texto se basa en el entendimiento de que estas fechas constituyen objetivos que todos los Miembros se esforzarán al máximo por cumplir, y también de que este acuerdo es sin perjuicio de la naturaleza de las decisiones que puedan adoptarse en ese momento.

6. Segundo, con respecto a las cuestiones pendientes relativas a la aplicación, desea aclarar que cuando en el proyecto de Declaración Ministerial se prevé un mandato de negociación específico, las correspondientes cuestiones de aplicación se abordarán en el marco de ese mandato, de conformidad con el apartado a) del párrafo 12 de ese texto. Por ejemplo, el inciso 6 relativo a la agricultura se abordará en las negociaciones en curso sobre la agricultura en el párrafo 13 del proyecto de Declaración; los incisos 42-44, 46-48 y 50-54, relativos al Acuerdo Antidumping, se abordarán en las negociaciones sobre normas de la OMC propuestas en el párrafo 24 del proyecto de Declaración; y los incisos 64-66, 69-73, 76-79 y 81, relativos al Acuerdo sobre Subvenciones, se abordarán en las negociaciones sobre normas de la OMC propuestas en el párrafo 24 del proyecto de Declaración. Las demás cuestiones pendientes serán tratadas con carácter prioritario por los órganos competentes de la OMC, que, no más tarde del final de 2002, presentarán informe al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) con miras a una acción apropiada, de conformidad con el apartado b) del párrafo 12 del proyecto de Declaración.

15. El representante de Tanzanía, hablando en nombre de los PMA, dice que la presente reunión brinda la oportunidad de avanzar considerablemente en el tratamiento de la cuestión de la aplicación, pendiente desde hace tanto tiempo. Las cuestiones de aplicación planteadas por los PMA se han incluido finalmente en el proceso de consultas, con los resultados que ahora están examinando los Miembros. Los PMA, como parte de la familia de países en desarrollo, también han apoyado la resolución de las propuestas sobre aplicación formuladas con anterioridad a Seattle que han seguido siendo el núcleo de las consultas relativas a la aplicación. En Zanzíbar, los Ministros de los PMA identificaron nuevas cuestiones relativas a la aplicación propias de los PMA que es necesario resolver. A los PMA les agrada observar que el proyecto de Decisión revisado recoge algunas de sus propuestas. No obstante, aparte de que algunas de ellas no se han incorporado en absoluto, el modo en que muchas se han recogido no responde al nivel de eficacia propuesto que se pretendía, y en la mayoría de los casos, la redacción, mucho más floja, ha convertido el producto final en un compromiso que es más bien de máximo empeño. Así, en la mayoría de los casos, lo que en el texto

se recogía como "propuestas de los PMA" en realidad no es lo que éstos han propuesto, sino más bien lo que a la Secretaría le parece que es la mejor respuesta a las propuestas originales de los PMA.

16. Entre las propuestas que presentaron los PMA y respecto de las cuales, durante las consultas informales, entendieron que había consenso en que las resolviera la Cuarta Conferencia Ministerial, se encuentran las siguientes: respecto del Acuerdo sobre la Agricultura, los PMA quieren condiciones de acceso consolidado a los mercados, en franquicia de derechos y sin contingentes para las exportaciones originarias de PMA que abarquen todos los productos agropecuarios en todas sus formas, esto es, primarios, semielaborados y elaborados. Esta cuestión no se recoge en el proyecto de Decisión, y eso que es bien sabido lo fundamental que es para los PMA el acceso a los mercados. Acerca del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (el Acuerdo sobre Valoración en Aduana), aparte de la prórroga del período de transición previsto en el artículo 20 de dicho Acuerdo para permitir que los PMA adquieran la asistencia y conocimientos técnicos necesarios para aplicar el Acuerdo sin que afecte a sus respectivas ventajas comparativas, en virtud del párrafo 2 del Anexo III de ese Acuerdo trataron de que se les permitiera mantener sus respectivas reservas sobre valores mínimos durante un período más largo. Se trata de un tema de fundamental importancia para los PMA que se ha omitido en el texto revisado. Con respecto a la propuesta de hacer que las disposiciones relativas al trato especial y diferenciado sean vinculantes y efectivamente operativas, la forma actual en que se recoge no refleja ningún compromiso y es decepcionante. Acerca de los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, a los PMA les agrada que sus propuestas se hayan llevado a un rango superior y se haya planteado su resolución por los Ministros en Doha aunque, lamentablemente, diluidas. Acerca de las MIC, aunque en el curso de las consultas los PMA tuvieron la impresión de que en general los Miembros apoyaban sus propuestas de exención, el texto resultante no denota compromisos claros y la supuesta prórroga o exención estaría sujeta a términos y condiciones a negociar. En cuanto a los servicios, en el proyecto de texto se han omitido sus propuestas y, dada la importancia que los PMA atribuyen a estas propuestas, desean que de un modo u otro se trate de ellas. Éstas son sólo algunas de las preocupaciones concretas que a los PMA les plantea el proyecto de Decisión sobre la aplicación. No obstante, están de acuerdo con otros en la necesidad de tomar el impulso necesario para resolver las cuestiones de larga data relativas a la aplicación, por lo que pueden apoyar la adopción del proyecto de Decisión como un paquete pero sin excluir la posibilidad de que en el futuro se sigan examinando estas cuestiones y con la esperanza de que puedan resolverse rápidamente las demás cuestiones pendientes en el contexto del marco propuesto en el párrafo 12 del proyecto de Declaración Ministerial.

III. DECISIÓN DEL CONSEJO GENERAL

A. DECISIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2000 (WT/L/384)

CONSEJO GENERAL

Cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación

Decisión de 15 de diciembre de 2000

El Consejo General,

Habida cuenta de los párrafos 1, 2 y 5 del artículo IV y el párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Considerando la importancia que atribuyen los Miembros a las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación expresadas en los párrafos 8 y 9 de la Declaración Ministerial de Ginebra, en

el proceso preparatorio del tercer período de sesiones de la Conferencia Ministerial y en numerosos debates posteriores del Consejo General;

Considerando que la Decisión del Consejo General de 3 de mayo de 2000, en la cual se establece que el Consejo General, en una serie de reuniones extraordinarias, abordará las cuestiones y preocupaciones planteadas por los Miembros en relación con la aplicación de algunos Acuerdos y Decisiones de la OMC;

Recordando además que la Decisión de 3 de mayo de 2000 establece que el Consejo General evaluará las dificultades existentes, identificará los medios necesarios para solucionarlas y adoptará decisiones encaminadas a una acción apropiada;

Teniendo en cuenta el programa de trabajo sobre las cuestiones relativas a la aplicación acordado por el Consejo General en su primera reunión extraordinaria, el 22 de junio de 2000, que establece que en la tercera reunión extraordinaria, y a la luz de los progresos realizados hasta entonces, se adoptarán decisiones encaminadas a una acción apropiada en los casos en que sea posible;

Recordando el mandato dado al Presidente del Consejo del Comercio de Mercancías y las consultas celebradas sobre la cuestión de los períodos de transición previstos en el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio;

Tomando en consideración las peticiones formuladas al Director General de que colabore con las organizaciones internacionales de normalización pertinentes y las organizaciones intergubernamentales pertinentes sobre la cuestión de la participación de los países en desarrollo en sus trabajos;

Recordando además que en la reunión extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2000 se remitieron a los órganos competentes de la OMC las siguientes cuestiones relativas a la aplicación:

- en la esfera de la agricultura, la elaboración de disciplinas internacionalmente convenidas por las que se rija la concesión de créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de seguro de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 4 de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios;
- en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las preocupaciones de los países en desarrollo con respecto a la equivalencia de dichas medidas;
- en la esfera de los obstáculos técnicos al comercio, los problemas con que se enfrentan los países en desarrollo en las normas internacionales y en la evaluación de la conformidad;
- en la esfera de la valoración en aduana, la idea del intercambio de información entre administraciones de aduanas sobre los valores de las exportaciones en casos dudosos, la adición del costo de los servicios a que se refiere el párrafo 1 b) iv) del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y aspectos del método residual para la determinación del valor en aduana previsto en el artículo 7 de dicho Acuerdo; y
- en la esfera de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), la cuestión de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la cuestión de la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo, relativo a la transferencia de tecnología.

Tomando nota de los informes sobre las cuestiones mencionadas supra de los Presidentes del Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los Comités de Agricultura, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio y Valoración en Aduana, y del Director General;

Decide lo siguiente:

1. Acuerdo sobre la Agricultura

1.1 Los Miembros se asegurarán de que sus regímenes de contingentes arancelarios se administren de modo transparente, equitativo y no discriminatorio. En ese contexto, se asegurarán de que las notificaciones que presenten al Comité de Agricultura contengan toda la información pertinente, con inclusión de detalles de las directrices y procedimientos para la asignación de los contingentes arancelarios. Los Miembros que administren contingentes arancelarios presentarán adiciones a sus notificaciones al Comité de Agricultura (cuadro MA.1) para la fecha de la segunda reunión ordinaria del Comité en el año 2001.

1.2 El Comité de Agricultura examinará posibles medios de mejorar la eficacia de la aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios, y rendirá informe al Consejo General en la segunda reunión ordinaria del Consejo del año 2001.

2. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

De conformidad con la petición formulada al Director General de que colabore con las organizaciones internacionales de normalización pertinentes con respecto a la cuestión de la participación de los países en desarrollo en sus trabajos, se insta a dichas organizaciones a velar por la participación de los Miembros de diferentes niveles de desarrollo y de todas las regiones geográficas en todas las etapas de la elaboración de normas.

3. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

De conformidad con la petición formulada al Director General de que colabore con las organizaciones internacionales de normalización pertinentes con respecto a la cuestión de la participación de los países en desarrollo en sus trabajos, se insta a dichas organizaciones a velar por la participación de los Miembros de diferentes niveles de desarrollo y de todas las regiones geográficas en todas las etapas de la elaboración de normas.

4. Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

Observando que el proceso de examen y aprobación, en el Comité de Valoración en Aduana, de las solicitudes de distintos Miembros para la prórroga de la moratoria de cinco años prevista en el párrafo 1 del artículo 20 se está desarrollando bien, el Consejo General exhorta al Comité a que continúe esta labor.

5. Acuerdo sobre Normas de Origen

Los Miembros se comprometen a acelerar la labor restante para la armonización de las normas de origen no preferenciales a fin de completarla para la fecha del cuarto período de sesiones de la Conferencia Ministerial o, a más tardar, para el final del año 2001. El Presidente del Comité de Normas de Origen presentará bajo su responsabilidad informes periódicos al Consejo General sobre los progresos que se realicen. El primero de esos informes se presentaría al Consejo en su primera reunión ordinaria de 2001, y los siguientes, en cada reunión ordinaria que tenga lugar hasta la conclusión del programa de trabajo.

6. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

6.1 Teniendo en cuenta la situación excepcional en que se encuentra Honduras por ser el único Miembro inicial de la OMC con un PNB por habitante inferior a 1.000 dólares EE.UU. no incluido en el apartado b) del Anexo VII del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC), los Miembros piden al Director General que tome las disposiciones apropiadas, de conformidad con la práctica habitual de la OMC, para rectificar la omisión de Honduras de la lista de países que figura en el apartado b) del Anexo VII.

6.2 El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (Comité SMC) examinará como parte importante de su labor todas las cuestiones relativas a los párrafos 5 y 6 del artículo 27 del Acuerdo SMC, incluida la posibilidad de establecer la competitividad de las exportaciones sobre la base de un período de más de dos años.

6.3 El Comité SMC examinará como parte importante de su labor las cuestiones de las tasas agregadas y generalizadas de remisión de los derechos de importación y de la definición de "insumos consumidos en el proceso de producción", teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo Miembros.

7. Prosecución de los trabajos

Se confirma la Decisión de 3 de mayo de 2000 del Consejo General sobre cuestiones relativas a la aplicación. El Consejo General abordará las cuestiones y preocupaciones pendientes relativas a la aplicación, incluidas las recogidas en los párrafos 21 y 22 del proyecto de Texto Ministerial revisado de fecha 19 de octubre de 1999 (JOB(99)/5868/Rev.1), así como cualesquiera otras cuestiones relativas a la aplicación que planteen los Miembros, de conformidad con lo previsto en la Decisión de 3 de mayo de 2000 y en el programa de trabajo convenido el 2 de junio de 2000, con miras a completar el proceso no más tarde de la fecha del cuarto período de sesiones de la Conferencia Ministerial.

IV. DEBATES CELEBRADOS EN EL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA

A. ACTA DE LAS REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 7, 13, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2000 (G/VAL/M/17 - PUNTO 2)

2. Cuestiones de aplicación remitidas al Comité por el Consejo General y que figuran en el párrafo 21 h) del documento de la OMC JOB(99)/5868/Rev.1, de 19 de octubre de 1999

2.1 El Presidente recuerda al Comité que el Consejo General, en su reunión de los días 18 y 19 de octubre, le había solicitado que considerase tres propuestas relativas a la aplicación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Dichas propuestas se tomaron del párrafo 21 h) del documento de la OMC JOB(99)/5868/Rev.1, de 19 de octubre de 1999. En su solicitud el Consejo General había pedido que

el Presidente informase al Consejo sobre los resultados del examen de las mencionadas propuestas realizado por el Comité, antes de la reunión extraordinaria sobre la aplicación que el Consejo celebraría en diciembre. En consecuencia, el Comité no contó con mucho tiempo para considerar esos puntos. Después de la reunión de octubre del Consejo General el Presidente ha celebrado consultas al respecto con los Miembros. Ahora bien, en vista de que quedan aún varias cuestiones y opiniones que requieren una mayor aclaración, propone abrir el debate.

Apartado 1: Se incluirá en el Acuerdo una solución multilateral que permita, en casos dudosos, que las administraciones de aduanas de los países importadores soliciten y obtengan información sobre los valores de exportación en un plazo determinado.

2.2 El representante de la India señala que las tres propuestas fueron efectuadas por su delegación, que las explicó cuando se presentaron en el Consejo General. En síntesis, el primer apartado apunta a facilitar la aplicación y a desechar los casos que no representan el valor de transacción verdadero. Según su delegación, tras 12 años de experiencia en la aplicación del Acuerdo, es necesaria esa solución. El representante está dispuesto a responder las preguntas de los Miembros.

2.3 El representante del Senegal manifiesta que los países en desarrollo tienen dificultades para aplicar el Acuerdo. Su delegación apoya a la India, que lo ha estado aplicando durante 12 años y que estimó necesario efectuar la propuesta considerada. Por otra parte, muchos países, en especial países desarrollados, no han firmado el Convenio de Nairobi. La asistencia administrativa mutua es necesaria para poder beneficiarse con la cooperación de ciertos países, dado que el Senegal es básicamente un país importador. Con frecuencia su Gobierno se entera por otros Miembros de que las reglamentaciones no permiten intercambiar información ni datos. Empero, existen declaraciones de exportación que, cuando son facilitadas en algunas ocasiones a la administración de aduanas de su país, resultan útiles.

2.4 El representante de Venezuela hace suya la propuesta de la India.

2.5 El representante del Pakistán también apoya la propuesta de la India, que brinda una solución al problema general que afecta a muchos países en desarrollo. Una solución multilateral como la propuesta ayudaría a las administraciones de aduanas de todos los Miembros a resolver cuestiones que se refieren básicamente a transacciones y documentos fraudulentos. El principal punto de la propuesta tiene que ver con la facilitación de la información "en un plazo determinado". Según la experiencia de su país, los pedidos de información muchas veces se archivan sin responder. El cumplimiento de un plazo prescrito beneficiará a todos los Miembros.

2.6 El representante de Jamaica hace suya la propuesta de la India y los comentarios efectuados por el Senegal y el Pakistán.

2.7 El representante de Tailandia comunica al Comité que, aunque su Gobierno todavía está examinando la propuesta, presentará observaciones preliminares. Todos los Miembros están preocupados por la existencia de fraude, que puede distorsionar el comercio y la recaudación de ingresos. Ahora bien, su delegación pide que se aclaren varios puntos. En primer lugar, desea saber cuál es el significado de la expresión "soliciten y obtengan información" y de qué modo las autoridades aduaneras de los países importadores podrán solicitarla y obtenerla. En segundo lugar, si la mencionada expresión significa que la autoridad aduanera del país importador tendrá que ponerse en contacto con la autoridad aduanera de los países exportadores en forma oficial o extraoficial, cuáles serían los efectos legales si estos últimos no pudiesen facilitar la información justificadamente en un plazo determinado, teniendo presente que la propuesta se incluirá en el Acuerdo. En tercer lugar, cuál sería la definición de "casos dudosos" y cómo podría garantizarse a los Miembros que no se utilizará como obstáculo al comercio. En cuarto lugar, en Tailandia rige una Ley de Información

que no permite a los organismos gubernamentales facilitar este tipo de información. Por último, el representante entiende que las disposiciones del Convenio de Nairobi permiten a los países importadores solicitar información a otros miembros del Convenio y obtenerla.

2.8 El representante de Colombia también presenta opiniones preliminares sobre la propuesta. En vista de las dificultades con que tropiezan cotidianamente las aduanas cuando tratan de obtener la información necesaria para poder rechazar los valores declarados por los importadores cuando resulten fraudulentos, es importante contar con un compromiso multilateral para que las administraciones de aduanas intercambien información sobre los valores. El compromiso debería ser aceptado por todos los Miembros y establecido de modo tal que no pudiese llegar a ser un obstáculo a la libre circulación de mercancías ni un mecanismo discrecional. Además, algunos miembros manifestaron que la información solicitada es confidencial. El artículo 10 del Acuerdo permite que las administraciones de aduanas mantengan la confidencialidad salvo en los casos en los que el país exportador obtenga una autorización. La información intercambiada sería de carácter oficial y otras aduanas podrían tener acceso a ella de conformidad con el mecanismo establecido. Debería acordarse el compromiso de que la información se intercambiase únicamente con la finalidad de verificar datos y de que no se utilizase para otros fines o en casos en los que las diferencias de precios fuesen relativamente reducidas. Además, será necesario establecer reglamentaciones con respecto a los plazos y las condiciones para el intercambio de datos destinados a cualquier procedimiento de solución de diferencias. El principio básico debe ser siempre la reciprocidad.

2.9 El representante de la República Dominicana apoya la propuesta de la India, dado que su delegación estima que ayudará a países como el suyo en la aplicación del artículo VII del GATT. La transparencia no debe ser un obstáculo al comercio en ningún caso.

2.10 El representante de la India responde presentando un estudio de caso práctico relativo a las importaciones de partes de cámaras procedentes de un país no miembro de la OMC, en el cual se ponen de manifiesto las dificultades por las que atraviesa la administración de aduanas de su país. El caso es inusitado porque las partes son productos de líneas de ensamble y por lo general las cámaras se importan ensambladas. Tras el examen, el valor declarado resultó de 4.800 dólares EE.UU.; las mercancías procedían de un tercer país (no del país de origen) que comunicó a la aduana de la India que la declaración de exportación en su país era de 37.000 dólares EE.UU. Se trata de un caso en el que el valor declarado era diferente y, en realidad, representaba sólo el 13 por ciento del valor declarado real por el país exportador. La aduana de la India comprobó que había 11 envíos más con valores similares. La información recibida del exportador no pudo utilizarse porque las autoridades aduaneras del tercer país dijeron que tenía carácter confidencial. Si hubiese existido un acuerdo multilateral para obtener esa información, tal vez podría haberse utilizado.

2.11 Otro caso se refiere a 108 envíos de calzado importado que, supuestamente, estaban subvaluados. Tras el examen, la aduana de la India llegó a la conclusión de que el proveedor del país exportador no existía. En este tipo de casos es necesario contar con la asistencia de las administraciones de aduanas. Con respecto a la preocupación de que el hecho de solicitar información pudiese desvirtuarse y utilizarse como obstáculo al comercio, en las dos situaciones presentadas el despacho de las mercancías se autorizó con sujeción a la determinación final del valor. Las verificaciones efectuadas seguidamente revelaron que los precios eran muy inferiores a los valores declarados. El orador agrega que esos casos son poco frecuentes y que la administración de aduanas de cada país tiene diversos métodos de evaluación y gestión para detectar los casos dudosos.

2.12 Por otra parte, ratifica que la mayoría de las delegaciones no han suscrito el Convenio de Nairobi. Si se adhiriese la mayoría de los países, sería mucho más fácil resolver los problemas de aplicación del Acuerdo. En cuanto a la Ley de Información mencionada por Tailandia, hace hincapié en que la información recibida de los importadores y exportadores está protegida por la legislación de la India con respecto a su divulgación. Sólo cuando se demuestra que un "caso dudoso" es realmente

un caso de fraude, y debe someterse a un procedimiento judicial, entonces la ley permite que se revele la información. Es el mismo espíritu que anima al Acuerdo, según el cual no puede revelarse la información que se suministre a los efectos de la valoración en aduana.

2.13 El representante de los Estados Unidos reitera las preguntas de Tailandia y señala varias que, a su juicio, no han sido contestadas. Por ejemplo, ¿qué significa "un plazo determinado"? ¿comprende procedimientos formales o informales? La propuesta se refiere a "casos dudosos"; el Convenio de Nairobi, a "buenas razones para creer que se ha cometido una grave infracción contra la aduana". ¿La propuesta se ha hecho con la idea de equiparar esas dos expresiones? y ¿qué significa exactamente el término "dudoso"? ¿La definición de "dudoso" se refiere a que un precio parezca demasiado bajo o demasiado elevado o existen otros criterios? Además, el representante de los Estados Unidos pide que se confirme que los países en desarrollo también facilitarán información. Por otra parte, a su delegación no le ha quedado claro si en el caso de las partes de cámaras presentado por la India existía un acuerdo bilateral entre la India y el otro país, ni cuál fue la razón dada para que esa información no pudiese utilizarse. ¿Fue debido a la legislación del país que facilitó la información? Por último, su delegación solicita que se aclare por qué un acuerdo multilateral podrá resolver el problema cuando, al parecer, éste reside en la falta de un acuerdo bilateral para corregir la situación.

2.14 La representante de Nueva Zelandia formula otras preguntas. En primer término, cuáles son los criterios objetivos para determinar que existe un "caso dudoso" y cómo se determinó que los dos estudios de casos prácticos citados por la India merecían ser investigados. En segundo término, qué consecuencias legales tendría para una administración de aduanas el hecho de no poder facilitar la información solicitada o de no hacerlo en un "plazo determinado". La representante agrega que la administración de aduanas de su país en realidad no cuenta con toda la información prevista en la propuesta. En algunos casos, le resultaría difícil facilitar la información exacta sobre los valores de exportación; habría que dedicar mucho trabajo e introducir gran cantidad de modificaciones estadísticas en los requisitos nacionales para reunir la información. Esta cuestión se refiere también al tema de la confidencialidad. Por último, Nueva Zelandia desea saber cómo se ajustará la propuesta de la India a los acuerdos bilaterales, al Convenio de Nairobi y a otros instrumentos internacionales vigentes en la esfera considerada.

2.15 El representante de Australia formula preguntas similares a las de Tailandia y a las de otros países. Su delegación considera que los Miembros de la OMC tienen la responsabilidad de garantizar que los importadores cumplan las leyes nacionales relativas a la valoración. Recién cuando, ante dificultades serias, se hubiesen agotado todos los procedimientos a nivel nacional, podría solicitarse la cooperación de otras administraciones de aduanas. Su delegación teme que las propuestas presentadas por la India lleguen a imponer una carga injustificada a las administraciones de aduanas para facilitar información a los países importadores, lo cual constituiría una desviación de recursos inadecuada de la principal responsabilidad de las aduanas. Por ende, pide que la India aclare si, en realidad, ese temor está justificado. En segundo lugar, señala que existen instrumentos en virtud de los cuales los países importadores Miembros de la OMC pueden solicitar colaboración de otros Miembros de la Organización, tales como el Convenio de Nairobi, los acuerdos bilaterales y la Decisión Ministerial de la OMC relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado (en adelante, Decisión Ministerial). Australia desea saber cómo se ajusta la propuesta a los instrumentos vigentes mencionados y por qué éstos no bastan para resolver los problemas a los que se ha referido la India.

2.16 El representante del Canadá dice que su delegación desea saber, en primer lugar, los motivos de la propuesta. ¿Se han ensayado otros métodos? ¿Han dado buen resultado? De no ser así, ¿por qué? Con respecto a la propuesta propiamente dicha, pregunta si la información recibida de los países exportadores será verificada o auditada. ¿Cómo puede garantizarse que la información es exacta, dado que los datos de exportación no siempre son confiables, y que se utilizará para la aplicación del

Acuerdo sobre Valoración en Aduana? Asimismo, su delegación desea saber qué plazo se exigirá. Por otra parte, ¿cuál es el criterio de prueba de un caso dudoso? ¿Cuáles son los criterios según los cuales tendrá que facilitarse la información, dado que la propuesta lleva implícito que la información la obtendrá un país extranjero del país exportador, que también podría tener requisitos en materia de confidencialidad? Este último aspecto es decisivo. Su delegación teme que la propuesta dé pie para que la carga del cumplimiento de los requisitos recaiga en el país exportador en lugar de recaer en el país importador. El Acuerdo se basa en el hecho de que este último debe ser el encargado del cumplimiento. Por último, ¿qué harían los que han presentado la propuesta con los datos solicitados sobre los precios y para qué se utilizarían, habida cuenta en particular del apartado 3 y de la declaración de la República Dominicana que se refiere al artículo 7?

2.17 La representante de Singapur pregunta qué tipo de fraude es el que causa problemas a la India. Los ejemplos dados no resultan suficientemente claros para su delegación, que está convencida de que el fraude no es una cuestión de valoración en aduana. ¿Por qué sospecha la India que existe una declaración dolosa del valor en aduana presentado por el importador? ¿Cuál es el fundamento de la sospecha de fraude? ¿Se basa en la comparación de los valores declarados por otros importadores en la cual la declaración en cuestión se destaca por ser muy inferior o superior a las demás? Singapur solicita detalles sobre la forma en que la India detecta una información sospechosa. Puesto que se trata de un mercado de grandes dimensiones, no es posible que exista solamente un importador en el caso de las mercancías sospechadas de declaración fraudulenta. Debe haber otros importadores que importan la misma mercancía en diferentes puntos de entrada al país. ¿Se reúne y se compara esa información y se determina a partir de ella que el valor declarado podría ser incorrecto? ¿Cómo se verifica usualmente la exactitud del valor declarado? ¿Qué tipo de documentación justificante solicita la India al importador (los ejemplos citados son las órdenes de compra, el conocimiento de embarque, las facturas comerciales, etc.)? ¿En qué etapa de la investigación se solicita asistencia a otras administraciones de aduanas? ¿Podrían darse más detalles sobre los problemas planteados en casos específicos? Si la India sospecha que existe una connivencia tan generalizada entre los comerciantes, ¿otra administración de aduanas podría entonces confiar en la información presentada por un exportador indio? Si lo que se propone es una solución multilateral, otras administraciones de aduanas tal vez necesitarán solicitar información a la administración de aduanas de la India. ¿Podría esa solución ser de utilidad para otras administraciones de aduanas si no pudiesen verificar la exactitud de la información que les facilitasen las autoridades indias? Si, en cambio, no existiese esa connivencia generalizada, ¿no debería la India poder utilizar como referencia de la exactitud los valores declarados por otros importadores en el país y solicitar seguidamente al importador sospechado de fraude que justificase por qué su precio es tan distinto? La delegación de Singapur desea saber por qué la India no puede resolver el problema del fraude en el frente interno como otras autoridades de aduanas. Su Gobierno encara el problema del fraude en el país de importación pues la autoridad importadora tiene más acceso a las facturas y a otras declaraciones justificantes.

2.18 Asimismo, Singapur desea saber qué nivel de detalle se exige sobre el valor de exportación. Por ejemplo, su Gobierno recopila datos de exportación con fines estadísticos y no sobre la base de cada transacción en particular. En consecuencia, esos datos no contienen el grado de detalle necesario para que la India pudiese comparar la información que figura en la declaración de importación. Para que esos datos le resultasen útiles, debería haber desgloses específicos de los precios de exportación correspondientes a transacciones específicas. Para ello, las autoridades de exportación tendrían que examinar los materiales de los exportadores con miras a verificar los datos de la consignación correspondiente. Aun en el caso de que el valor de exportación no coincidiese con la declaración de importación, no sería necesariamente fraude. Si la connivencia de la que habla la India se refiere a una connivencia entre el importador y el exportador, el hecho de recibir el valor de exportación de la autoridad exportadora o del exportador no contribuirá a establecer la existencia de fraude. Además, ¿qué significa "casos dudosos"? Por otra parte, la propuesta de la India requiere que los países exportadores revelen información de carácter confidencial. Varios países no podrían revelar información que está protegida por leyes de confidencialidad. La India ha mencionado que su propia

legislación protege la información dada por las autoridades exportadoras. Empero, se trata tan sólo de una segunda etapa. Existen ciertos procedimientos en la legislación nacional que incluso podrían impedir el suministro de información de carácter confidencial en la primera etapa. Asimismo, Singapur desea saber si la India y otros países en desarrollo que respaldan la propuesta tienen los recursos necesarios para satisfacer la demanda adicional que impondría dicha propuesta y si están en condiciones de hacerlo en un "plazo determinado". Por último, la representante considera que la propuesta socava la premisa básica del Acuerdo al trasladar la carga de la prueba a las autoridades del país exportador. Para poder evaluar la existencia de fraude la información tiene que ser exacta. Si la propuesta apunta a que las autoridades de exportación tengan que verificar la exactitud de la información que reciben, la carga de la investigación recaerá en las autoridades del país exportador.

2.19 El representante de las Comunidades Económicas Europeas manifiesta que su delegación hace suyas todas las preguntas formuladas, que resultan adecuadas dado que se están examinando las posibilidades de éxito de la aplicación de un acuerdo multilateral. La labor asociada con dicho acuerdo corresponde al país de importación donde hay por lo menos cinco partes que están al corriente de la transacción y sobre cuya base se establece el acuerdo -el importador, la administración de aduanas, la administración fiscal, las autoridades financieras, contadores externos-, además de las muchas partes que deberían conocer y que conozcan los detalles de la transacción. Todas las facultades del Acuerdo se confieren a las autoridades del país importador, donde se encuentra toda la información pertinente, incluidas las mercancías y las pruebas. El país exportador es simplemente el lugar donde tiene lugar la exportación y puede haber otros países participantes cuando el comercio se realiza a través de diversas fronteras. En las circunstancias expuestas, tras 20 años de aplicación del Acuerdo, no sería prudente trasladar la carga, facilidad o competencia de la aplicación y administración del Acuerdo. Su delegación desea saber si la India tiene un problema particular, de un carácter particular, que requiera ser analizado y cuya solución tal vez sólo pueda facilitar la India si la causa es la disponibilidad de información en los circuitos comerciales correspondientes.

2.20 Cabe subrayar que deben sostenerse los principios generales. Ellos son el de la confidencialidad, el de no trasladar la carga del comercio a la administración de aduanas del país exportador y el hecho de que el país importador dispone plenamente de las facultades para aplicar el Acuerdo, incluido el acceso a la información y las dimanantes de la labor que se ha realizado respecto del Acuerdo desde su iniciación, es decir, la Decisión Ministerial. Esas facultades deben ejercerse a fondo pues comprenden un conjunto integral de instrumentos que pueden utilizarse para examinar los casos y tratar de determinar la existencia de fraude. En su mayor parte los importadores están dispuestos a colaborar con las autoridades del país importador. La delegación de las Comunidades Económicas Europeas considera que no es necesario recurrir a una solución radical cuando las buenas medidas ordinarias, la buena práctica y la buena administración del Acuerdo deberían permitir abordar los problemas que afrontan cotidianamente las administraciones de aduanas.

2.21 El representante de Corea agradece a la India por promover la aplicación del Acuerdo. Su delegación comprende las dificultades de aplicación que tiene ese país. No obstante, comparte las opiniones expresadas por Tailandia, los Estados Unidos, Nueva Zelandia y Singapur. En general, parece que el método sugerido en la propuesta puede resultar difícil de aplicar en las circunstancias reales en que el valor de transacción es determinado de conformidad con diversos elementos. Además, esos métodos pueden obviar la exigencia del Acuerdo. Por otra parte, los precios de exportación varían considerablemente según cada situación en particular. No resultaría fácil desde el punto de vista técnico identificar un precio de exportación adecuado para su notificación. Asimismo, en la mayoría de los casos la legislación del país exportador no permite facilitar información sobre las variables de exportación a las administraciones de aduanas de los países importadores cuando se considera que es de carácter confidencial. La declaración de los valores de exportación a las aduanas de los países exportadores tiene una finalidad básicamente estadística. En consecuencia, en muchos casos no es razonable utilizar las variables de exportación para determinar el valor de aduana de las mercancías importadas. Por último, según la propuesta de la India, en el caso de que la

administración de aduanas del país importador considerase que el precio declarado es fraudulento, la administración solicitaría al país exportador información sobre los valores de exportación y utilizaría esa información como base fundamental para establecer el valor en aduana. Ello afectaría al Acuerdo, según el cual la administración de aduanas debe utilizar el valor de transacción como base fundamental para determinar el valor en aduana.

2.22 El representante del Brasil considera meritorios los objetivos básicos de la propuesta que apuntan a combatir el fraude. Su delegación no tiene una posición definitiva dado que su Gobierno no ha terminado de examinar el asunto. Cabe destacar el importante elemento de la confidencialidad. Las autoridades brasileñas están examinando las consecuencias legales que podría tener el hecho de suministrar la información propuesta. Por otra parte, si se conviene en que es necesaria una solución multilateral, habrá que trabajar mucho sobre los aspectos de procedimiento a fin de garantizar que se utilicen de un modo justo.

2.23 La representante de Suiza comparte la opinión expresada por Singapur de que la cuestión del fraude no es un problema de valoración. El fraude debe encararse a nivel nacional en cada país y no en el marco del Acuerdo. La OMC no es el lugar adecuado para discutir ese problema. Empero, su delegación reconoce que algunos países tienen dificultades relacionadas con el fraude en el ámbito de la valoración en aduana. Ahora bien, al igual que otras delegaciones, la suya estima que toda propuesta sugerida para resolver los problemas considerados debe respetar la legislación nacional de cada Miembro y tomar en cuenta sus limitaciones. A fin de ayudar a comprender mejor esos problemas, pregunta si la India podría dar más detalles sobre el carácter de sus dificultades concretas y sobre la forma en que ha tratado de resolverlas hasta ahora. Sobre dicha base y aludiendo a lo que dijo Singapur, la representante pregunta a la India cuál es, a su juicio, el origen o causa de los problemas que la afectan. En otros términos, ¿qué induce a los comerciantes a falsificar las declaraciones de aduana? Asimismo, pide datos precisos sobre el alcance y los efectos económicos del problema. Por otra parte, su delegación tiene interés en saber qué medidas se han adoptado hasta ahora para combatir el fraude y cuál es el motivo de que no hayan resultado eficaces, así como por qué no se está utilizando la inspección previa a la expedición con ese fin. Por último, pregunta por qué la India tiene dificultades para obtener información de sus importadores como se prevé en el párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo.

2.24 El representante de Hong Kong, China señala que su delegación apoya la idea de que las administraciones de aduanas cooperen para lograr la aplicación efectiva del Acuerdo. No obstante, comparte muchas de las preguntas planteadas inicialmente por Tailandia y completadas por otras delegaciones. Sin entrar en detalles, afirma que hace suya la pregunta de los Estados Unidos en la que se inquiere de qué modo un acuerdo internacional contribuiría a resolver problemas como los identificados en el ejemplo de las partes de cámaras. El representante no ve la relación, habida cuenta en particular de la cuestión de la confidencialidad.

2.25 El representante del Japón indica que la mayoría de las preguntas de su delegación ya han sido formuladas por los oradores anteriores. No obstante, pregunta cuál es la magnitud del problema que afecta a la India, aspecto que debe ser el punto de partida de cualquier análisis técnico. Asimismo, desea saber qué tipo de información podría facilitar el país importador cuando se solicite asistencia, por ejemplo, la fecha del envío, el puerto de exportación, etc. Su delegación necesita saber qué tipo de información facilitarían los países importadores para ayudar a los países exportadores a brindar información. Además, querría saber cuál es el significado de las expresiones "plazo determinado" y "casos dudosos". Habrá que analizar los efectos de la propuesta en los recursos. El Gobierno del Japón podría verse obligado a modificar su sistema de despacho de las exportaciones para adaptarlo a la propuesta. Su delegación pregunta si está prevista alguna compensación en el caso de que se vean afectados o lesionados los intereses comerciales de los exportadores. Por último, pregunta si el país importador detendrá el proceso de despacho de las importaciones mientras solicita asistencia.

2.26 El representante de Chile afirma que el problema de la subvaloración afecta a muchos países. Dado que su Gobierno todavía no ha terminado de examinar el problema y la propuesta, no puede presentar una posición acabada sobre la cuestión. Todas las preguntas formuladas, que son similares a las de su delegación, resultan valiosas. Convendría hacer preparar un estudio sobre lo que se ha llevado a cabo en el plano bilateral, multilateral y plurilateral en otros foros para encarar los problemas mencionados.

2.27 El representante de la India se apresta a responder las preguntas formuladas. En primer lugar, explica que la expresión "plazo determinado" significa responder con rapidez y sin demoras excesivas cuando se solicita un valor de exportación. Su delegación no ha especificado un plazo preciso. En segundo lugar, está tratando de encontrar una solución formal. Si bien se ha mencionado que existen algunas leyes nacionales que no permiten el intercambio de ese tipo de información, su delegación estima que si existiese una disciplina oficial de la OMC, los países exportadores podrían facilitar la información solicitada por los países importadores. En tercer lugar, la propuesta de su delegación se ajusta al significado de "casos dudosos" presente en la Decisión Ministerial. Podría existir cierta diferencia entre el significado al que alude el texto de la Decisión y el aludido en el Convenio de Nairobi. En cuarto lugar, afirma que su delegación propone una solución multilateral que requiere que todos los países faciliten información, tanto los desarrollados como los países en desarrollo, y su país está dispuesto a compartir la información cuando se lo solicite. En quinto lugar, según su experiencia, las soluciones bilaterales no sirven. Si bien la India tiene algunos acuerdos bilaterales, le resulta muy difícil concertar ese tipo de acuerdos con todos sus interlocutores comerciales. Es preferible una solución multilateral a varias soluciones bilaterales diferentes.

2.28 En sexto lugar, con respecto a las preguntas que se refieren a la forma en que la aduana de la India detecta los casos dudosos, considera que se trata de un secreto de la aduana. Todas las administraciones de aduanas tienen técnicas similares para identificar los casos dudosos. No es necesario justificar cómo se han seleccionado los casos mencionados en los ejemplos presentados. En uno de ellos se probó que el valor de exportación y el de importación eran significativamente diferentes. Cualquiera que haya sido el método utilizado por la aduana es válido porque lo justifica el hecho de que el valor declarado era fraudulento. Los métodos aplicados son válidos porque apuntan a los casos que corresponde. En séptimo lugar, su delegación entiende que la mayoría de los países tienen valores de exportación, ya sea en las declaraciones de exportación, las facturas o las bases de datos. Existe un código de seis dígitos para el Sistema Armonizado de clasificación, pero muchos países cuentan con subdivisiones más detalladas dentro de ese Sistema y recopilan estadísticas comerciales para cada una de las subdivisiones estadísticas y por países para determinar qué país está exportando e importando. La mayoría de los países cuentan con esa información y no es difícil facilitarla. Aclara que no se solicitará información sobre, por ejemplo, un millón de mercancías importadas, sino solamente sobre algunas de ellas respecto de las cuales la aduana abrigue dudas. Además, el despacho de aduanas continúa aun cuando haya una investigación en curso, como se prescribe en el Acuerdo.

2.29 Con respecto a lo señalado por Australia de que la propuesta generaría una carga injustificada para las administraciones de aduanas, su delegación no está de acuerdo. Además, si bien la India no tiene un acuerdo bilateral con Australia, la cooperación entre ambos países es muy buena y se han detectado numerosas subfacturaciones gracias a la ayuda de la aduana australiana. Por ejemplo, cabe citar el caso de las manzanas importadas de Australia a 15 dólares australianos el contenedor de 20 cajones. La aduana de la India adoptó la posición del comprador y solicitó una venta al proveedor, que admitió que el precio era realmente de 28 dólares australianos, pero pudo establecerse una relación según la cual la diferencia entre 28 y 15 dólares australianos se cancelaría en una fecha posterior.

2.30 En lo atinente al punto planteado por el Canadá de que la propuesta no constituye una solución, es de señalar que la experiencia de la aduana de la India es diferente de la de los países

desarrollados. Los países en los que se aplican derechos del 2 por ciento o menos tienen un tipo de problema diferente para combatir los casos de fraude que los países como la India, que dependen más de los ingresos aduaneros. Si bien se han tratado de reducir los derechos considerablemente en los últimos años, aún persiste la subvaloración. El orador solicita a los países desarrollados que examinen los problemas de su país y de muchos otros países en desarrollo, tales como el de la reducción del déficit fiscal sin la cual no es posible profundizar la liberalización. Además, es necesario apoyar el comercio honesto y frenar las actividades ilícitas. Cabe agregar que el argumento del Canadá referido a que se traslada la carga de la administración del país importador a la del país exportador no es correcto. Lo que se busca es conseguir datos adicionales para ayudar a la aduana a determinar el valor en aduana exacto. La administración de la India es absolutamente competente y tiene un programa con *Revenue Canada* de asistencia. Los canadienses, tras haber visitado la aduana de la India, han manifestado satisfacción con su labor. En efecto, no se trata de que la India no esté haciendo lo suficiente para reformar su aduana ni que se desentienda de su propia investigación, pero la aduana considera que hay determinados datos que no se encuentran en el país y que constituyen un eslabón importante en el proceso de establecer los valores correctos en el marco del Acuerdo.

2.31 Algunas de las preguntas de Singapur han sido también planteadas por otras delegaciones. Ahora bien, la India tiene un problema especial con la facturación de los terceros países. Cabe citar un caso de partes de vehículos automóviles originarias de Europa que se enviaron a un tercer país y que se facturaron en la India muy por debajo del precio del tercer país. La India se dirigió al proveedor del tercer país quien confirmó que esas mercancías se vendían a un precio muy superior. En los casos en que interviene la facturación de un tercer país y cuando las mercancías no son objeto de una transformación ulterior, la India tropieza con problemas difíciles. En esos casos no sirven las soluciones bilaterales, lo que hace falta es una solución multilateral porque es necesario conocer los valores del país de origen. Con respecto a la pregunta relativa a la magnitud de la connivencia, afortunadamente se trata de un problema limitado. No obstante, dadas las dimensiones de la India y la cuantía de las importaciones de su enorme mercado, es considerable y debe abordarse no sólo a efectos de los ingresos sino también para frenar las distorsiones que provocan en el comercio la sobrefacturación y la subfacturación. Con respecto a la recopilación de los datos y al nivel necesario de esos datos según los requisitos de la propuesta, las autoridades de la India estarán satisfechas, en el marco de la propuesta, con cualquier tipo de dato estadístico que se recopile.

2.32 En cuanto a la confidencialidad, cabe señalar a la atención del Comité el artículo 10 del Acuerdo según el cual toda información obtenida será considerada confidencial, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial. En efecto, cuando se obtenga información de conformidad con la propuesta y se determine que equivale al valor declarado, se considerará confidencial dado que no hay motivo para revelarla. Se revelará tan sólo cuando exista una amplia variación en los precios y resulte necesario iniciar un procedimiento judicial. De todos modos, esto está previsto en el artículo 10 del Acuerdo. Cabe agregar que la aduana de la India también está obligada por la legislación nacional a no revelar esa información, al igual que por el texto específico del artículo 10. El orador pregunta por qué los países exportadores tendrían interés en proteger la información en caso de fraude. ¿Apoyarían las transacciones fraudulentas? El artículo 10 no favorece la protección de los casos fraudulentos al afirmar que la información podrá ser revelada en el contexto de un procedimiento judicial, que podrá ser iniciado únicamente en el caso de una transacción fraudulenta. Cuando algunos exportadores de un país realizan transacciones fraudulentas, lesionan los intereses de los demás exportadores del país de origen del producto que están pagando el porcentaje correcto del derecho sobre el valor declarado. En consecuencia, conviene también a los intereses de los países exportadores colaborar con las administraciones de los países importadores para erradicar los casos fraudulentos.

2.33 En respuesta a la pregunta de si los países en desarrollo podrán asumir las obligaciones enunciadas en la propuesta, la India se compromete a ayudar a los demás países agilizando el intercambio de información entre las aduanas. Asimismo, está dispuesta a facilitar detalles

específicos de todas las consignaciones: el número de conocimiento de embarque, el número de factura, los detalles de los contenedores, el buque en el cual se transportan las mercancías, etc. En algunos casos, la subvaloración está ligada al lavado de dinero y a infracciones relacionadas con la droga. El orador coincide con la observación efectuada por las CE de que todas las facultades previstas en el Acuerdo las tiene el país importador pero éste, lamentablemente, no cuenta con toda la información que necesita. Se opera en el ámbito del país importador y alguna información tiene que proceder del exportador. Por otra parte, observa que los miembros de la OCDE actualmente están tratando de lograr la plena cooperación de los países en la administración de los impuestos internos. En una situación como ésta, en que las mercancías se envían de un país a otro directamente o a través de varios países, es muy necesaria la cooperación mutua y el intercambio de información. Dos razones fundamentales por las cuales se estableció la OMA fueron la de armonizar los procedimientos aduaneros y la de lograr el intercambio de información y la cooperación mutua entre las administraciones de aduanas. Aunque el país importador tenga toda la autoridad, sin la información solicitada la tarea resulta difícil, como parece indicar la experiencia de la India.

2.34 El orador admite sin ambages el punto planteado por Corea de que los precios de exportación varían considerablemente. Su país solicita únicamente el precio declarado en el país exportador. Con ello la aduana no está dirigiendo su atención a otra consignación que podría haber sido diferente. La propuesta no tiene por objeto alterar ese hecho sino, simplemente, verificar el precio en el otro extremo de la transacción. Cabe reconocer que una situación en la cual haya connivencia entre el importador y el exportador no se resolverá con la propuesta y la India lo sabe. Empero, si se estableciera una solución multilateral, en realidad las aduanas tendrían menos necesidad de pedir los valores una vez que los exportadores y los importadores conociesen la existencia del acuerdo. Con respecto a lo señalado por Suiza de que la OMC no es el foro adecuado para discutir las cuestiones relativas al fraude, la India considera que sí lo es dado que se hace referencia al Acuerdo de la OMC y que esas cuestiones se suscitan a raíz de la aplicación de dicho Acuerdo. Según su experiencia, es preciso encarar esas cuestiones. Aunque el Acuerdo rige desde hace 21 años muchos países no pueden aplicarlo totalmente, lo cual resulta muy elocuente y pone de relieve que hay cuestiones que deben abordarse. Si bien lo ideal sería eliminar los derechos de aduana, hasta que llegue ese momento los problemas persistirán y es preciso encontrarles una solución. En cuanto a la pregunta del Japón sobre la magnitud del problema, cabe señalar que depende de la mercancía. No sucede con todas sino tan sólo con algunas, en particular, las de segunda mano que importan los países en desarrollo y la chatarra, además de los casos de facturación de terceros países. Cuando las mercancías se adquieren directamente a los fabricantes y no a los exportadores, el problema es mucho menor. Causa perplejidad el asunto planteado por el Japón relativo al perjuicio de los exportadores. Conviene reiterar que cuando la información demuestra que la transacción es genuina no hace falta revelar su contenido y la investigación concluye antes. Cuando se trata de un caso de fraude y, en consecuencia, se utiliza la información, no se entiende por qué debería pagarse una compensación por daños a los exportadores. Ese asunto tiene que abordarse en el marco de la ley pertinente la cual, según cree el representante de la India, no contiene disposiciones sobre daños. La pregunta final del Japón sobre la demora del procedimiento de despacho de las importaciones constituye una cuestión aparte. La idea de solicitar información se basa en la necesidad de realizar un control cruzado, y en los casos en los cuales el valor declarado es el correcto, en realidad, agiliza el despacho. De todos modos, la información solicitada demora en llegar y la aduana de la India despacha las mercancías de conformidad con el Acuerdo.

2.35 El representante de los Estados Unidos señala que la administración de aduanas estadounidense recientemente manifestó satisfacción cuando recibió un nuevo proyecto elaborado por la India de un acuerdo de cooperación aduanera y en la actualidad lo está examinando. En aras de una mayor precisión, pregunta si la "duda" se equipara al "fraude" o a la definición que figura en el Convenio de Nairobi que tiene una norma específica, porque sabe que en algunas administraciones se ponen en duda casi todas las transacciones. Con respecto al caso de las importaciones de manzanas australianas, pregunta si la India actuó de conformidad con la información que obtuvo y, en ese caso,

de qué modo la propuesta habría modificado los procedimientos en el citado ejemplo. Para su delegación no hay un vínculo entre la propuesta y el caso mencionado. Una tercera pregunta se refiere a los recursos y a si la India ha examinado cuántos pedidos supone que haría en un año, ya sea en términos de cantidad o de porcentaje de las importaciones. Las importaciones de los Estados Unidos ascienden a alrededor de 1 billón de dólares EE.UU. anuales. A fin de trasladar la experiencia de la India a los Estados Unidos, agradecería que se facilitase una estimación respecto de cuántos pedidos se prevén como porcentaje de sus importaciones. Por otra parte, pregunta qué se entiende por la palabra "información". No resulta claro qué tipo de información se solicita, ¿se trata del valor declarado? Muchos países no incluyen en el valor declarado algunos elementos que figuran en el Acuerdo. ¿Cómo se prevé en la propuesta que se abordarán los valores agregados que muchos países recopilan respecto de sus exportaciones? ¿Se contempla en la propuesta que los países modifiquen los métodos que emplean para calcular el valor declarado? En caso contrario, ¿para qué serviría examinar un valor que no se hubiese establecido de conformidad con la jerarquía del Acuerdo? Por último, ¿qué información concreta estaría la India dispuesta a compartir en el marco de la propuesta en calidad de exportador y qué elementos se toman en cuenta en su valor declarado? ¿Hay otros tipos de datos relativos a la valoración que la India estaría dispuesta a compartir en el marco de la propuesta? ¿Cabría esperar que las administraciones de aduanas de los países exportadores visiten las oficinas de las empresas exportadoras y estaría la India dispuesta a controlar a sus importadores y exportadores con respecto a la mencionada información?

2.36 El representante del Canadá solicita más aclaraciones sobre el tipo de información deseada por la India. Puesto que no se sabe en qué casos se podría solicitar información, habría que reunir datos para todas las importaciones, lo cual plantea un problema considerable en materia de recursos. Posteriormente habría que modificar las leyes a fin de reunir la información correcta solicitada. Esto se relaciona con la pregunta de si la India verifica los datos que recibe, ¿envía auditores para asegurarse de que los datos declarados por sus exportadores son exactos? Casi todos los datos de exportación se facilitan a efectos estadísticos en diversos niveles de agregación y notificación con fines de cumplimiento, en consecuencia, no se verifica su exactitud. Aun cuando los pedidos de información podrían efectuarse sólo una o dos veces al año, los datos deberán recopilarse todos los días. Además, cabe preguntar qué desea hacer la India con los datos que obtenga sobre los precios. El Canadá tiene interés en saber por qué necesitan esa información, habida cuenta en particular de la declaración de la República Dominicana referida al artículo 7 y de la propuesta que figura en el apartado 3 que también se refiere al artículo 7. En cuanto al significado de "dudoso", el orador coincide en que, con respecto a la Decisión Ministerial, la India tiene razón al manifestar que corresponde a la aduana determinarlo porque en este caso el único investigado sería un importador de la India. Empero, si un país hubiese de facilitar información comercial confidencial al servicio de aduanas de otro país, sería necesaria una mayor precisión que la del término "dudoso". Además, el representante solicita más detalles sobre el comentario efectuado por la India de que se requiere una solución multilateral para conocer los valores declarados en el país de origen. Esto complica la cuestión ya que significa que deben rastrearse las transacciones y el valor en el lugar de producción porque el valor final de venta de la mercancía podría ser muy diferente.

2.37 Por último, afirma que la aduana de la India está siguiendo el camino correcto en lo que hace a la aplicación del Acuerdo y precisamente por ello el Canadá no logra entender por qué ha presentado la propuesta examinada. La India ha admitido que su propuesta no corregirá la situación de connivencia entre importadores y exportadores. Además, la subvaloración por lo general significa que no se han agregado los ajustes dispuestos en el artículo 8 y el país exportador no tiene ninguna información sobre esos elementos. Por ende, la propuesta sólo serviría para combatir el fraude cometido por el importador. De ser así, la mejor fuente de información será el país importador. La OMA sugiere formas posibles de encarar el fraude tales como la elaboración de registros, actividades de investigación y análisis, evaluación de los riesgos, zonas de ejecución de alto riesgo y de bajo riesgo, etc. El Canadá todavía no entiende por qué el fraude cometido por el importador no puede detectarse mediante las investigaciones normales de fraude. La delegación canadiense teme que la

propuesta resulte un sustituto de las metodologías adecuadas para combatir el fraude y las técnicas de aduana modernas que, a su juicio, son importantes para aplicar el Acuerdo.

2.38 El representante de Australia reitera que su país apoya la plena cooperación en el ámbito considerado. No obstante, el caso de las manzanas australianas demuestra que ya existe cooperación y que la India pudo obtener la información que había solicitado. Al parecer, ello contradice la anterior afirmación de la India en el sentido de que actualmente no hay forma de obtener el tipo de información solicitada de conformidad con la propuesta. Habida cuenta de ello, la delegación australiana todavía no comprende por qué es necesario una solución multilateral de carácter oficial u obligatorio.

2.39 La representante de Singapur reconoce que todas las delegaciones se preocupan por los casos de fraude genuinos y que cada país trata de combatirlos. Solicita también que se den respuestas concretas y claras con respecto al significado de la expresión "casos dudosos". Al parecer, en la práctica significa que cada vez que la aduana de la India tenga dudas o simplemente preguntas sobre un valor declarado, solicitará a la administración de aduanas del país exportador que investigue a sus exportadores a fin de obtener los datos y los valores necesarios para sustentar su investigación. No se trata siquiera de un requisito legal sino tan sólo de un procedimiento en caso de duda. Esto implica varias dificultades tanto prácticas como legales. Los exportadores de Singapur facilitan información comercial y de exportación a la administración de aduanas del país con carácter confidencial y la administración no puede revelar esa información libremente. Si existiese una investigación legal planteada en un procedimiento judicial, la situación sería diferente. Empero, Singapur no puede aceptar tener que investigar a sus exportadores cuando no son objeto de una investigación por caso de fraude. En consecuencia, la solución tendrá que partir del país importador donde habrá que agotar la investigación de los importadores, incluido el uso del valor reconstruido. Una vez que se hayan agotado esos recursos, podrá hablarse de cooperación, lo cual lleva a la cuestión de determinar cuál sería el nivel necesario de información. Causa perplejidad la afirmación de la India de que se dará por satisfecha con cualquier estadística disponible. La delegación de Singapur cree que no resultaría útil el empleo de datos generales. Aun en el caso de que se contase con esa información y que pudiese facilitarse, no le serviría a la aduana de la India para resolver un caso de fraude. Por último, cabe subrayar que el lavado de dinero y las drogas no tienen nada que ver con el Acuerdo.

2.40 El representante de las Comunidades Europeas señala, con respecto al término "duda", que hay dos conceptos diferentes en la Decisión Ministerial y en el Convenio de Nairobi. Ninguno de ellos podría servir de base para un acuerdo multilateral porque las administraciones de aduanas dudan siempre y solicitan información a todo el mundo continuamente. Esa es la realidad que recoge la experiencia. El simple hecho de dudar no basta para crear un instrumento como el analizado. El concepto que figura en el Convenio de Nairobi no justifica el suministro de información adicional por el hecho de que exista ya un caso firme, y las disposiciones de la Decisión Ministerial ya habrían sido aplicadas. Además, pregunta si la propuesta podría llegar a ser operativa debido a la cuantía de los recursos necesarios y a las cuestiones relativas a la confidencialidad. Existen mecanismos de cooperación en el marco de la OMA y los tipos de productos mencionados por la India podrían ser abordados por su aduana.

2.41 El representante de la República Dominicana aclara que cuando se refirió al artículo 7 en el contexto del debate en curso, se estaba refiriendo al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994. Asimismo, hace hincapié en que uno de los obstáculos con que tropiezan los países en desarrollo cuando tienen que aplicar dicho Acuerdo es que resulta imposible llegar a la transacción original. Los países en desarrollo podrían confiar más en las facturas presentadas por el importador si contasen con mayor información. El apoyo de su delegación a la propuesta de la India se refiere a su esencia, que apunta a fortalecer los esfuerzos de los países que, como la República Dominicana, están tratando de aplicar el Acuerdo. Señala, además, que muchas de las preguntas formuladas son razonables y deben ser tomadas en consideración. Sin embargo, estima que las

transacciones comerciales internacionales tienen que ser más transparentes, objetivo por el que cual se está trabajando en la OMC. Ahora bien, la transparencia se opone a la confidencialidad. El párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo dispone que se puede recurrir a las autoridades de otros países para obtener información sobre el valor reconstruido. Esto se asemeja al objetivo de la propuesta de la India y sienta un precedente para que terceros países ayuden a verificar el valor en aduana. Desde luego, la propuesta implica modificar el Acuerdo, lo cual tendrá consecuencias. Si bien es necesario proseguir el análisis, la República Dominicana cree que la propuesta no debe rechazarse.

2.42 El representante de la India agradece a la delegación estadounidense por mencionar el proyecto de acuerdo bilateral que se encuentra en estudio y espera que sirva para resolver los asuntos pendientes. Asimismo, señala que en un estudio finalizado recientemente se demuestra que existen pocos casos de subfacturación en importaciones procedentes de los Estados Unidos. No obstante, hay casos de sobrefacturación de mercancías que exporta la India a ese país. De ser así, la aduana de la India tal vez no necesite pedir dato alguno a los Estados Unidos en el marco de la propuesta. Por otra parte, cabe agregar que el Convenio de Nairobi se ocupa de los casos de fraude, en particular aquellos en los que existen fundamentos razonables para sospechar su existencia. Empero, como quedó dicho, la mayoría de los países, incluidos los más desarrollados, no han aceptado el Convenio y es allí donde reside el problema. De los pocos países que se han adherido, tan sólo 23 han aceptado el Anexo II del Acuerdo que se refiere a la valoración y la evaluación de los casos. La Decisión Ministerial se refiere a "casos dudosos" y el orador considera que, cuando existen dudas, es razonable dar por supuesta la existencia de fraude y, por ende, es necesaria la prueba. Cuando la aduana de la India pueda establecer que existe fraude en un "caso dudoso", no solicitará información al país exportador si no es necesaria la documentación. En cuanto a la inquietud manifestada porque la aduana de la India es la que decide si un caso es "dudoso", no cabe otra opción, pero el Comité puede tener la seguridad de que la aduana trabaja muy bien en la selección de los casos. La información será solicitada sólo cuando resulte absolutamente necesaria y será examinada al más alto nivel, por el Director General del Centro de Inteligencia relativo a los Ingresos. Por consiguiente, no se impondrá una carga injustificada a los demás países.

2.43 En los tres casos mencionados por el representante de la India si bien se estableció la existencia de fraude, no se resolvió el problema porque se necesitaba información de otro país. En el caso de las manzanas australianas la información del proveedor se halló a través de Internet porque la aduana de la India no tiene un acuerdo con la de Australia. Si bien dicha información señalaba claramente un caso de subvaloración, no pudo utilizarse. Por ende, no hay contradicción en lo que se está proponiendo, ya que si hubiese existido una solución multilateral la información se podría haber obtenido fácilmente de las autoridades australianas. La India desearía tener más información de otras administraciones sobre ese tipo de casos, que son aquellos en los que sería necesaria una solución formal y obligatoria. Análogamente, en el caso de las partes de cámaras se obtuvo información de un tercer país pero no pudo utilizarse porque se facilitaba con carácter confidencial. Si hubiese existido la solución multilateral propuesta, la información podría haberse solicitado y utilizado. En el tercer caso, la verificación del proveedor fue realizada por la aduana de la India y también de un modo que la información no pudo aprovecharse en un procedimiento judicial. Ahora bien, si la información la hubiese facilitado la administración del otro país, podría haber constituido un elemento válido de prueba.

2.44 En cuanto a la pregunta referida a qué tipo de información se solicita exactamente, cabe aclarar que se trata simplemente del valor declarado en el país exportador. La India está dispuesta a compartir el mismo tipo de información con los demás países. Si bien con ese único dato no se resolverían sus problemas, contribuiría en gran medida a ayudar a la aduana a valorar las mercancías y a combatir el problema del fraude. En respuesta a la pregunta del Canadá acerca de si la India verifica los datos, el orador explica que se lleva a cabo cierta verificación pero no tan detallada como en el caso de las importaciones, situación que al parecer es igual a la de la mayoría de los países. Cabe suponer que los datos facilitados en el país exportador, donde el exportador no está sujeto a ningún

derecho o control, son exactos y que algunos problemas podrían resolverse sencillamente cotejándolos. La propuesta sería más útil en el caso de los países con los cuales la India no tiene acuerdos bilaterales y en los que le resulta difícil obtener información. En el caso del Canadá no se solicitará información en gran medida. Por otra parte, la India sabe que para llegar al valor de transacción tienen que efectuarse los ajustes previstos en el artículo 8, pero ése es otro asunto, y la aduana de la India puede ocuparse de los casos en los cuales no se han realizado o agregado dichos ajustes. El problema se produce cuando el valor declarado, en primera instancia, es fraudulento. La propuesta no apunta a reemplazar la lucha contra el fraude ni a crear un mecanismo de investigación de los casos de fraude.

2.45 La información que el exportador suministra a la administración de aduanas del país exportador es sin duda confidencial. Si se facilitase a la aduana de la India en los pocos casos en que se solicitaría, dicha información se trataría de la misma forma de conformidad con la legislación nacional. Según la propuesta, no se trata de pedir que las administraciones de aduanas de los países exportadores investiguen a las empresas. En el marco del Convenio de Nairobi puede solicitarse ese tipo de investigación cuando se establece con fundamentos razonables la existencia de fraude, pero esto no forma parte de la propuesta. Por último, la India no cree que las Comunidades Europeas, que constituyen una agrupación de países ricos, puedan preocuparse por problema alguno en materia de recursos relacionado con la propuesta. Las mercancías europeas que se envían a través de terceros países son las que están planteando problemas, lo cual está reduciendo los suministros de las CE. En consecuencia, éstas deberían tener más interés en facilitar a la India los valores solicitados porque los productos que se importan directamente de las CE no están subvaluados y se está pagando sobre ellos la cuantía correcta en materia de derechos. La solución también ayudaría a que los proveedores de las CE resolvieran el problema mencionado. La India está haciendo todo lo posible para investigar y combatir el fraude, pero necesita tan sólo un dato adicional que la ayudaría a realizar esa labor.

Apartado 2: Se incluirá en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 el costo de servicios tales como los de ingeniería, creación y perfeccionamiento y diseño, que el comprador, de manera directa o indirecta, haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción de las mercancías importadas.

2.46 El representante de la India explica a los Miembros que esta propuesta se refiere al apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo. El artículo 8 del Acuerdo se refiere a los ajustes que deben efectuarse para determinar el valor de transacción; en el apartado b) se enumeran los bienes y servicios suministrados gratuitamente o a precios reducidos por el comprador para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, que deben estar incluidos en el valor de transacción en la medida en que dicho valor no se hubiese incluido en el precio realmente pagado o por pagar. La lógica es que esos bienes y servicios formen parte del valor de las mercancías importadas, aun cuando hubiesen sido suministrados por el comprador. Los elementos enumerados en los incisos i) a iii) se incluirán en el valor en aduana si son suministrados por el comprador aun cuando puedan ser suministrados por el país importador. Sin embargo, en el caso del inciso iv), se introduce una distinción y el valor se incluye sólo si el servicio no procede del país importador. En consecuencia, hay una diferencia entre las mercancías enumeradas en los incisos i) a iii) y los servicios enumerados en el inciso iv) que, a juicio de la India, da lugar a una bifurcación artificial de los valores. Muchas veces parte del valor de los servicios enumerados en el inciso iv) figura como si esos servicios procediesen del país importador, en cuyo caso no se incluirán en el valor en aduana cuando, en realidad, pueden haberse llevado a cabo en cualquier otro lugar y deberían incluirse en el valor. La situación expuesta alienta a los importadores inescrupulosos a dividir el valor. Por lo tanto, la delegación de la India propone que esos servicios, aun cuando procedan del país importador, formen parte del valor y que se incluyan en éste todos los elementos previstos en el párrafo 1 b) del artículo 8.

2.47 El representante de las Comunidades Europeas considera que la propuesta requiere que se modifique algo que ha formado parte del Acuerdo desde su entrada en vigor. Dicha modificación tendrá fuertes efectos económicos porque el comercio y la industria han asumido derechos específicos y han construido su accionar en torno del método de valoración que figura en el Acuerdo. Al referirse a la forma de abordar el problema, la India mencionó la división del valor en los elementos de costo atribuidos a las mercancías importadas y aquellos originados en el país; deberían examinarse los instrumentos que se utilizan para identificar los servicios efectivamente suministrados y su costo y la posibilidad de crear otros. Sería prematuro afirmar que existe un problema al respecto cuya solución exigiría la modificación de las normas. Si existiese ese problema y se refiriese a la forma en que los importadores estructuran los costos y los presentan a la aduana, podría haber un problema de comunicación o de recopilación de información y habría que realizar un análisis técnico en lugar de modificar la base jurídica del Acuerdo.

2.48 El representante del Canadá hace suya la declaración de las Comunidades Europeas. La administración de aduanas de su país tiene preguntas similares sobre los aspectos concretos del problema, la forma en que se manifiesta y los motivos por los cuales no puede encararse recurriendo a otras técnicas aduaneras, en particular dado que el comprador suministra los servicios mencionados en el párrafo 1 b) iv) del artículo 8. Siempre es posible entrar en contacto con el comprador y someterlo a una auditoría si hay algún problema. Además, cabe preguntar si el hecho de sumar los costos sería la solución o añadiría otro problema, es decir, el de determinar si se ha sumado la cantidad correcta. El Canadá considera también que existen otras técnicas para resolver la cuestión examinada y que la propuesta no es una solución para el fraude.

2.49 El representante de los Estados Unidos también pregunta cuál es el problema que debe resolverse. El fraude y la bifurcación del valor pueden producirse de otras maneras, de modo que el problema seguirá existiendo. Su delegación pregunta además cuál es el fundamento económico para incluir el costo de los servicios llevados a cabo en el país de importación. Hay un incentivo en el Acuerdo y el orador desea saber cuál es el argumento para afectar a la prestación de dichos servicios en el país de importación. Por último, pregunta por qué se ha presentado la propuesta objeto del debate, en particular dado que la información necesaria para verificar el funcionamiento de la disposición puede obtenerse en el país importador.

2.50 El representante del Japón hace suyas las preguntas y preocupaciones manifestadas por los demás Miembros. Asimismo, su delegación desea saber cuál es el problema real y el fundamento económico de la propuesta. Durante mucho tiempo se han realizado transacciones comerciales siguiendo las disposiciones del Acuerdo y una modificación innecesaria acarrearía una carga injustificada.

2.51 El representante de la India, en respuesta a la pregunta sobre el fundamento económico de la propuesta explica que, de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 8, los elementos mencionados en los tres primeros incisos pueden ser suministrados por el país exportador, el importador o un tercer país. No se ha hecho distinción alguna y los costos de esas mercancías pueden ser incluidos en el valor en aduana. La propuesta de su delegación se refiere al último inciso enumerado en el párrafo 1 b) del artículo 8, relativo a los servicios que también podrían llevarse a cabo en el país exportador, el importador o un tercer país, pero sólo se incluirían en el valor cuando procediesen de un país diferente del país importador. La India considera que los cuatro incisos deberían tratarse de la misma manera al determinar el valor en aduana. Hay una contradicción inherente en esas disposiciones y existe una justificación económica para darles el mismo trato a todas. Si los servicios procediesen de un tercer país, el importador a veces tendría que pagarlos. Por último, cabe señalar que en el caso de algunas importaciones, el diseño básico procede de otro país pero la ingeniería debe llevarse a cabo en el país de importación. Aunque se trate de un pequeño trabajo de ingeniería, los costos se manipularán ampliamente para demostrar que la ingeniería llevada a cabo en el país importador ha sido enorme. El orador da el ejemplo de un producto que se valoró en mil millones de

unidades monetarias que se presentaron divididas en 700 millones de unidades para el valor y 300 millones de unidades para el trabajo de ingeniería realizado en la India. Tras el examen del caso se determinó que no había sido así. En otras oportunidades resulta más difícil comprobarlo, ya que no es fácil rastrear las transferencias monetarias. Por ende, la India cree que podría eliminarse esa distinción en el Acuerdo. En cuanto a la observación de que se trata de una práctica vigente desde hace mucho tiempo, entiende que los países en los que se suministra gran parte de los servicios mencionados deseen seguir excluyendo esos costos. En consecuencia, cabe proponer que esos países prosigan aplicando el trato contemplado en el Acuerdo a título de excepción.

2.52 La representante de Singapur estima que el trato diferente de las mencionadas disposiciones se basa en una razón fundamental. A su modo de ver, el Acuerdo apunta a alentar o facilitar el desarrollo de los servicios incluidos en el inciso iv) en los países importadores al no incorporar esos costos en el precio del importador. Su objeto es ayudar a los países a desarrollar sus industrias de servicios. Si se incluyesen en el valor en aduana, ¿no sería una manera de inflar el precio de importación que, finalmente, es pagado por los consumidores locales?

2.53 El representante de Tailandia, si bien reconoce que la propuesta beneficiaría a la recaudación de ingresos del país importador, señala que podría dar lugar a un problema de doble tributación para los importadores. Además, el consumidor del país importador tendría que soportar la carga de los costos adicionales. El costo del servicio suministrado por el comprador puede haber sido sometido a impuestos internos y posteriormente volvería a ser gravado con un derecho de importación. En efecto, el importador podría llegar a pagar impuestos dos veces sobre el mismo servicio.

2.54 El representante de la India no cree que el objetivo del Acuerdo sea el de alentar a los países importadores a desarrollar sus industrias de servicios. Su principal finalidad es llegar a la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. Si otros elementos incluidos en el mencionado artículo tienen que añadirse al valor, ¿por qué no los servicios incluidos en el inciso iv)? En el caso de que algún país deseara exceptuar los cargos aplicables a esos servicios, siempre puede recurrir a la política fiscal o exceptuarlos del derecho de aduana. La India considera que se trata de costos legítimos que constituyen el valor de la mercancía importada.

2.55 El representante de los Estados Unidos recuerda que el motivo de las excepciones previstas en el párrafo 1 b) iv) del artículo 8 obedece a que corresponden a servicios llevados a cabo en el país importador. En los Estados Unidos así como en otros países existen excepciones en el caso de aranceles aplicables a mercancías que han sido enviadas al exterior y han vuelto a ingresar en el país. Los incisos i) a iii) contienen excepciones descritas por la legislación arancelaria de los Miembros y se refieren a mercancías. No obstante, con respecto al inciso iv), que se refiere a servicios, es más problemático establecer ese tipo de excepción. Éste es el fundamento de la excepción. Además, está la cuestión secundaria de la doble tributación. El orador pregunta también por qué resulta más difícil comprobar el fraude en esa situación que en otro tipo de actividad del país importador y pide otra explicación a la India con respecto al problema real que ha dado lugar a la propuesta.

2.56 El representante del Canadá todavía no ha entendido por qué la propuesta resolverá el problema identificado por la India, ya que los importadores igual tendrán que ser auditados para determinar si la cuantía es correcta. Cuando se negoció el Acuerdo, se consideró que las disposiciones actualmente vigentes eran convenientes. La modificación propuesta podría tener efectos perturbadores para los acuerdos comerciales y elevar el valor a los fines de los derechos.

2.57 El representante de la India señala que no siempre es posible conocer los detalles de las transacciones fraudulentas a través de las auditorías internas porque las transacciones financieras son muy intrincadas y el pago de los servicios se remonta al proveedor real. Por otra parte, no está de acuerdo con el comentario de los Estados Unidos de que resulta difícil establecer una excepción para esos servicios dado que representan una parte de la mercancía importada que siempre puede ser

exceptuada parcial o totalmente para reflejar esos servicios. Los países que deseen exceptuar esos servicios del valor de transacción pueden tener la opción, pero la India desea que se dé el mismo trato a los incisos i) a iv) del párrafo 1 b) del artículo 8. El problema de la doble tributación mencionado por Tailandia también existe en el caso de las mercancías incluidas en los incisos i) a iii).

2.58 El representante del Canadá reconoce que el problema mencionado por la India es el fraude. No obstante, aun cuando tuviese que añadirse la cuantía al valor, podría suceder que igualmente el importador fraudulento no la agregase y que hiciese caso omiso del requisito. Si la aduana de la India no puede detectar la transacción financiera en primera instancia, ¿por qué podría hacerlo si se adoptase la propuesta? El Canadá no ve de qué modo se puede resolver el problema del fraude con la propuesta presentada. Es incompatible con el libre comercio. Por último, hay otras técnicas en materia de ejecución y para evitar el fraude que sirven para encarar el problema señalado.

2.59 La representante de Nueva Zelandia estima que la propuesta es contraria al fundamento económico de la disposición que apunta a estimular el desarrollo de las industrias de servicios en el país importador. La propuesta se opone al interés de los países en desarrollo y Nueva Zelandia no ve con claridad por qué la India la ha presentado. Además, ¿qué significa el término "comprador" en la propuesta? ¿El comprador es tan sólo la persona que adquiere las mercancías importadas o se refiere también a los servicios prestados por otras empresas distintas del comprador de las mercancías? Esto no se ajustaría al texto del Acuerdo que se refiere a los servicios "realizados fuera del país de importación...". Por último, Nueva Zelandia desea saber de qué modo funcionaría en la práctica cuando esos servicios continuasen después de que la mercancía hubiese ingresado realmente en el país importador, incluido el valor añadido, etc. ¿Durante cuánto tiempo se seguiría valorando el trabajo realizado por el comprador a los efectos de la aduana?

2.60 El representante de la India aclara que la frase utilizada en la propuesta corresponde a la situación en la que los cargos se excluyen del valor en aduana. El párrafo 1 b) del artículo 8 comienza diciendo que "el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos...". En virtud del inciso iv) de ese artículo se exceptúan los servicios mencionados si son realizados en el país de importación. Sin embargo, la cláusula principal es que los bienes y servicios tienen que ser suministrados gratuitamente o a precios reducidos por el comprador. Por consiguiente, es el comprador el que tiene que facilitar los bienes y los servicios. En cuanto a lo señalado por el Canadá en el sentido de qué cambiaría si no existiese la frase "realizados fuera del país de importación", la India estima que habría una gran diferencia. Los importadores, en particular los que cometen fraude, no podrían aprovecharse de la disposición. Debido a que la frase existe, alienta la bifurcación de los valores. Por otra parte, reitera que el Acuerdo no tiene por objetivo fomentar el desarrollo de las industrias de sectores particulares sino determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. La propuesta de la India es que se consideren todos los elementos que conforman ese valor.

Apartado 3: El método residual para determinar el valor en aduana previsto en el artículo 7 incluirá todas las demás eventualidades, a fin de permitir la valoración basada en el precio en el mercado interno o en el precio de exportación en un país tercero con los ajustes que proceda.

2.61 El representante de la India aclara que la propuesta se refiere al precio vigente en el mercado interno del país exportador; no se tiene la intención de incluir el precio de venta vigente en el país de importación. Los dos métodos propuestos corresponden a los apartados c) y e) de la lista de métodos prohibidos según el artículo 7 del Acuerdo. En la actualidad esos precios se utilizan en otros Acuerdos como, por ejemplo, el Acuerdo Antidumping. Cabe aclarar que el artículo 7 y los dos métodos propuestos adicionales se utilizarían únicamente como último recurso cuando los otros métodos no pudiesen ser utilizados. Si se rechaza el empleo de esos dos precios, que son el

equivalente más cercano al valor real, concepto que figura en el artículo VII del GATT de 1994, la administración de aduanas de la India considera que no se puede determinar el valor adecuado a los efectos de la aduana.

2.62 El representante del Canadá considera que debe haber habido buenas razones por las cuales se han prohibido esos dos métodos cuando se negoció el Acuerdo. Por otra parte, desea saber cuál es el significado de la expresión "todas las demás eventualidades". Pregunta también dónde obtendrán las administraciones de aduanas la información necesaria para aplicar los dos métodos propuestos y para efectuar los ajustes pertinentes de los precios.

2.63 La representante de Nueva Zelandia también desea saber qué significa "todas las demás eventualidades". Pregunta además si el concepto de precio en el mercado interno del país exportador es el mismo que el concepto que figura en el Acuerdo Antidumping.

2.64 El representante de la India aclara que la propuesta se refiere a los precios mencionados en el apartado c) y e) del artículo 7 y no a otras "eventualidades". Eso es lo que significa la expresión "las demás eventualidades". Por otra parte, su delegación examinó el Acuerdo Antidumping y vio que esos tipos de precios pueden ser utilizados en ese contexto para comparar valores. ¿Por qué no en el contexto del Acuerdo sobre Valoración en Aduana? La India se ha comprometido a aplicar el primer método que establece el Acuerdo (valor de transacción) y, si no resultase, a aplicar los métodos siguientes previstos en el Acuerdo. Si todos ellos fracasaran y la administración de aduanas llegase al artículo 7, desearía poder utilizar los dos precios propuestos que están prohibidos. No hay ejemplos de la utilización de esos métodos porque en la actualidad no están permitidos.

2.65 La representante de Singapur destaca que los precios mencionados en el Acuerdo Antidumping y los mencionados en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana representan dos conceptos diferentes. En el primer caso, el objetivo es poner de manifiesto la discriminación de los precios de modo que es necesario comparar el precio interno en el país exportador y el precio de exportación para el país importador o un tercer país. Empero, en el contexto del Acuerdo sobre Valoración en Aduana el objetivo es determinar el valor de las mercancías objeto de transacción. Este precio debe basarse en el precio de transacción real acordado entre el exportador y el importador. Es por ello que en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana se enuncia con claridad que los dos precios propuestos no han de utilizarse. La oradora pregunta también cómo se obtendría la información necesaria para los precios propuestos. No reflejarán el valor de transacción real. En el mercado interno del país exportador el precio podría ser muy elevado debido a los gastos generales, los anuncios publicitarios y otros gastos efectuados en el mercado interno. Si se permitiese el uso del precio vigente en el mercado interno del país exportador se llegaría a valores de exportación elevados que resultarían ficticios. En cuanto al valor de exportación correspondiente a un tercer país, la oradora pregunta cuál tercer país se elegiría: ¿sería aquel que tuviese los precios más elevados o los más bajos? ¿Las administraciones de aduanas buscarán el mejor precio de los terceros países y cómo determinarán cuál es el que mejor refleja el valor de transacción?

2.66 El representante de la India recuerda a los Miembros que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana no sólo contiene el método del valor de transacción. Este método debe utilizarse siempre que sea posible y, en ese caso, no harán falta ni serán pertinentes los precios propuestos. Correspondería recurrir al artículo 7 cuando todos los demás métodos hubiesen fracasado. La propuesta de la India sólo requiere que los dos métodos actualmente excluidos según el artículo 7 puedan ser utilizados cuando todo lo demás no sirva. Además, esos dos métodos están permitidos en el marco de otro acuerdo de la OMC, ¿por qué entonces no lo está en el marco del Acuerdo sobre Valoración en Aduana? Dado que ya se ha explicado en los otros Acuerdos cómo determinar los valores, la India no ve ninguna dificultad en utilizar esos métodos en el contexto examinado.

2.67 El representante de los Estados Unidos sigue sin entender la lógica de la propuesta. Pregunta qué significa la expresión "con los ajustes que proceda". ¿Se trata de ajustes al alza o a la baja? Pregunta además qué precios de mercado se utilizarán y cómo se determinarán. ¿Se empleará un catálogo de precios mayoristas o el precio de un centro comercial? ¿Cómo se garantizará que los precios no se determinarán de un modo arbitrario? Por último, pregunta por qué se menciona al Acuerdo Antidumping en el contexto del debate en curso y por qué resulta pertinente, dado que las funciones de las determinaciones del valor efectuadas de conformidad con el mencionado Acuerdo son considerable y explícitamente diferentes de las efectuadas según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

2.68 El representante de la India aclara que, según la propuesta, los precios no podrán utilizarse directamente sino que tendrán que efectuarse ajustes. Cabe citar un ejemplo respecto de los precios FOB o CIF. Si el país exportador tiene una base de valoración diferente, el precio tendrá que ajustarse para tomar en cuenta las cargas adicionales. Además, según los métodos aplicables a las mercancías similares e idénticas, deben hacerse ajustes por la cantidad. La propuesta no apunta a introducir conceptos de otros Acuerdos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Los dos precios propuestos se están utilizando en el marco del Acuerdo Antidumping y deberían poder utilizarse en el del Acuerdo sobre Valoración en Aduana en situaciones extremas.

2.69 El representante del Canadá estima que es necesario, en primer lugar, demostrar por qué se han excluido los dos métodos mencionados respecto de los precios. A su juicio, la utilización de esos métodos no facilitará la aplicación del Acuerdo dado que si, como afirma la India, la información se obtuviese del mismo modo que en el caso del Acuerdo Antidumping, el proceso sería muy complicado. En consecuencia, no está claro por qué se ha presentado la propuesta ni tampoco el modo en que se obtendría la información sobre los precios, los ajustes y sus valores.

2.70 El representante de las Comunidades Europeas sugiere que los dos métodos se excluyeron porque se consideró que no tenía sentido remitir a datos que serían difíciles de obtener y de relacionar pertinentemente con el valor de transacción. Además, considera que no es prudente referirse a otros Acuerdos cuyos conceptos y contextos son absolutamente diferentes. Cabe recordar a las delegaciones la importancia de la nota interpretativa al artículo 7 en la que se hace hincapié en los valores determinados anteriormente y que, según el artículo 7, los métodos previstos en los artículos anteriores deberían aplicarse con una flexibilidad razonable. En el Acuerdo mismo se aclara que dicha flexibilidad puede aplicarse en el marco de las disposiciones del artículo 7 y es innecesario buscar soluciones fuera de ese marco.

2.71 El representante de Tailandia considera que la propuesta, dado que aborda el método del valor residual, podría dar mayor flexibilidad al Acuerdo, en especial en el caso de productos nuevos o innovadores. En el país importador no existen registros anteriores de los precios de esos productos. Por ende, estima que la propuesta facilitaría la labor de las administraciones de aduanas.

2.72 El representante del Japón también desea saber cómo obtendrán las administraciones de aduanas la información necesaria para determinar el precio en el mercado interno en el país exportador y el precio vigente en un tercer país, así como los datos necesarios para determinar los ajustes. Si se quiere lograr un ajuste adecuado, tal vez sea necesario examinar los registros financieros de los exportadores. En el caso de que existiesen gastos importantes de promoción o publicidad tales como anuncios comerciales televisivos, será necesario cuantificarlos para efectuar un ajuste correcto. Ello crearía problemas. Por otra parte, la redacción del Acuerdo apunta a garantizar cierto nivel de previsibilidad a los importadores. Empero, el importador no conoce el precio en el mercado interno en el país de importación ni el precio de exportación en un tercer país. Sólo conoce el valor de transacción. En consecuencia, si se acepta la propuesta se verá afectado el elemento de previsibilidad para los importadores.

2.73 El representante de la India señala que la propuesta no afectará a la previsibilidad inherente al Acuerdo porque el valor de transacción seguirá siendo el método fundamental de valoración. Si se puede aplicar el valor de transacción no hará falta ningún otro método. No obstante, como ha señalado Tailandia, un caso en el que podría resultar necesario aplicar otros métodos es el de las mercancías nuevas o innovadoras a las que no pueda aplicarse el método del valor de transacción y cuando no hubiese otra manera de determinar el precio. Se aplicaría entonces el artículo 7 y los dos precios propuestos aumentarían las opciones de métodos basados en datos que no existen en el país de importación.

2.74 El representante del Canadá reitera sus preguntas sobre el motivo por el cual es necesaria la propuesta y sobre la forma en que se obtendrá la información. Añade que si se recurriese a las fuentes mencionadas por los Estados Unidos para determinar los precios, sin duda servirían sólo como puntos de partida y no como puntos de llegada para dicha determinación. Pregunta además de qué modo podría simplificarse la aplicación del artículo 7 dado que no resulta claro cómo se conseguirá la información. Por otra parte, estima que las observaciones del Japón son pertinentes.

2.75 El Presidente toma nota de las declaraciones efectuadas. Asimismo, señala que varios Miembros no han terminado de examinar las propuestas. Además, manifiesta que en el transcurso del debate se han planteado varias preguntas de carácter técnico y anuncia que se encargará de preparar un informe para el Consejo General sobre el debate y sobre las consultas que ha llevado a cabo. Seguidamente lo distribuirá a efectos de que se realicen aclaraciones técnicas y éste será el aporte de los Miembros en ese momento.

B. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL CONSEJO GENERAL (G/VAL/36)

**INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN
EN ADUANA AL CONSEJO GENERAL**

1. Tras la reunión del Consejo General dentro de la serie de reuniones extraordinarias del 18-19 de octubre, organicé varias rondas de consultas informales entre los Miembros y el 7 de noviembre de 2000, el Comité de Valoración en Aduana celebró una reunión formal, gran parte de la cual estuvo dedicada a la discusión de las propuestas. Creo que esas consultas y la discusión hicieron posible que la consideración de esas propuestas dejara de ser un debate político para convertirse en profundo análisis técnico de las cuestiones. El informe siguiente se basa en mis consultas y en el examen que hizo el Comité de las tres propuestas. Aunque se trata de una sinopsis del análisis, en la que se han resumido necesariamente numerosos detalles técnicos, no deja de ser un informe técnico. Creo que para hacer justicia al debate técnico en su totalidad, los Miembros interesados deberían remitirse al informe de la reunión que el Comité celebró el 7 de noviembre de 2000 (G/VAL/M/17, pendiente de publicación).

Propuesta 1: Se incluirá en el Acuerdo una solución multilateral que permita, en casos dudosos, que las administraciones de aduanas de los países importadores soliciten y obtengan información sobre los valores de exportación en un plazo determinado.

2. El autor explicó mediante ejemplos específicos, que esta propuesta derivaba de la experiencia de su delegación en la aplicación del Acuerdo y de las dificultades que planteaba la lucha contra las transacciones fraudulentas, en particular, la infravaloración del precio declarado por el importador. Aunque su administración de aduanas disponía de mecanismos para investigar las declaraciones fraudulentas de los importadores, era frecuente que la información obtenida que demostraba la existencia de fraude no se pudiera utilizar en actuaciones judiciales porque o bien se había obtenido de fuentes no oficiales o bien era de carácter confidencial. En tales circunstancias, el autor trataba de

encontrar una solución formal, vinculante y multilateral que autorizara el suministro de la información necesaria por parte de las administraciones de aduanas del país exportador. Si la información demostraba la existencia de fraude, sería admisible en las actuaciones judiciales. Además, las transacciones fraudulentas solían adoptar la forma de facturas de terceros países, para las que a menudo era necesario acudir a la fuente original del producto para obtener un precio de exportación. A juicio del autor de la propuesta, una solución multilateral aseguraría que todos los Miembros de la OMC estaban obligados a facilitar la información sobre el precio de exportación que redujera las posibilidades de que esos importadores fraudulentos escaparan a su identificación y en última instancia a su persecución en los tribunales. La propuesta tenía por objeto establecer un mecanismo de esa índole, a través del cual las administraciones de aduanas de los países importadores, al enfrentarse a un caso sobre el que tenían motivos razonables para suponer la existencia de fraude, es decir, a un "caso dudoso", pudieran pedir información sobre el precio de exportación a las administraciones de aduanas de los países exportadores y esperar una rápida respuesta. Esta información se consideraría confidencial hasta que se substanciara el fraude y mientras fuera necesaria como prueba en el contexto de un procedimiento judicial, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El autor reconoció que la propuesta no contemplaba la situación de colusión entre el exportador y el importador.

3. Los Miembros reconocieron que el fraude era un problema del comercio internacional y comprendieron las dificultades del autor. Muchos se habían enfrentado con problemas similares y trabajaban con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y otros suministradores de asistencia técnica para elaborar técnicas aduaneras adecuadas y procedimientos de aplicación. Varios Miembros indicaron que se trataba de un problema que guardaba relación con los países en desarrollo, donde los aranceles elevados, la dependencia de los ingresos aduaneros y la permeabilidad de las fronteras eran otras tantas realidades. Algunos países en desarrollo apoyaron la propuesta, particularmente los que se encontraban en la fase de preaplicación o en las primeras etapas de la transición al sistema de valoración de la OMC.

4. La mayoría de los Miembros consideraron que la propuesta no era la solución idónea para combatir el fraude. Señalaron otros mecanismos adecuados que, según su experiencia, eran eficaces. Algunos mencionaron, a título de ejemplo, los acuerdos bilaterales entre las administraciones aduaneras, el Convenio de Nairobi de la OMA y la Decisión Ministerial de la OMC sobre los casos en que las administraciones de aduanas tienen razones para dudar de la verdad o de la exactitud de los valores declarados. El autor consideró que las soluciones bilaterales no servían, aunque su administración de aduanas era parte en algunos de esos acuerdos, porque resultaba difícil concertarlas con todos los socios comerciales. Ahora bien, una solución multilateral proporcionaría una solución al problema de la facturación en terceros países en los que las mercancías no experimentaban nuevas transformaciones. En este último paso, el autor consideró necesaria una solución multilateral porque se necesitaban los valores del país de origen. Además, a juicio del autor, el Convenio de Nairobi no había sido firmado por la mayoría de las delegaciones y de todas las que lo habían firmado solamente 23 se habían adherido al anexo que trataba del intercambio de información sobre el valor evaluable.

5. Muchos Miembros se preguntaron cuál era la particularidad de los problemas del autor con el fraude que no se pudiera abordar en el país de importación, como se preveía en el Acuerdo. El importador podía combatir el fraude con una diversidad de técnicas tales como el mantenimiento de registros, la investigación y el análisis, la evaluación del riesgo, las zonas de observancia de elevado riesgo y de bajo riesgo, etc. Era dudoso que esta propuesta fuera un sustituto de la utilización de las metodologías adecuadas para combatir el fraude y de las técnicas aduaneras modernas que eran importantes para la aplicación del Acuerdo. El autor explicó que se trataba de un problema limitado y que algunas mercancías estaban más expuestas al fraude que otras. Subrayó que deseaba disponer de esta información adicional de las administraciones de aduanas del país exportador para apoyar sus propias investigaciones. Esto despertó en algunos Miembros la preocupación de que la propuesta, de

ser adoptada, desplazara la carga de la prueba del país importador, que tenía todos los poderes del Acuerdo y disponía de las pruebas necesarias, al país exportador. Si la propuesta significaba que las autoridades del país exportador tendrían que verificar la exactitud de la información que se les presentara, ello supondría desplazar la carga de la investigación a las autoridades del país exportador.

6. Otros problemas y cuestiones técnicas se referían al significado de la expresión "**casos dudosos**" de la propuesta y a la forma en que las autoridades aduaneras determinarían qué casos eran dudosos. Aunque se reconoció que el país importador tenía el derecho de determinar cuál era un caso dudoso para sus propias investigaciones internas, podrían surgir dificultades jurídicas si la determinación impusiera obligaciones a las administraciones de aduanas de los países exportadores.

7. Aun reconociendo la referencia del autor al artículo 10 del Acuerdo, varios Miembros precisaron que según su legislación nacional, la información facilitada por los exportadores a sus administraciones nacionales de aduanas estaba sometida a **requisitos de confidencialidad** que limitaban su difusión a otros órganos. Aun antes de que las autoridades de exportación pudieran facilitar esa información, ciertos procedimientos internos podrían obstaculizar el camino. En apoyo de la propuesta, un Miembro señaló que el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo establecía que se podía formular una petición a las autoridades de ciertos países para obtener información que permita determinar el valor reconstruido. Esta era una posibilidad similar a la que la propuesta trataba de conseguir y constituía un precedente de casos de asistencia de terceros países a la verificación del valor en aduana.

8. Preocupó a algunos Miembros que la propuesta pudiera imponer a las administraciones de aduanas la carga indebida de proporcionar información a los países importadores. Ello representaría una desviación impropia de los recursos de la responsabilidad principal de las administraciones de aduanas. Habría que analizar las **repercusiones de la propuesta en los recursos** y quizás fuera necesario modificar los sistemas de despacho en aduana de las exportaciones para dar cabida a la propuesta. Se preguntó si cabría esperar que las administraciones de aduanas de los países exportadores visitaran las oficinas de las compañías de exportación y si la administración de aduanas del proponente estaría dispuesta a pedir esa información a sus propios importadores y exportadores. Aunque muchos países reunían datos de precios de exportación, muchos Miembros explicaron que ello se hacía principalmente con fines estadísticos y que esos datos no se comprobaban ni se obtenían para cada transacción, lo cual sería necesario para el funcionamiento de la propuesta. Además, tampoco estaba claro si la propuesta exigía que las administraciones de aduanas examinaran los libros de los exportadores para determinar los precios de cada transacción. En caso afirmativo, resultaría problemática. Se señaló también que los precios de exportación variaban considerablemente según las situaciones. Por consiguiente, las variables de exportación no se podían utilizar en el marco del Acuerdo como base razonable para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.

9. Muchos Miembros preguntaron el significado de la expresión "**en un plazo determinado**" y cuáles serían las repercusiones jurídicas si la administración de aduanas de los países exportadores no facilitaba la información solicitada "en un plazo determinado". El autor explicó que la expresión "plazo determinado" significaba rápidamente y sin retrasos indebidos cuando se pedía el valor de exportación. Otro Miembro preguntó lo que significaba "**solicitar y obtener información**" y cómo las autoridades aduaneras de los países importadores harían para solicitar y obtener información. Una última pregunta se refería a si el país importador interrumpiría el **sistema de despacho en aduana de las importaciones durante la investigación** prevista por la propuesta. Se aclaró que la información se solicitaba con la idea de efectuar comprobaciones y que cuando no había problemas en relación con el valor declarado, el despacho en aduana en realidad se aceleraría. En todo caso, las administraciones de aduanas de los países importadores estarían obligadas por el artículo 13 del Acuerdo a liberar las mercancías.

Propuesta 2: Se incluirá en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 la adición del costo de servicios tales como los de ingeniería, creación y diseño, que el comprador, de manera directa o indirecta, haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción de las mercancías importadas.

10. El autor explicó que el objetivo de esta propuesta era permitir la inclusión de los servicios enumerados en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo en el cálculo del valor en aduana, incluso si esos servicios se habían realizado en el país de importación. En la actualidad, sólo se pueden incluir si son suministrados por el comprador pero realizados en cualquier parte que no sea el país de importación. Las mercancías enunciadas en los tres primeros incisos del apartado b) del párrafo 1 del artículo 8 pueden ser facilitadas por el país exportador, el país importador o un tercer país. En ninguno de los tres casos se hacen distinciones y el valor de las mercancías enunciadas se incluye en el valor en aduana. A juicio del proponente, era lógico dispensar el mismo trato a los servicios indicados en el inciso iv) de este artículo. El proponente explicó que dispensar un trato diferente a las mercancías por una parte y a los servicios por otra en el marco de este artículo estaba dando lugar a una bifurcación de valores por parte de los importadores fraudulentos, que con frecuencia trataban de deducir una parte del valor sosteniendo que esos servicios, que comprendían una parte del valor, eran suministrados por el comprador y realizados en el país de importación. Los casos resultaban con frecuencia difíciles de demostrar, ya que era difícil seguir la pista de las transferencias monetarias.

11. Resultaba difícil a muchos Miembros comprender cómo esta propuesta aliviaría el problema citado por el autor de los importadores fraudulentos que dividían los valores en elementos de costo financiados en el interior y en el exterior. Indicaron que los importadores fraudulentos siempre podrían tratar de encontrar otras formas de evadir la declaración del valor de esos servicios o de declarar cantidades menores, incluso en el caso de que se financiaran en el interior y tuvieran que formar parte del valor. Reconociendo que podría ser difícil seguir la pista de las transacciones financieras en el mundo actual de la tecnología de la información, algunos preguntaron cómo se podrían localizar las transacciones mediante esta propuesta. Habría que seguir controlando y sometiendo a auditorías a los importadores si hubiera problemas en sus declaraciones, y había otros instrumentos, herramientas y técnicas para combatir el fraude e identificar los auténticos servicios involucrados y su costo.

12. Varios Miembros señalaron que la estructura del Acuerdo no había cambiado desde su entrada en vigor hacía 20 años y que la propuesta perturbaría gravemente a la industria y al comercio que habían basado su actividad en el trato particular de la valoración recogido actualmente en el Acuerdo. Algunos Miembros se preguntaron cuál sería la justificación económica de incluir el costo de los servicios realizados en el país de importación. Al no incluir los servicios financiados en el interior en el valor en aduana, el Acuerdo, en su estructura actual, creaba un incentivo económico para el uso de los servicios financiados en el interior. Otro Miembro explicó que la exención en el marco del apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 se debía a que la disposición se refería a los servicios realizados en el país de importación.

13. Otro Miembro expresó el temor de que la inclusión de esos servicios en el valor en aduana inflaría el precio de importación que en última instancia sería pagado por el consumidor del mercado interno. Otro Miembro, aunque reconocía los efectos beneficiosos de la propuesta para la recaudación de ingresos en el país importador, señaló que podría crear un problema de doble imposición a los importadores. El costo de un servicio proporcionado por el comprador podía haber estado sometido a la imposición interna y podía ser de nuevo gravado en forma de un derecho de importación. Por consiguiente, el importador podría pagar dos veces un impuesto sobre este servicio.

Propuesta 3: El método residual previsto en el artículo 7 para determinar el valor en aduana debería incluir todas las demás eventualidades no expresamente previstas, a fin de permitir la

valoración basada en el precio en el mercado interno o en el precio de exportación en el país tercero con los ajustes que procedan.

14. El autor aclaró que la propuesta tenía por objeto incluir entre los métodos permitidos por el artículo 7 del Acuerdo dos métodos actualmente prohibidos de determinar el valor de las importaciones a efectos aduaneros. El primero (actual apartado c) del artículo 7) era el precio en el mercado nacional del país exportador (no del país importador); y el segundo (actual apartado e) del artículo 7) era el precio de las mercancías vendidas para la exportación a un país distinto del país de importación. Señaló que esos precios se utilizaban actualmente en otros acuerdos como el Acuerdo Antidumping y aclaró que el artículo 7 y estos dos métodos adicionales propuestos solamente se utilizarían en última instancia cuando los demás métodos no se pudieran utilizar. Un Miembro expresó su apoyo a la propuesta, indicando que facilitaría el trabajo de las administraciones de aduanas al establecer el valor en aduana de productos nuevos e innovadores, cuando no se pudieran aplicar los demás métodos del Acuerdo.

15. Varios Miembros formularon diversas preguntas sobre la necesidad de cambiar la conocida disposición del Acuerdo que prohibía el uso de esos dos métodos de determinación del precio en el marco del artículo 7 del Acuerdo. Se consideró que el historial de las negociaciones que llevaron a la prohibición de esos métodos podía ser un importante elemento de examen.

16. Varios Miembros se preguntaron cómo se podría obtener la información necesaria para determinar los dos métodos propuestos de determinación del precio. En el caso de que se utilizara el precio de un catálogo al por mayor o el precio de un centro comercial, se señaló que esos precios no eran fiables, podían inflar el valor en aduana y con frecuencia eran solamente el punto de partida para la negociación de precios a la baja por parte de los compradores. Algunos Miembros indicaron que en el mercado interno de los países exportadores, los precios podían ser considerablemente más elevados en razón de los gastos generales y los gastos de publicidad, de promoción y de otra índole en que se incurría en el mercado interno. Además, quizás fuera necesario examinar los libros financieros del exportador para comprobar esos gastos adicionales. Ello podría ser problemático y el resultado final podría ser la utilización de valores en aduana elevados y ficticios. En cuanto al valor de las exportaciones a un tercer país, se preguntó qué tercer país se escogería, si el de los precios más elevados o el de los precios más bajos. ¿Intentarían las administraciones de aduanas averiguar el mejor precio entre terceros países y cómo determinarían el precio que mejor reflejaba el valor de la transacción? Además, ¿cómo se obtendría la información necesaria para introducir los "ajustes que procedan"? El autor señaló que en esos otros acuerdos existían ya las explicaciones necesarias para establecer los precios propuestos, por lo que no veía dificultades en obtenerlas y utilizarlas en este contexto. Además, aclaró que los precios no se podrían utilizar directamente sino que habría que introducir ajustes, por ejemplo con respecto a la base FOB o CIF, para diferentes cantidades, etc. Todos estos ajustes existían ya en el marco del Acuerdo.

17. Algunos Miembros consideraron improcedente remitirse a un acuerdo en el contexto de la discusión de otro, pues existía el riesgo de mezclar conceptos. Se precisó que el objetivo del Acuerdo Antidumping era la determinación de la existencia de una diferencia de precios que justificaba el examen del precio en el mercado interno del país exportador para compararlo con el precio de exportación impuesto al país importador o a un tercer país. El objetivo del Acuerdo sobre Valoración en Aduana era determinar el valor de la transacción entre el exportador y el importador. Ambos objetivos eran completamente diferentes, por lo que no se podían comparar los conceptos de precios. El autor explicó que la propuesta no estaba destinada a introducir conceptos de otros acuerdos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana y que la referencia al Acuerdo Antidumping era simplemente incidental. Su delegación estaba comprometida a aplicar el valor de transacción, y si ese valor no se podía determinar, a aplicar los métodos siguientes del Acuerdo. Si todos esos métodos fracasaban y la administración de aduanas llegaba a la situación del artículo 7, el autor deseaba poder utilizar los dos precios propuestos que en la actualidad estaban prohibidos.

18. Otro Miembro recordó a las delegaciones la importancia de las notas interpretativas del artículo 7, que subrayaban la importancia de utilizar valores previamente determinados y que, en el marco del artículo 7, se deberían utilizar con una flexibilidad razonable en su aplicación. Del mismo modo, el propio Acuerdo aclaraba que esa flexibilidad podía ser posible dentro de las disposiciones del artículo 7 y que era innecesario ir más allá.

Resumen

19. Algunos Miembros apoyaron las propuestas y sus objetivos. Sin embargo, la mayoría de quienes se pronunciaron sobre las propuestas reconocieron las auténticas dificultades de la lucha contra el fraude y los problemas experimentados por el autor de las propuestas. Dicho esto, no quedaron convencidos de que las propuestas constituyeran las soluciones adecuadas. De hecho, algunos de esos Miembros habían experimentado los mismos problemas y los habían abordado utilizando mecanismos e instrumentos sin salirse de los parámetros del Acuerdo.

C. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL (WT/GC/49)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

El Presidente del Consejo General ha recibido del Presidente del Comité de Valoración en Aduana la siguiente comunicación, de fecha 14 de septiembre de 2001.

En relación con su carta de 2 de agosto de 2001, en la que solicita que se celebren consultas sobre la cuestión relacionada con la aplicación contenida en el inciso 56 del documento JOB(01)/112 y que se formulen propuestas en cuanto a la línea de acción que conviene adoptar, le remito adjunto el informe sobre tales consultas.

Dada la falta de consenso, únicamente puedo facilitarle un resumen fáctico de mis consultas. No obstante, creo que el informe proporciona una idea bastante precisa de la situación actual en lo tocante al inciso 56, que espero le sea de ayuda para su labor futura referente a las cuestiones relacionadas con la aplicación.

Informe del Presidente del Comité de Valoración en Aduana

1. Tras la reunión extraordinaria que el Consejo General celebró el 15 de diciembre de 2000, en la que el Presidente del Comité de Valoración en Aduana informó sobre los resultados del examen que había llevado a cabo de las tres primeras propuestas formuladas por la India (G/VAL/36), el Presidente del Consejo General realizó el 10 de abril de 2001 una consulta informal en la que se debatieron las tres propuestas iniciales junto con otras tres propuestas adicionales. El representante de la India hizo algunas aclaraciones referentes a las propuestas, y se plantearon preguntas adicionales. Sin embargo, las consultas no fueron concluyentes, por lo que era necesario seguir examinando los asuntos en cuestión.

2. Tras las consultas celebradas ulteriormente, el Presidente del Consejo General y el Director General distribuyeron el 13 de julio de 2001, bajo su propia responsabilidad, un documento en que se enumeran los elementos sobre los que, a su juicio, podría llegarse prontamente a un acuerdo y se propone que determinadas cuestiones se sometan a la consideración de los órganos subsidiarios (JOB(01)/112). Siguiendo la numeración de incisos empleada en un documento presentado por el Uruguay, la Argentina, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Tailandia, el inciso 56 (relativo al antiguo inciso 1 del documento G/VAL/36), referente a la valoración en aduana, reza como sigue:

"El Consejo General debe encomendar al Comité de Valoración en Aduana que continúe su labor de examen de las cuestiones y necesidades específicamente identificadas por los Miembros en relación con el logro de una aplicación adecuada del Acuerdo y, en particular, de las preocupaciones relacionadas con el fraude. A este respecto, el Consejo General encomienda al Comité que realice un estudio y presente un informe, que abarcará la identificación de los métodos prácticos disponibles y de la asistencia técnica adecuada necesaria, para responder a esas preocupaciones. El estudio deberá, entre otras cosas, evaluar la posible utilización, para hacer frente al fraude, de mecanismos tales como acuerdos multilaterales o bilaterales de cooperación, la Decisión de Marrakech sobre esta cuestión y la aplicación de los instrumentos pertinentes de la OMA o de otros instrumentos internacionales pertinentes.

Fortalecimiento de la asistencia técnica: debe llegarse rápidamente a un acuerdo sobre el texto que tiene ante sí el Comité de Valoración en Aduana y hacerse referencia a él en un conjunto de decisiones que puede adoptar prontamente el Consejo General sobre la aplicación."

3. En una reunión informal que el Consejo General celebró los días 30 y 31 de julio de 2001, los Miembros acordaron que determinadas cuestiones pendientes relacionadas con la aplicación, contenidas en el documento JOB(01)/112, debían someterse a los órganos competentes de la OMC o a sus Presidentes para que las examinaran y presentaran un informe al respecto. En lo tocante a la valoración en aduana, los Miembros acordaron el siguiente mandato:

"Que el Presidente del Consejo General pida al Presidente del Comité de Valoración en Aduana que celebre consultas sobre la base del informe distribuido con la signatura G/VAL/36 con el fin de sugerir al Presidente del Consejo General una línea de acción apropiada el 15 de septiembre, a más tardar."

4. El 6 de agosto de 2001, distribuí un fax en el que resumía los debates anteriormente celebrados en el Comité sobre esta propuesta (inciso 1 del documento G/VAL/36) y pedía que se formularan observaciones y sugerencias sobre posibles soluciones que pudiesen ayudarme a elaborar el informe. Se recibieron cinco respuestas presentadas por Colombia; Hong Kong, China; el Japón; Tailandia y Singapur, que se distribuyeron a todos los Miembros.

5. Posteriormente, convoqué una reunión informal del Comité para el 10 de septiembre de 2001, en la que presenté cuatro posibles soluciones que se habían sugerido en diferentes momentos con respecto a la cuestión de la aplicación. A continuación, se reproducen esas posibles soluciones:

- **Propuesta de la India (inciso 1 del documento G/VAL/36)**

"Se incluirá en el Acuerdo una solución multilateral que permita, en casos dudosos, que las administraciones de aduanas de los países importadores soliciten y obtengan información sobre los valores de exportación en un plazo determinado."

- **Texto presentado por el Presidente y el Director General (inciso 56 del documento JOB(01)/112)**

"El Consejo General deberá disponer que el Comité de Valoración en Aduana continúe su labor de examen de las cuestiones y necesidades específicamente identificadas por los Miembros en relación con el logro de una aplicación adecuada del Acuerdo y, en particular, de las preocupaciones relacionadas con el fraude. A este respecto, el Consejo General dispone que el Comité realice un estudio y presente un informe, que abarcará la identificación de los métodos prácticos disponibles y de la asistencia técnica adecuada necesaria, para responder a esas preocupaciones. El estudio deberá, entre otras cosas, evaluar la posible utilización, para hacer frente al fraude, de mecanismos tales como acuerdos multilaterales o bilaterales de cooperación, la Decisión de Marrakech sobre esta cuestión y la aplicación de los instrumentos pertinentes de la OMA o de otros instrumentos internacionales pertinentes."

- **Texto alternativo propuesto por el grupo de países en desarrollo "de ideas afines"**

"En consonancia con el párrafo 2 de la Decisión de 1994 relativa a los casos en que las administraciones de aduana tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, los Miembros convienen en que cuando la administración de aduanas de un país importador tenga dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, la administración de aduanas del país exportador comunicará, si así se le solicita, prontamente información sobre el valor de exportación declarado por el exportador."

- **Texto propuesto por el Sr. Pettigrew**

"Los Ministros convienen en que, cuando la administración de aduanas de un Miembro importador tenga motivos razonables para dudar de la exactitud del valor declarado, podrá solicitar ayuda a la administración de aduanas de un Miembro exportador para averiguar el valor del producto importado. En ese caso, el Miembro exportador ofrecerá, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos, cooperación y asistencia para la investigación de cualquier fraude."

6. En esa reunión, la India aclaró que su posición incorporaba tanto su propia propuesta como el párrafo titulado "Texto alternativo propuesto por el grupo de países en desarrollo "de ideas afines". Dos Miembros manifestaron su apoyo a la posición de la India. Todos los Miembros reconocieron que el problema del fraude era un problema real. No obstante, la mayoría de los Miembros que hicieron uso de la palabra o formularon observaciones por escrito consideraron que se precisaba una solución práctica para ese problema y manifestaron su apoyo al texto propuesto por el Presidente y el Director General, ya que permitiría seguir estudiando el problema con objeto de hallar tal solución práctica. Algunos de esos Miembros añadieron que deseaban que se hicieran algunas aclaraciones adicionales con respecto a la labor que desempeñaría el Comité, los plazos y los objetivos concretos que se perseguían, aunque dijeron que podían aceptar el texto del Presidente y del Director General como una solución práctica. Un Miembro sostuvo que el texto del Presidente y del Director General no contenía todos los elementos necesarios que recogía el texto propuesto por el grupo de países en desarrollo "de ideas afines". Se acordó que yo seguiría celebrando consultas sobre el particular con objeto de elaborar un texto alternativo.

7. Tras esta reunión, dos Miembros, la India y Noruega, presentaron sendas propuestas destinadas a salvar las diferencias y hallar un consenso sobre la cuestión que nos ocupa. Dichas

propuestas, distribuidas el 13 de septiembre a todos los Miembros en un fax, se debatieron en una reunión informal celebrada el 14 de septiembre. A continuación, se reproduce el texto de las mismas:

Propuesta presentada por la India

"En consonancia con la *Decisión de 1994 relativa a los casos en que las administraciones de aduana tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado*, los Miembros acordaron lo que sigue:

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de una respuesta del importador, con arreglo a lo estipulado en el párrafo 1, la administración de aduanas de un país importador tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, también podrá pedir a la administración de aduanas del país exportador que facilite información sobre el valor de exportación declarado por el exportador. La administración de aduanas del país exportador facilitará prontamente esa información, siempre que disponga de ella.

Las autoridades aduaneras del país exportador no tendrán la obligación de verificar la exactitud del valor de exportación declarado por el exportador a estos efectos. Además, esa información será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, y únicamente será utilizada por las autoridades competentes para verificar la veracidad o exactitud del valor declarado por el importador."

Propuesta presentada por Noruega

"Reconociendo las preocupaciones legítimas manifestadas por las administraciones aduaneras de varios/ciertos Miembros importadores acerca de la exactitud del valor declarado, deberá disponerse que el Comité de Valoración en Aduana identifique los métodos prácticos disponibles para responder a tales preocupaciones. Ese cometido deberá incluir, entre otras cosas, la determinación de los medios mediante los cuales se podría solicitar asistencia a los Miembros exportadores y de la asistencia técnica adecuada necesaria, así como una evaluación de mecanismos tales como acuerdos multilaterales o bilaterales de cooperación, las Decisiones de Marrakech sobre esta cuestión y la aplicación de los instrumentos pertinentes de la OMA o de otros instrumentos internacionales pertinentes. Se deberá presentar, a finales de 2002 a más tardar, un informe al Consejo General, que incluya recomendaciones."

8. Varios Miembros valoraron la propuesta presentada por la India porque iba más allá del texto propuesto por el grupo de países en desarrollo "de ideas afines" para abordar preocupaciones previamente mencionadas por esos Miembros y, en consecuencia, manifestaron su apoyo a dicha propuesta. Unos pocos Miembros observaron que era preciso más tiempo para estudiar las propuestas y sus implicaciones. No obstante, muchos otros reiteraron las preocupaciones antes indicadas y señalaron que, en su opinión, la propuesta de la India no resolvía esas cuestiones y aspectos técnicos. A este respecto, se citaron como ejemplo la verificación de los valores de exportación, el carácter confidencial de la información objeto de procedimientos legales, la modificación de las disposiciones actuales del Acuerdo relativas a la carga de la prueba o el hecho de que la legislación nacional de muchos Miembros no permitiría la divulgación de tal información. Esos Miembros volvieron a recalcar que lo que se precisaba era una solución práctica. Los que apoyaban la propuesta de la India dijeron que estaban convencidos de que en el segundo párrafo de dicha propuesta se abordaban esas preocupaciones de un modo satisfactorio. A su juicio, la propuesta ofrecería una solución inmediata al apremiante problema del fraude, que no era preciso seguir analizando en el Comité. Dos Miembros

hicieron notar que el hecho mismo de que los debates no dejaran de girar en torno a aspectos técnicos ponía de manifiesto la necesidad de proseguir el examen técnico de esta cuestión.

9. Los muchos Miembros que hicieron uso de la palabra para apoyar el texto presentado por el Presidente y el Director General indicaron también que estaban dispuestos a aceptar la propuesta de Noruega como una línea de acción apropiada que el Presidente del Comité podría sugerir al Presidente del Consejo General. Esa propuesta, además de reconocer la legitimidad de las preocupaciones de sus patrocinadores, permitiría determinar soluciones prácticas y formular recomendaciones y preveía un plazo para la presentación del informe pertinente. Sin embargo, los partidarios de la propuesta de la India observaron que ésta contenía elementos positivos para hacer frente a esas preocupaciones, como por ejemplo la cuestión de la confidencialidad y la verificación de datos. A su juicio, lo que se precisaba ahora era la voluntad política de aceptar una decisión a este respecto.

10. Todos admitieron que existen dificultades reales para combatir el fraude. Por lo tanto, cabe afirmar que hay un reconocimiento de ese problema. No obstante, sigue habiendo diferencias considerables en cuanto a cuál sería la solución apropiada entre los que apoyan la propuesta presentada por la India el 13 de septiembre y los otros muchos Miembros que respaldan el texto propuesto por el Presidente y el Director General o la variante del mismo plasmada en la propuesta de Noruega. Por consiguiente, no puedo decir que mis consultas hayan desembocado en un consenso ni estoy en condiciones de sugerir una línea de acción apropiada para la cuestión que me ha sido sometida por el Presidente del Consejo General.
